

LA CONTRAINSURGENCIA

**VIOLENCIA Y TERRORISMO
DE ESTADO EN MÉXICO**



PDPR-EPR

LA CONTRAINSURGENCIA

VIOLENCIA Y TERRORISMO DE ESTADO EN MÉXICO

Documentos internos y publicaciones
de *El insurgente*
PDPR-EPR



Editorial del Pueblo
PDPR-EPR

LA CONTRAINSURGENCIA

Violencia y terrorismo de Estado en México

Editorial del Pueblo (abril 2025)

PDPR-EPR

Se autoriza la reproducción total del presente material, siempre y cuando coadyuve al desarrollo de la conciencia crítica y revolucionaria, citando la fuente.

Ante la dictadura de opinión, la censura por parte del Estado y los monopolios de la comunicación: imprímase, distribúyase y promocióñese para que nuestro pueblo conozca su historia y rompa sus cadenas.

ÍNDICE

PRÓLOGO / 9

I. LA CONTRAINSURGENCIA, ESTRATEGIA PARA
SOSTENER LA DICTADURA DEL CAPITAL / 13

II. NOTAS SOBRE LA CONTRAINSURGENCIA EN
MÉXICO / 35

III. LA CONTRAINSURGENCIA EN MÉXICO
(1994-2018) / 43

IV. CONTRAINSURGENCIA EN LOS GOBIERNOS
PANISTAS FOX-CALDERÓN (2000-2012) / 55

V. LA CONTRAINSURGENCIA EN OAXACA / 77

VI. LA DESAPARICIÓN FORZADA EN MÉXICO Y
LA CONTRAINSURGENCIA / 85

VII. LA GUERRA DE
BAJA INTENSIDAD (GBI) / 123

VIII. TERRORISMO DE ESTADO Y LA
CONTRAINGSURGENCIA EN EL S XXI / 149

IX. ANEXOS: ARTÍCULOS PUBLICADOS EN EL
INSURGENTE (2021 A LA FECHA) / 159

PRESENTACIÓN

La contrainsurgencia en México es parte de la política de gobierno del Estado mexicano, asumida desde los años 60 del siglo pasado; ha tenido continuidad a través de las diferentes juntas administrativas y personeros que ocupan la silla presidencial, independientemente del partido electoral del que provengan.

La continuidad tiene explicación en la existencia de una cúpula policiaco militar que desde esos años ha centralizado la labor de contrainsurgencia para combatir al enemigo interno, es decir, al pueblo organizado, para garantizar la existencia del régimen social fincado en la explotación del hombre por el hombre.

La existencia de las medidas contrainsurgentes recae también en la responsabilidad de los políticos de oficio, ya sea que éstos se desempeñen como funcionarios públicos o sean parte del poder Legislativo o Judicial, desde éstos se ha revestido de legalidad jurídica y constitucional a la política contrainsurgente que ha cobrado miles de víctimas en el país.

De mediados de los años 60 a finales de los 90 del siglo pasado, los gobiernos priistas desencadenaron la violencia contrainsurgente contra las masas obreras, campesinas, estudiantiles y de profesionistas que ejercieron crítica política al régimen; implementaron una larga campaña de contrainsurgencia para aniquilar a las fuerzas de la revolución, expresadas en la existencia de grupos, organizaciones y partidos revolucionarios que impulsaban la lucha por la transformación del país, en función de los intereses populares; y en la recta final, cerca del nuevo siglo, la política contrainsurgente abarcó como víctimas a nuevos sectores, incluidos quienes se sumaron, de forma honesta, a la lucha electoral para cambiar al régimen.

Hoy quedan confirmadas las denuncias que hicieron víctimas de la violencia del Estado, familiares y organizaciones políticas de masas a las cuales posteriormente se sumaron las de derechos humanos, por la persistencia de la movilización política de masas que, al sostener de manera ininterrumpida la denuncia política, hicieron posible la visibilización del cometido de crímenes de lesa humanidad.

Miles de víctimas registra la historia que fueron objeto de desaparición forzada, ejecución extrajudicial, ejecuciones sumarias, tortura sistemática, encarcelamiento injusto, desplazamiento forzado y masacres de campesinos e indígenas y pueblos arrasados, borrados del mapa; con el objetivo de hacer valer los intereses oligarcas y aniquilar la voluntad popular de combatir, bajo las directrices de la

contrainsurgencia.

Ésta, en México, siempre ha tenido vínculo orgánico con el imperialismo norteamericano, a través de la cúpula militar, la cual ha sido la responsable intelectual y material de la contrainsurgencia en toda la historia contemporánea del país, responsable de los crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, de Estado.

La cúpula militar, que sigue implementando la contrainsurgencia en México, ha sido organizada, estructurada, adiestrada y adoctrinada en las instituciones de seguridad nacional estadounidenses, que sistematizan las diversas experiencias de la contrainsurgencia que se han aplicado contra los diferentes pueblos del mundo, donde destacan la doctrina francesa, inglesa y actualmente, la israelí.

La “alternancia” política hacia la derecha de principios de siglo, se caracterizó por reproducir al pie de la letra y profundizar la política contrainsurgente dictada directamente por el imperialismo norteamericano, dotó de mayor legalidad el vínculo, antes velado, con el aparato contrainsurgente estadounidense.

Con el gobierno de Vicente Fox se registró una oleada de desapariciones forzadas en el país producto de esta política, crímenes de lesa humanidad que no se reconocieron en su momento, principalmente por quienes promovieron “el voto útil”, con ello se convirtieron en corresponsables de la nueva oleada de violencia contra el pueblo.

De la misma forma se recrudeció la represión contra el movimiento magisterial, obrero y campesino, donde se intensificó la militarización de los cuerpos policiacos y la creación de fuerzas represivas conformadas por militares para tareas de seguridad pública.

Durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (FCH) se dio continuidad a la política de contrainsurgencia, que tomó forma en la política de terrorismo de Estado; la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada fue la cortina de humo para enmascarar la implementación de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) en México, que se tradujo en la guerra contra el pueblo, es decir, bajo el esquema de eliminar al enemigo interno.

Dado el carácter ilegítimo de FCH y la condición espuria de su gobierno, se apoyó en el puntal del Ejército mexicano y en todo el andamiaje policiaco militar para sostener su gobierno sobre la base de la violencia organizada, sistemática y generalizada contra las masas trabajadoras, con lo que se dio un intenso proceso de militarización y violencia desenfrenada contra el pueblo, donde la impunidad y

protección a los que le daban vida al aparato policiaco militar fue descarada.

La esencia contrainsurgente quedó de manifiesta en los lineamientos para el actuar de los cuerpos policiaco militares en labores de seguridad: tirar a matar a todo lo que se mueva, bajo esta directriz se cometieron infinidad de crímenes de lesa humanidad.

Esta política eminentemente reaccionaria y antipopular cobró cientos de miles de víctimas, así el fenómeno de la desaparición forzada de personas, la ejecución extrajudicial y el desplazamiento forzado adquirió un carácter incuantificable; resultado concreto de la aplicación de la política contrainsurgente en México.

Con Enrique Peña Nieto, la GBI adquiere nuevas expresiones, el aparato policiaco militar ejerció la represión contra el movimiento magisterial-popular y estudiantil-popular. Su política de gobierno se fincó en la “mano dura”, con lo que no le “tembló la mano” al igual que a Calderón, para que los cuerpos policiaco militares desencadenaran la violencia contra el pueblo, de donde se desprenden miles de víctimas del terrorismo de Estado.

Las directrices de la contrainsurgencia toman cuerpo en la orden de la cúpula militar de abatir delincuentes al amparo de la noche. La masacre de Tlatlaya y lo acontecido en Iguala, Guerrero en 2014, nos ilustra la práctica contrainsurgente durante esta administración.

Desde Fox hasta Peña Nieto, la política de la contrainsurgencia pasó a través del Plan Mérida, que se tradujo en la administración y dirección de la contrainsurgencia en México desde el Pentágono, cuyo objetivo siempre ha sido aniquilar el movimiento revolucionario, infundir terror en el pueblo para que se desmovilice o no se organice fuera de las estructuras corporativizantes, para evitar el estallido social, siempre latente en nuestro país, por las condiciones de explotación y opresión que vive el pueblo.

La militarización del país, durante la administración de Peña Nieto, se intentó elevar a rango constitucional por medio de la Ley de Seguridad Interior, fincada en la doctrina de la GBI; propuesta de ley que no se aprobó por el fuerte rechazo y descontento de las masas movilizadas durante su administración.

Propósito que se logró concretar con la llegada de AMLO a la administración federal, irónicamente mientras muchos esperaban el regreso del ejército a sus cuarteles y que los crímenes de lesa humanidad fueran juzgados y se convirtieran en cosa del pasado, bajo su mandato, se incrementó la presencia militar en las calles

y el Ejército mexicano obtuvo mayor poder, se legalizó su participación en asuntos de seguridad pública y se le dotó de mayores espacios en el poder económico y político, así como garantías de impunidad.

La política de la GBI no se abandonó, por el contrario, fue dotada de legalidad constitucional y un amplio marco jurídico; en lugar de desmontar la estructura contrainsurgente bajo el mando de la cúpula militar, ésta fue fortalecida, protegida y premiada por su largo historial represivo contra el pueblo de México.

Con los gobiernos morenistas la violencia contra las masas trabajadoras se mantiene, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales continúan como prácticas de terrorismo de Estado; basta con revisar la estadística de las más de 10 mil desapariciones forzadas en lo que va del actual sexenio, para confirmar que la GBI como política de gobierno tiene continuidad transexenal.

La GBI aplicada en México en la actual administración, incorpora con mayor fuerza la estrategia contrainsurgente que deviene de la experiencia sionista, de igual manera se fortaleció y profundizó el asistencialismo como un componente activo de la contrainsurgencia, cuyo objetivo es lograr el control de la población ganando mentes y corazones, a través de los programas asistenciales.

A pesar de la constante aplicación de la contrainsurgencia en México, la voluntad popular de combatir no se extingue, por el contrario, la llama de la revolución sigue viva en nuestro país y su necesidad se torna apremiante ante las actuales condiciones.

Desde la trinchera del PDPR-EPR, continuamos desarrollando la lucha por el socialismo y hacemos frente a las medidas contrainsurgentes que buscan aislar y aniquilar al movimiento revolucionario; hombres y mujeres conscientes, nos mantenemos firmes en la lucha anticapitalista, antiimperialista y por una patria socialista.

El presente material es un conjunto de documentos internos y públicos, algunos de ellos publicados en *El insurgente*, que abordan el tema de la contrainsurgencia en México, para abonar al análisis y discusión en torno a las necesidades del pueblo para superar su condición de explotado y oprimido, así como hacerle frente a la política de contrainsurgencia, que en México es de larga data.

República mexicana, marzo de 2025

**I. LA
CONTRAINSURGENCIA,
ESTRATEGIA
PARA SOSTENER
LA DICTADURA
DEL CAPITAL**

MARCO HISTÓRICO Y CATEGORÍAS

La contrainsurgencia ha sido la doctrina militar del imperialismo norteamericano, sobre ésta se ha fincado el intervencionismo en todo el mundo para sostener la dictadura del capital, el dominio de los monopolios y la expoliación imperialista.

La guerra injusta contra Vietnam es el claro ejemplo del intervencionismo imperialista y la aplicación de los principios de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) con doble propósito: destruir el gobierno socialista del norte y sostener la dictadura capitalista en el sur.

Los principios de la GBI comprenden innumerables operaciones político militares, abiertas como encubiertas, lo que nos indica la concepción militar imperialista para emplear la fuerza militar en la cruzada mundial contra gobiernos y movimientos que se plantean la transformación social fuera de la lógica del capitalismo.

Desde dicha concepción se considera a todo movimiento revolucionario o gobierno de posición progresista como amenaza “principal contra la seguridad de los Estados Unidos”, de ahí que el imperialismo norteamericano “tome la ofensiva”, diferente a la postura defensiva de la “disuasión”, para superar el peligro revolucionario.

Desde la concepción militar norteamericana se define como objetivo militar a todo movimiento revolucionario que ponga entredicho la dictadura del capital, desde dicha concepción “superar el peligro revolucionario” significa aniquilar militarmente toda expresión de lucha revolucionaria. La GBI significó en la era de Reagan el toque de corneta que convoca a las fuerzas reaccionarias al intervencionismo mundial.

La esencia de la doctrina militar fincada en la GBI estriba en señalar que no se trata de una guerra en el sentido tradicional, es decir, la confrontación de dos ejércitos regulares en un campo de batalla común; según expertos militares, es la batalla en donde está en juego “nada menos que la supervivencia de nuestro país y nuestro modo de vida”, he ahí de nueva cuenta la defensa del modo de producción capitalista que se lleva a través de un ejército regular con unidades especializadas para combatir a los revolucionarios en todo el mundo, éstos por lo

regular desprovistos de un ejército regular, lo que lleva a discernir que el combate es entre un ejército regular con todos los adelantos tecnológicos militares contra unidades irregulares carentes de muchos elementos técnicos que los ponen en una condición desfavorable en el terreno técnico-militar, más no en lo político.

Lo que señaló como táctica militar en los años ochenta tenía como fundamento la concepción de asumir un mundo donde "...el escenario de los enfrentamientos habrá de integrarse con base en una sucesión continua de crisis de rehenes, operativos pacificadores, misiones de rescate y tácticas contrainsurgentes o, como se ha denominado, 'guerra de fronteras imprecisas'", se configuró como una realidad donde el imperialismo norteamericano se erigió como gendarme mundial y paso a paso en el ganar "estas pequeñas guerras" se fundamentó la seguridad nacional norteamericana.

Dicha concepción se erigió sobre la experiencia militar en las guerras de intervención, de anexión, de expoliación y contrarrevolucionarias en todo el mundo, las mentes contrainsurgentes son los "guerreros" de las guerras en Vietnam y el Tercer Mundo que después de organizar el asesinato masivo en nombre de la libertad emergen como los teóricos de la GBI: Neil C. Livingstone, Oliver North, Caspar Weinberger,... que en su momento expresaron que "hoy en día, no faltan los adversarios que buscan minar nuestra seguridad al atentar persistentemente contra nuestros intereses mediante la realización de guerras sombrías basadas en la guerrilla, los asesinatos, el terrorismo y los actos subversivos, con la esperanza de descubrir un punto débil en nuestro aparato defensivo", en esencia se sostiene una concepción reaccionaria fincada en el anticomunismo.

Los años ochenta del siglo pasado constituyeron el marco donde se dio la modificación de todo el aparato de seguridad nacional norteamericana en torno a la GBI, todo cuanto se realizó fue en función de sistematizar la estrategia y táctica contrainsurgente que se expresó en lo operativo en la existencia de fuerzas especiales para los operativos contraguerrilleros: Fuerzas para Operaciones especiales del Pentágono ("Boinas Verdes" del ejército, las unidades navales, aéreas y terrestres de la marina y comandos de élite); en operaciones encubiertas, "Fuerza Delta", la Unidad Militar 160 de la Fuerza Aérea (los "Cazadores Nocturnos") y los organismos paramilitares organizados por la CIA.

Toda la estrategia y táctica de la GBI está sustentada en la concepción anticomunista, el espíritu antisoviético fue el argumento para fundamentar el

I. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

peligro “para la seguridad norteamericana, sus intereses y su modo de vida”. La GBI en esencia son estrategias y tácticas especializadas de la guerra sobre la base de una concepción militarista.

Durante la administración Reagan la doctrina de la GBI se institucionalizó como política de seguridad. El “espectro de la guerra” según el Pentágono hace una división de los conflictos armados en los niveles bajo, mediano y alto en función del grado de fuerza y violencia. En la *guerra de baja intensidad* contempla la confrontación a nivel de guerra de guerrillas y unidades irregulares; el enfrentamiento regional donde intervienen ejércitos regulares y armas modernas constituyen *guerras de mediana intensidad*; y una conflagración mundial o una guerra nuclear, son consideradas *guerras de alta intensidad*.

La GBI es una doctrina imperialista para combatir la revolución proletaria a nivel internacional, su aplicación va desde los operativos contrainsurgentes o proinsurgentes, tal planteamiento queda de manifiesto en el *informe/PGBI*, “*es el apoyo diplomático, económico y militar que se otorga a un gobierno atacado por fuerzas insurgentes o una fuerza insurgente que pretende liberarse de un gobierno adverso*”. Bajo esta concepción se llevó la guerra contrainsurgente en El Salvador, Nicaragua, Filipinas, Angola, Camboya y Afganistán.

La política de intervencionismo norteamericano en los años 80’s fue de la mano de la GBI, aplicó en todo el Tercer Mundo donde soplaban vientos de revolución, bajo dicha política se trataba de asegurar de dichas naciones los minerales estratégicos y recursos energéticos; de 1974-1980 las revoluciones de liberación nacional surcaron el Tercer Mundo para derrumbar regímenes coloniales, empezando por Vietnam, Angola, Mozambique, Etiopía, Irán, Granada y Nicaragua.

La doctrina de la GBI plantea que para asegurar los intereses norteamericanos se requiere frustrar todo movimiento revolucionario, para lo cual “*hay que identificar, raptar y eliminar a los líderes insurgentes*”, implica “*torturar y asesinar*”, cualquier “*medio está justificado*” para obtener la victoria. Contenido ideológico que hace apología al terrorismo de Estado, a los métodos fascistas, inspiración para los gobiernos autoritarios, fundamento para la imposición de Estados policíaco militares.

Desde 1947 el imperialismo norteamericano se empeñó en elaborar una estrategia y táctica contraguerrillera, lo hizo en Grecia para contener el avance de

las guerrillas comunistas; Vietnam significó un escenario de guerra contrainsurgente de donde extrajo importantes enseñanzas; la guerra contra Corea constituyó la confirmación de la necesidad de aplicar la estrategia y táctica de la GBI; las guerras de liberación nacional de finales de los 70's y principios de los 80's el imperialismo las enfrentó con la GBI; las revoluciones de Nicaragua y el Salvador enfrentaron la GBI bajo la tutela del gobierno de Reagan.

La GBI tiene origen en el gobierno de John F. Kennedy en 1961 con el objeto de detener el avance del comunismo en el Tercer Mundo, se trataba de un mandato totalizador para elaborar una estrategia antiguerrillera para contener la insurgencia comunista.

La lucha por la emancipación de los pueblos, fincada en un inicio en la táctica de la guerra de guerrillas tiene un largo historial, en la historia moderna fue empleada por los españoles insurgentes en contra de los franceses, durante las guerras napoleónicas; fue impulsada por los indígenas de América del Norte contra los inmigrantes blancos; los cubanos contra España colonialista; los insurgentes filipinos dirigidos por Aguinaldo contra el ejército norteamericano (1899); lo mismo hizo Sandino contra los infantes norteamericanos en la década del veinte, por regla todo movimiento independentista o de liberación nacional retoma dicha táctica militar que permite acumular fuerzas.

La administración Kennedy tomó de modelo el caso malayo para combatir la insurgencia comunista en Asia. En Malasia, entre 1948 y 1956 operó el movimiento guerrillero comunista contra la dominación inglesa, ésta la contuvo con medidas militares y a la vez implementó decisiones políticas que anularon las banderas políticas de la insurrección.

La táctica militar consistió en el sitio limitado en torno a la base política insurgente; utilizada también en la lucha antiguerrillera contra el movimiento de liberación en Filipinas (Hukbalahap), complementada con las medidas de la amnistía, la rehabilitación de los insurgentes desertores y otorgamiento de viviendas.

Para 1961 a pesar de las experiencias contrainsurgentes señaladas, el Pentágono aún no tenía una concepción contrainsurgente totalizadora, ésta se materializó con la elaboración de la GBI que englobaba toda la experiencia contrainsurgente del imperialismo. Se considera que a partir de 1962 inicia la “era de la contrainsurgencia”, el objeto de su aplicación se da en Laos, Tailandia, Vietnam del Sur, Colombia,

I. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

Venezuela, Bolivia, Irán, Indonesia y Ecuador, en todos ellos se desarrollaban movimientos revolucionarios.

La concepción contrainsurgente estaba fincada en la seguridad nacional, la cual debe garantizar la “contención de la insurgencia comunista”, es obvio que el contenido es anticomunista y antisoviético que sustenta la “defensa interna” en contra de los movimientos revolucionarios, éstos sin excepción son vistos como la promoción desde la URSS.

La táctica contrainsurgente consiste en el combate a los movimientos revolucionarios con “acciones equilibradas”: mejoramiento de las destrezas militares y policíacas mediante el entrenamiento y la asesoría; el fomento del desarrollo a través de la ayuda económica; la presión para la realización de reformas sociales y políticas, a la vez, reforzamiento de sindicatos, agrupaciones juveniles y partidos políticos no comunistas. En pocas palabras, arrebatar las banderas de lucha a los comunistas, envenenar el entorno con la concepción anticomunista para fortalecer la reacción en todos los aspectos.

El programa contrainsurgente está fincado en la dependencia económica, política y militar de los países del Tercer Mundo con respecto al imperialismo norteamericano, toda ayuda sea económica o militar se transforma en deuda externa; la sujeción económica se troca en atadura política, ambas, en fortalecimiento de las bases para la imposición del desarrollo capitalista dependiente.

Como parte de la doctrina contrainsurgente la acción militar se refuerza con la “acción cívico-militar” que consiste en el empleo de las fuerzas armadas locales en proyectos que les permitan acercarse a la población, entre ellas están labores de alfabetización, vacunación, construcción de caminos e instalaciones sanitarias, auxilio en caso de desastre,... la acción cívico-militar tiene un alto contenido contrainsurgente, tiene por objetivo doble: ganar simpatía para las fuerzas armadas y el gobierno, a la vez, quitar banderas de lucha a la insurgencia, ganar el apoyo de la “población civil”.

Para los ejércitos tercermundistas el planteamiento consistió en “profesionalizar las unidades de oficiales”, consistía en cursos sobre el gobierno civil en programas de adiestramiento para participar en los procesos políticos de sus respectivos países, alejar a las fuerzas militares locales de la concepción de la defensa externa para adoptar la concepción de la seguridad interna y la contrainsurgencia. Un doble

propósito, contar con ejércitos sin dientes hacia el exterior y con colmillos hacia el interior.

Las dictaduras de Sudamérica y Centroamérica explican su existencia en el fundamento de la GBI, lo mismo sucede con la imposición de gobiernos policíaco militares que fundamentan su existencia ante la incapacidad del gobierno civil de mantener la paz y el desarrollo. La concepción contrainsurgente imperialista fundamenta que los militares son los únicos con vocación y disciplina para asumir un gobierno, la fundamentación la encontramos en la tesis de “sacar al ejército de los cuarteles para insertarlo en la vida del pueblo”.

Dicha tesis se transformó en dictaduras militares, los oficiales que recibieron cursos de contrainsurgencia en instalaciones militares norteamericanas asumieron la administración civil, el caso Argentina nos ilustra que tal tipo de gobierno implica el asesinato masivo.

La política imperialista poco a poco se afinó, en el campo de adiestrar a las policías locales en la concepción contrainsurgente se tradujo en la creación de una academia de policía en Estados Unidos para formar policías en el Tercer Mundo con una concepción que consistía en el mejoramiento de la administración policíaca, la modernización de las operaciones de comunicación e inteligencia, la enseñanza de métodos modernos de control de motines, y el adiestramiento de instituciones centralizadas de comandancia y control. El resultado, se exportaba la contrarrevolución por medio de la ayuda para combatir el fantasma del comunismo, es decir, se trataba de combatir toda expresión revolucionaria que se planteara la transformación radical de la sociedad.

La GBI adquirió su prueba y elaboración final en Vietnam, la táctica militar implementada por el Ejército de la República de Vietnam (ERV) consistió en destacar una compañía o batallón motorizado para perseguir a los insurrectos a lo largo de caminos y carreteras; localizada una unidad guerrillera del Frente Nacional de Liberación (FNL), el ERV se desplegaba al frente y los flancos del enemigo y atacaban protegidos por el fuego de fusilería y morteros. Dicha táctica se tradujo en violencia desenfadada contra la población.

Hasta 1964 Estados Unidos de América (EUA) participó en la guerra contrainsurgente en Vietnam por medio de asesores contrainsurgentes, envió de equipo militar, sólo hasta 1965 se enviaron tropas de combate terrestre. La táctica

I. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

consistió en que el ejército local se abocara a la destrucción del ELN.

En 1962 el escenario de la guerra se presentaba según informes de asesores militares norteamericanos de la siguiente manera: 16 mil guerrilleros del ELN; en contrapartida, 175 mil efectivos regulares del ERV, una guardia civil paramilitar de 67 mil efectivos, y una “fuerza autodefensiva” de campesinos armados con fusiles, de 54 mil hombres, en total, 216 mil efectivos contra 16 mil, una proporción de 18.5 hombres gubernamentales contra un guerrillero.

El plan contrainsurgente desde la perspectiva imperialista se mejoró y reforzó con el uso de helicópteros para crear puentes aéreos y cañones, proporcionar combatientes y bombas para el apoyo aéreo para cercar y destruir los principales puntos de la insurgencia vietnamita, denominada como Viet Cong (FNL). Además, se incluyó el empleo de químicos defoliantes (agente naranja) para despojar a la insurgencia de protección verde; para separar a la guerrilla de la población (para desecar el agua donde viven los peces) se promovió el “asentamiento estratégico”, es decir, la reubicación forzosa de la población para concentrarla en aldeas estratégicas: recintos fortificados, vinculados entre sí por una red interdependiente para aislar y ubicar a los insurgentes del Viet Cong en la selva.

Dicha práctica no era nueva en las guerras injustas, la utilizó España en Cuba en 1895-1897; los británicos en la fase final de la guerra contra los bóers; por los franceses en Indochina, y los ingleses contra la sublevación malaya. En todos los casos se trata de aislar a los revolucionarios de la población y en todos ellos privó la violencia de clase, los colonialistas se ensañaron en los pueblos oprimidos.

En 1964, con Lyndon Johnson como presidente, asumió la tesis de que “el prestigio de Estados Unidos estaba en juego, que había llegado la hora de detener el avance comunista en Asia”, era el momento de “estadunizar” la guerra “contra Ho Chi Minh y el Viet Cong”, lograr una victoria rápida y exitosa, el mismo objetivo bajo la concepción contrainsurgente.

El programa contrainsurgente se trocó en mayor número de asesores militares, de 16 a principios de 1964, a más de 23 mil a finales de ese mismo año; incremento de envío de helicópteros y transportes tripulados por norteamericanos; mayor aprovisionamiento de la guardia civil paramilitar y de la policía nacional de Vietnam del Sur; acrecentamiento de los operativos contrainsurgentes comandados por la CIA que creó los equipos de acción popular que actuaban como fuerzas

“aldeanas” de seguridad; la creación de equipos antiterroristas para liquidar la red política de la insurgencia; y el bombardeo contra Vietnam del Norte.

No obstante, a la participación de gran envergadura norteamericana, para mediados de 1965, las fuerzas del FNL se estimaban en 34 mil efectivos, incrementó su prestigio y dominio en las provincias, controlaba la mayor parte del delta y la región norte de Vietnam del Sur.

Para finales de 1964, según los norteamericanos, Vietnam del Norte empezó a infiltrar unidades regulares a Vietnam del Sur para encarar la intervención norteamericana, éste fue el argumento para justificar la escalada contrainsurgente y reforzar la intervención norteamericana, se presentaba el conflicto interno desligado de los intereses de las masas oprimidas.

La respuesta norteamericana consistió en la intensificación del bombardeo a la infraestructura económica de Vietnam del Norte, lejos de disminuir la insurgencia, ésta se generalizó, se observó mayor resistencia y un proceso intenso de influjo de armas de norte a sur lo cual pone entredicho el planteamiento contrainsurgente, ahí donde existe voluntad de combatir el oprimido encontrará infinidad de maneras y formas para expresarla para encarar a sus explotadores y opresores.

En la primavera de 1965 EEUU definió tomar la dirección directa de la guerra contrainsurgente, consistió en desplegar suficientes divisiones con objeto de detener el avance de la “causa perdida en el sur”, posteriormente tomar la ofensiva en “áreas de gran prioridad” mediante la destrucción metódica de los focos guerrilleros para establecer un “proceso de pacificación”.

La táctica militar consistió en dispersar las tropas norteamericanas a lo largo de todo el país para erradicar a la insurgencia con la táctica de “buscar y erradicar”. Las ofensivas terrestres a gran escala eran precedidas por ataques aéreos y bombardeo de artillería, complementadas con aterrizaje de helicópteros en los flancos y la retaguardia del enemigo.

Dicha táctica buscaba obligar al ELN librar batallas campales, obligar a la confrontación a nivel de ejércitos regulares donde las fuerzas contrainsurgentes tenían superioridad técnica y material, ahí donde se dieron sólo desolación quedó, porque la táctica norteamericana estaba fundada en el entendido que “la guerra significa muerte y destrucción. La modalidad estadounidense de guerra es particularmente violenta, devastadora y desagradable. Creemos que en el empleo

I. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

de “cosas” –artillería, bombas, potencia generalizada de fuego-, para conservar la vida de nuestros soldados”. (General Fred C. Weyand)

La “pacificación” consistía en tener bajo control administrativo a la población rural para aislar a los revolucionarios y cobrar impuestos, para tal efecto se estableció una gigantesca organización de asesores “no militares llamada Apoyo para las Operaciones Civiles y el desarrollo Revolucionario (CORDS), cuyo objetivo era adiestrar y dirigir a las milicias aldeanas de defensa para restablecer la administración centralizada del gobierno títere de Saigón. Cabe destacar que cuando se habla de “milicias aldeanas de defensa” son en esencia grupos paramilitares, éstos adquieren forma y nombre según el país donde se promuevan, en Sudamérica se les conoció como “rondas campesinas” y toda una serie de denominaciones.

El CORDS se complementó con el programa de asesinatos denominado *Operación Phoenix*, inspirada por la CIA, campaña militar destinada a identificar y liquidar al aparato político del denominado Viet Cong, es decir, ubicar y aniquilar los estados mayores de la insurgencia vietnamita. El programa de contrainsurgencia fue redondeado con otro programa de amnistía y rehabilitación.

De 1970 a 1975, la etapa final de la guerra en Vietnam, la “vietnamización” y el repliegue de las fuerzas terrestres de Estados Unidos expusieron el carácter defensivo del ERV, para 1975 para la ofensiva final por la victoria el general Giap desplegó 17 divisiones convencionales equipadas con tanques y artillería; empleó la táctica de efectuar maniobras envolventes a lo largo de la región montañosa central del país, cada ataque fue arrollador.

Son discutibles las causas de la derrota norteamericana en Vietnam por una guerrilla “improvisada”, sin embargo, constituyó un laboratorio en vivo para la elaboración y perfeccionamiento de la concepción de la GBI, ésta emerge como la estrategia y táctica contrainsurgente para el siglo XX para contener el fuerte influjo de la revolución proletaria en el mundo. Vietnam significó la primera prueba de fuego de la contrainsurgencia (GBI), sin importar el resultado, de ahí emanaron las conclusiones para su perfeccionamiento.

DOCTRINA MILITAR DEL IMPERIALISMO, LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD

En 1985 se establece en Estados Unidos el Centro para la Guerra de Baja

Intensidad, año en el cual se le dio importancia política, militar y académicamente a la doctrina militar norteamericana que fincaba el intervencionismo.

La GBI contempla un renovado esfuerzo por las operaciones especiales paramilitares clandestinas de gran relevancia política a nivel internacional, tal fue el caso por sostener el gobierno títere de Vietnam del Sur, Ngo Dinh Diem o la campaña militar para asesinar en Bolivia al Che Guevara.

Desde la concepción militar norteamericana define “doctrina” como el conjunto de principios fundamentales por los cuales las fuerzas militares guían su acción en apoyo a los objetivos nacionales, es decir, la forma como las fuerzas están adiestradas, equipadas y organizadas para dirigir operativos militares.

En 1985, producto de un debate militar, el Pentágono adoptó una definición formal de la GBI, los jefes del Estado Mayor definieron:

La GBI es una lucha político militar limitada con fines políticos, sociales, económicos o psicológicos. Suele ser prolongada e incluye desde las presiones diplomáticas, económicas y psicosociales hasta el terrorismo y la insurgencia. En general, la GBI está circunscrita a un área geográfica y a menudo se caracteriza por la restricción en materia de armas, tácticas y nivel de violencia. (Dirección de Entrenamiento y Adoctrinamiento del

Ejército de Estados Unidos (TRADOC), Virginia, 1986.

El espectro de la GBI contempla seis “categorías de misión”:

- a) *Defensa interna en el extranjero*: la contrainsurgencia, incluye las acciones desarrolladas por Estados Unidos para ayudar a los gobiernos aliados que enfrentan amenazas insurgentes.
- b) *Proinsurgencia*: el patrocinio y apoyo de las insurrecciones anticomunistas del Tercer Mundo.
- c) *Operaciones contingentes en tiempos de paz*: actividades militares a corto plazo (misiones de rescate, maniobras de proyección de poder, ataques punitivos), que respaldan la política exterior de Estado Unidos.
- d) *Antiterrorismo*: las medidas ofensivas y defensivas adoptadas por las fuerzas armadas para prevenir o combatir el terrorismo internacional.
- e) *Operativos antidrogas*: el uso de los recursos militares para atacar y destruir

I. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

en el extranjero las fuentes de producción y distribución de narcóticos ilegales, y para cortar el flujo de estupefacientes hacia Estados Unidos.

- f) *Acciones pacificadoras*: el uso de las fuerzas estadounidenses (a menudo bajo los auspicios internacionales), con objeto de supervisar la ejecución de los acuerdos relativos al cese de hostilidades, o de establecer una valla entre los ejércitos rivales. (Contraainsurgencia, proainsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja

intensidad. Michel T. Clare y Peter Kornbluh, coordinadores. Grijalbo. p. 72)

Al abordar su estudio se plantea el contenido de cada uno de los componentes de la contrainsurgencia, cada uno de ellos nos indica alcances y límites, su aplicación dependerá de la situación revolucionaria o política a confrontar:

Defensa interna en el extranjero

En dicho componente se define la política injerencista norteamericana, incluye todas aquellas acciones de las agencias civiles y militares para “prevenir o derrotar a la insurgencia”, contempla acciones políticas y militares para aislar y aniquilar a la causa insurgente al quitarle apoyo popular. Ambas medidas las clasifican como Defensa interna y Desarrollo. Sus creadores la definen como “el arte y la ciencia de desarrollar y utilizar el poder político, económico, psicológico y militar de un gobierno, incluyendo a la policía y las fuerzas internas de seguridad, para evitar o vencer a la insurgencia”. (TRADOC)

La aplicación de medidas económicas políticas y sociales están en función de contener el descontento popular y ganar el apoyo para el régimen, acciones emprendidas por el “gobierno anfitrión” y supervisadas por la mano externa, es decir, el imperialismo.

Las fuerzas locales policíacas, paramilitares y militares son integradas de manera funcional a la contrainsurgencia unificada, el aparato policíaco es fundamental para penetrar y neutralizar la red de apoyo a la insurgencia. Se afirma que la policía es [“la primera línea de defensa” en contra de la actividad subversiva y que, en muchos países, “está mejor organizada, entrenada y equipada que los militares para obtener la información relacionada con la situación local, y para manejar niveles bajos de violencia, conspiración e insurrección”] p.74

La contrainsurgencia desde la perspectiva de la GBI plantea el combate político

a través del impulso de determinadas reformas, económicas, políticas y sociales para reducir la base social de la insurgencia, parte del entendido de que el causal es político, por ende, es el que se debe resolver para dar pauta a la iniciativa militar. Una reforma política lleva implícito el contenido contrainsurgente, es veneno puro para las masas trabajadoras, es la vacuna contrainsurgente.

El carácter intervencionista de la GBI se expresa en el planteamiento de que ésta “está diseñada para estabilizar, tanto política como militarmente, a las sociedades en crisis que, a menudo, están dominadas por minorías opulentas,...”; señala que el papel del imperialismo, en este caso norteamericano, “debe ser discreto”, el planteamiento es claro, el enfoque clásico de la contrainsurgencia, consiste en que, “el personal estadounidense debe desempeñar un papel de apoyo poco visible, a fin de tener la impresión de que el gobierno anfitrión es el que está al mando. Este papel de auxilio, ... está dirigido a respaldar a las fuerzas locales en la obtención de la pericia necesaria para manejar los principales aspectos de la guerra contrainsurgente: la acción cívica militar, los operativos psicológicos, las tareas de inteligencia y la lucha antiguerrillera”. (Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja intensidad. Michel T. Clare y Peter Kornbluh, coordinadores. Grijalbo. 76)

La *acción cívico militar* es el uso de las fuerzas militares en proyectos rurales de desarrollo, encaminados en ganar el apoyo de la población al gobierno en turno. En su definición establece, “implica la utilización predominante de las fuerzas militares locales en programas provechosos para toda la población. Estos abarcan las áreas de educación, adiestramiento, obras públicas, agricultura, transportación, comunicaciones, salud, salubridad, así como contribuciones en materia de desarrollo socioeconómico, que resultan útiles para mejorar la reputación de las fuerzas armadas”. (Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja intensidad. Michel T. Clare y Peter Kornbluh, coordinadores. Grijalbo.76)

El objetivo es lograr que la población campesina o popular tenga otra percepción del papel del ejército, que lo vean como “amigo del pueblo” y borrar su condición de clase, es decir, como el instrumento principal para ejercer la política de represión. El objetivo político militar que persigue es que la población tenga una opinión favorable al gobierno y ayude al aparato represivo a “localizar e inhabilitar” a cualquier fuerza insurgente.

Los *operativos psicológicos* están diseñados, al igual que la acción cívico-militar, para mejorar la imagen del gobierno, y en esa medida, *aislar y desacreditar*

I. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

el movimiento insurgente. Para tal efecto se requiere la utilización de diferentes canales de comunicación “con el objeto de crear conductas favorables al logro de las metas políticas y militares”, actividades de vital importancia en el entramado de la GBI.

Los operativos psicológicos consisten en difundir materiales auditivos, visuales e impresos para presentar de la mejor manera al gobierno opresivo y presentar a los insurgentes como una fuerza patrocinada por el extranjero, en el pasado el argumento era el patrocinio soviético. La otra parte de los operativos psicológicos consiste en la divulgación de documentos falsos de los insurgentes para promover tanto la desacreditación pública como la división entre sus filas.

Las *tareas de inteligencia* constituyen un componente importante de la contrainsurgencia. Ésta no puede ser operada si el enemigo no cuenta con información precisa sobre el apoyo de la población, conocimientos sobre las rutas de abastecimiento y las bases de operación de la insurgencia. La tarea de inteligencia está encaminada a la búsqueda de información sobre toda la estructura y operatividad de la insurgencia, de ahí que considere importante el planteamiento sobre “la valoración de los servicios de inteligencia en lo que toca a la infraestructura insurgente: sistema de dirección, control y comunicación, aparato de reclutamiento, apoyo logístico y organizaciones civiles”. (Contrainsurgencia, proinsurgencia y antiterrorismo en los 80. El arte de la guerra de baja intensidad. Michel T. Clare y Peter Kornbluh, coordinadores. Grijalbo.77)

Debe quedar claro que la tarea de inteligencia se basa en la práctica de la tortura como método de investigación, como técnica para obtener información, porque “una vez en poder de dicha información –que suele obtenerse mediante el interrogatorio formulado a los guerrilleros capturados y a sus simpatizantes-, las fuerzas gubernamentales pueden aislar y atacar la infraestructura clandestina de la cual depende el movimiento insurgente”. Bis. P. 77

El actuar operativo es puntual, se ataca a la base política, ésta es sometida al asedio del enemigo tanto por la acción cívica militar como por los operativos psicológicos que permitan los operativos de búsqueda y captura de militantes revolucionarios, éstos son sometidos a tortura para obtener información; el objetivo es llegar a través de la Base Política (BP) a la estructura clandestina, ésta es el objetivo militar del enemigo, su aniquilamiento o sobrevivencia depende de la fortaleza de la BP y de la determinación ideológica del militante.

El objetivo de las *acciones de combate*, como parte de la GBI, consiste en “destruir o neutralizar las bases y las fuerzas tácticas subversivas, y establecer un entorno seguro donde puedan aplicarse programas de desarrollo”. Bis. P. 77 El método contrainsurgente consiste en “extenderse como una mancha de aceite”, es decir, asegurar el control de una zona y extenderse, los estrategas contrainsurgentes norteamericanos sostienen que “la estrategia de defensa interna más eficaz consiste en establecer una base segura de apoyo al gobierno, ubicada a menudo alrededor de la capital y otras ciudades importantes, extender gradualmente el área de control, con objeto de ir alejando poco a poco a los insurgentes de su base de apoyo: el pueblo”. Bis. PP. 77-78

Se revela la táctica contrainsurgente, al golpe militar precede la ofensiva política-psicológica; la acción operativa tiene por objetivo destruir la dirección revolucionaria clandestina y aniquilar la fuerza táctico-operativo insurgente, ambas se logran al quitar el apoyo popular a la fuerza insurgente, el objetivo central es destruir la base política.

Un operativo contrainsurgente de esta magnitud tiene por objetivo destruir toda la capacidad político militar de la fuerza insurgente, se trata de que ésta no tenga una “retaguardia” que le permita organizar un operativo de contraofensiva.

Los operativos de contrainsurgencia son llevados a cabo por unidades especiales, pequeñas en número, catalogadas como especiales por el tipo de lucha que desarrollan, se supone especialistas en operaciones “quirúrgicas” para evitar que la “población civil” se vea expuesta a la violencia gubernamental excesiva.

El objetivo de la contrainsurgencia consiste en ganar “mentes y corazones” en el pueblo, es decir, ganar el respaldo popular para un gobierno oprobioso. La GBI, en esencia es el rostro del intervencionismo norteamericano en dos modalidades, con la ayuda y asesoría militar, o con la participación militar directa en “nombre de los intereses vitales” del imperialismo norteamericano.

La proinsurgencia

Es la otra cara de la GBI, consiste en el apoyo de las fuerzas guerrilleras anticomunistas, la proinsurgencia está destinada a derrumbar el poder de la fuerza insurgente que ha arribado a él, es en sí la organización de la contrarrevolución a través de agrupar a toda la reacción contra el poder revolucionario.

1. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

La proinsurgencia consiste en intensificar las acciones de desestabilización, a potenciar la acción reaccionaria y contrarrevolucionaria, cuyo objetivo político es recobrar o tomar el poder político por una fuerza proimperialista.

Dichas fuerzas son presentadas por la propaganda imperialista como fuerzas que “están en la primera línea de la lucha en favor del progreso, la seguridad y la libertad...”, los contrarrevolucionarios o mercenarios son presentados como “luchadores por la libertad” que combaten la “tiranía comunista”. Así, desde la doctrina Reagan, los contras nicaragüenses fueron presentados como “luchadores por la libertad”, en esos mismos términos fueron presentados los mujahidines afganos, la resistencia anticomunista en Camboya, los miembros de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA), presentadas en conjunto como parte de una “revolución democrática” que recorre al mundo.

El apoyo a las fuerzas anticomunistas desde la concepción imperialista, es decir, desde la GBI se le considera un objetivo estratégico como un imperativo moral. Desde esta concepción no hay impedimento político o moral para su aplicación, se trata de frenar la lucha revolucionaria y fortalecer el régimen de opresión capitalista.

La proinsurgencia plantea:

- Guerra de guerrillas: operativos militares efectuados en un territorio hostil o tomado por el enemigo; tales acciones, “emprendidas predominantemente por fuerzas locales”, están dirigidas a “desgastar y producir bajas en las filas del adversario, dañar sus instalaciones y suministros, así como obstaculizar y retrasar sus maniobras”. Cuando es exitosa, la guerra de guerrillas “mengua la moral y el prestigio del enemigo; desorganiza la economía, política e industria de las áreas ocupadas por el adversario, y mantiene... la voluntad de resistencia de la población local”.
- Subversión. Operativos según los cuales los “elementos de la resistencia echan mano de la fuerza, la violencia o la penetración, mediante una serie de acciones planeadas políticamente, con objeto de socavar, desbaratar o afectar las decisiones y las maniobras del gobierno o de las fuerzas que han tomado el poder”. Tales operativos suelen incluir el uso extensivo del sabotaje. “Las fuerzas especiales pueden asesorar

y auxiliar a las fuerzas de la resistencia en la conducción de sabotajes, los cuales son útiles para los objetivos tanto de la resistencia como de Estados Unidos”. Bis. p. 83

Es importante distinguir dicho componente de la contrainsurgencia para no perdernos en el análisis de la realidad, sobre todo en el campo internacional, porque desde el imperialismo se promueven golpes de Estado, contrarrevoluciones y acciones criminales como “revoluciones de colores o de estaciones” para justificar el intervencionismo e imponer bajo su legalidad Estados policíaco militares, gobiernos abiertamente proimperialistas. Lo irónico es que las fuerzas que luchan por la transformación social se pierdan en el análisis y retomen todos los argumentos del enemigo que se dice combatir, esa es una tragedia política.

Operaciones contingentes en tiempos de paz

Apartado de la GBI que consiste en el empleo limitado o periódico de las fuerzas militares imperialistas para suprimir desórdenes civiles, rescatar ciudadanos norteamericanos en zonas de combate en el extranjero, intimidar a gobiernos no alienados y acciones de demostración de poderío militar que respalden la política norteamericana.

Contingentes porque constituyen una respuesta repentina y específica a un acontecimiento inesperado en tiempos de paz, porque no se relacionan con una conflagración militar mundial, es decir, son eventos políticos no previstos o que emergen de manera inesperada, según para la lógica imperialista, aunque ante la espiral de violencia, explotación y opresión siempre será base objetiva para organizar o fortalecer la voluntad popular de combatir.

Dichos operativos se vuelven necesarios, según la concepción desde la GBI, ahí donde ha fracasado la diplomacia y que requiere de una respuesta militar inmediata. Bajo esta concepción el mundo, sobre todo el Tercer Mundo, está amenazado por la violencia por lo que Estados Unidos está impelido a dar una respuesta militar para proteger sus intereses. Aquí está fundado el papel que se abroga de policía mundial.

Las operaciones contingentes en esencia son de condición policíaca, en otras palabras, es la acción policíaco militar imperialista:

- Demostración de fuerza: el despliegue ostentoso de fuerzas en la vecindad de una nación belicosa, a fin de exhibir la voluntad

I. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

estadounidense de emplear su poderío contra ese país, si persiste en sostener una conducta considerada adversa a los intereses vitales del imperialismo. Tales despliegues “dan credibilidad a las promesas y compromisos adquiridos por la nación... y muestran la viabilidad de utilizar la fuerza militar como un instrumento del poder nacional”. En general, las maniobras de proyección de poderío implican el despliegue de buques de guerra cerca de la costa del país hostil, la introducción de tropas terrestres y áreas en las regiones problemáticas (por ejemplo, las actividades llevadas a cabo regularmente durante los años 80 en las áreas limítrofes de Libia y Nicaragua).

- Operaciones de ataque: acciones militares a corto plazo cuyo objetivo es “recobrar ciudadanos y bienes de Estados Unidos o coordinar acciones punitivas en apoyo de determinadas medidas políticas y diplomáticas”. Tales ataques suelen ser respuestas rápidas y enérgicas a alguna amenaza en el extranjero, y constituyen una advertencia sobre una posible acción militar posterior. Estas maniobras involucran la oportuna capacidad de respuesta de Estados Unidos: ataques aéreos emprendidos desde portaaviones, fuerzas anfibia de la infantería de marina, unidades aerotransportadas y comandos de asalto del ejército, y los grupos especiales de todas estas entidades militares. Ejemplos de estas actividades son la invasión de 1983 a Granada y el bombardeo aéreo de 1986 sobre Libia. Asimismo, las operaciones de ataque pueden incluir incursiones punitivas contra las naciones acusadas de apoyar al terrorismo.
- Apaciguamiento: el uso de las fuerzas militares “para asegurar el mantenimiento del derecho civil y el orden” en países que experimentan disturbios. Se puede recurrir a Estados Unidos para que dirijan tales acciones “en apoyo de un gobierno anfitrión amenazado” o en la etapa posterior al derrocamiento de un régimen hostil. Ejemplos ilustrativos de estas maniobras son la intervención de 1965 en la República Dominicana y el despliegue de los infantes de marina en Beirut, ocurrido en 1983. Las operaciones apaciguadoras involucran la utilización de las fuerzas militares en un contexto de seguridad interna, usualmente dentro de los confines de un solo país. Son diferentes de

las acciones “pacificadoras”, porque estas últimas implican el uso de las fuerzas estadounidenses para hacer cumplir el cese al fuego o para establecer una valla entre dos naciones rivales. Bis. P. 86

Después de la Segunda Guerra Mundial, durante la denominada guerra fría y posteriormente a ésta, el intervencionismo norteamericano está fincado en la estrategia y táctica de la GBI, bajo esta concepción se ha impuesto el terror imperialista en todo el mundo.

Antiterrorismo

Bajo este término se denomina a todas las medidas preventivas, punitivas y defensivas contra las actividades terroristas, cabe señalar que, en dicho concepto, *terrorismo*, está englobado esencialmente toda expresión de lucha revolucionaria.

Bajo la GBI se sostiene que el “antiterrorismo desempeña dos funciones básicas: por un lado, se hallan las acciones defensivas dirigidas a detener los ataques terroristas y reducir la vulnerabilidad de potenciales objetivos terroristas y, por el otro, se encuentran las acciones ofensivas encaminadas a combatir a los grupos terroristas y castigar a los gobiernos que otorguen refugio, adiestramiento o cualquier otro tipo de ayuda a las organizaciones terroristas. Bis. P. 86

Desde la concepción imperialista se considera terrorismo a “el uso calculado de la violencia o de la amenaza de violencia, para conseguir metas de naturaleza política, religiosa o ideológica. Se materializa a través de la intimidación, la coerción o infundiendo miedo”. Bis. P. 87 Desde la administración Reagan se considera al terrorismo todo lo vinculado a la acción revolucionaria.

En las últimas décadas, sobre todo después de los ataques a las torres gemelas, el componente de la lucha contra el terrorismo adquirió mayor relevancia y a través de dicho tópico se justificaron las guerras de rapiña en Yugoslavia, Irak, Afganistán, Libia y Siria.

Operativos antidrogas

Componente de la GBI, abarca todos los recursos para el “combate al narcotráfico” en el plano internacional, bajo el argumento de evitar que los estupefacientes lleguen al mercado norteamericano.

El principio consiste en el combate al narcotráfico que recae en organismos

1. La contrainsurgencia, estrategia para sostener la dictadura del capital

“civiles”, éstos reciben todo el respaldo militar del ejército o fuerzas militares. Bajo este apartado se justifica toda la acción injerencista y militarista del imperialismo norteamericano, sobre todo en América Latina.

La tesis imperialista consiste en sostener que las fuerzas insurgentes están involucradas en el narcotráfico como forma para adquirir medios de guerra y financiamiento, es el fundamento para enfrentar el terrorismo narcoguerrillero.

Bajo este componente en las dos últimas décadas se ha promovido el intervencionismo imperialista en América Latina, los programas de “ayuda militar” se trocan en deuda externa y mayor dependencia. Bajo este ardid las fuerzas policíacas militares de los países dependientes se transforman en un apéndice de la fuerza militar imperialista, hacia el interior de cada país son el instrumento y la columna vertebral de los Estados policíaco militares, de juntas militares e incluso de dictaduras que oprimen a los pueblos.

Con las banderas de la lucha contra el narcotráfico se desplegó la GBI en Colombia contra las FARC, éstas fueron presentadas como un ente promotor del narcotráfico al cual había que combatir al ser narcoguerrilleros, narcoterroristas. Ese fue el discurso imperialista al cual se plegaron en México funcionarios de gobierno, legisladores de diferentes partidos políticos, y en específico, el PAN y su dirigencia, promotores de la violencia sistemática que dio cuerpo al Terrorismo de Estado que hasta la fecha ha cobrado cientos de miles de víctimas directas e indirectas.

Acciones pacificadoras

Papel que se otorga desde la GBI a las fuerzas estadounidenses en las operaciones mundiales pacificadoras, o la intervención de las tropas de Estados Unidos en zonas conflictivas del extranjero, a fin de salvaguardar un acuerdo de cese al fuego o para separar a las partes rivales. ^{Bis. P. 92}

Acciones promovidas por Naciones Unidas, llevadas a cabo por fuerzas multinacionales, obviamente, destacan las norteamericanas, es decir, acciones criminales objetivadas por la OTAN, instrumento militar del imperialismo internacional para sojuzgar a los pueblos del mundo.

En general, la GBI se caracteriza por el combate contra el proceso revolucionario, es el golpe contra él a través del instrumento contrarrevolucionario; las maniobras

de la GBI incluyen formas militares y no militares de combate, para ganar mentes y corazones, quien logre el apoyo popular se impone; despliegue de unidades de fuerzas especiales para la lucha contrainsurgente; las fuerzas imperialistas, siempre dispuestas para el despliegue de diferentes tipos de maniobras; las fuerzas estadounidenses siempre buscan obtener una rápida victoria mediante el uso aplastante de la fuerza y potencia de fuego; el desarrollo de la GBI en el marco interno norteamericano también se ejerce, sólo que de formas más sutiles ante los ojos de la opinión pública.

La esencia de la GBI, consiste en la estrategia de la eliminación de las organizaciones disidentes, revolucionarias y los líderes revolucionarios; es el apoyo económico, político y militar a la contrarrevolución que justifica el uso de cualquier medio para acceder a la victoria.

La estrategia y táctica de la GBI es en esencia la contrarrevolución en el plano internacional; es la sistematización de toda la violencia imperialista para sostener vigente el capitalismo, la expoliación de los pueblos dependientes y el intervencionismo militar; es la expresión sistemática de la violencia reaccionaria imperialista contra los pueblos y organizaciones revolucionarias de éstos que luchan por liberarse de la explotación y opresión capitalista.

II. NOTAS SOBRE LA CONTRAINSURGENCIA EN MÉXICO

II. Notas sobre la contrainsurgencia en México

La masacre del dos de octubre de 1968 es parte de la política de gobierno fincada en la concepción del combate al enemigo interno, es la política contrainsurgente que adquiere connotación en el combate al movimiento revolucionario.

La contrainsurgencia adquiere expresión concreta en la política de represión, ahí donde existe la desaparición forzada de personas habla de una práctica de terrorismo de Estado, una táctica de la contrainsurgencia.

Desde la academia se trata de presentar el movimiento revolucionario separado del proceso de la lucha de clases que se vivía en México, de esta manera el movimiento revolucionario está desligado del pueblo, carece de respaldo popular, sin embargo, el primero es producto del segundo, se complementan mutuamente en tanto que expresa el desarrollo cualitativo del segundo.

El surgimiento del movimiento revolucionario en México es producto de la crítica política de las masas, ésta recorrió un largo proceso que va desde mediados de los años cincuenta y que cierra con la masacre del 10 de junio de 1971. En la década de los cincuenta la crítica política de las masas pasa por la organización de la clase obrera y la acción de los comunistas; en 1968-71 es la crítica del movimiento estudiantil.

Se considera que en 1969 el Estado mexicano adoptó la concepción contrainsurgente norteamericana para enfrentar el problema que representaba el surgimiento del movimiento revolucionario. El Estado se planteó su eliminación política y militar a través de la contrainsurgencia; el movimiento revolucionario no logró la unidad y por consiguiente cada organismo enfrentó la acción contrainsurgente por separado, hecho que facilitó la acción criminal del Estado mexicano.

La táctica contrainsurgente consistió en no reconocer el carácter insurgente, a los grupos y organizaciones revolucionarias se les presentó como delincuentes; cuando se les dio reconocimiento se les presentó como la agresión comunista externa, a los detenidos y a los caídos no se les reconoció como insurgentes, mucho menos como combatientes por el ideal socialista o comunista.

Lo que enfrentó el movimiento revolucionario de 1969 a 1980 es una larga campaña de contrainsurgencia, que desde la academia se le tipificó erróneamente como guerra sucia, consistió en tratar de aislar políticamente a los revolucionarios del pueblo, destruir su base política y aniquilarlo militarmente.

Los archivos de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) es el frío testimonio de los crímenes de Estado cometido por sus agentes, éstos dejaron registro escrito de todas las arbitrariedades y atrocidades que cometieron contra miles de ciudadanos, insurgentes o no, es la prueba escrita y una confesión de la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, los tratos crueles e inhumanos. Los archivos de la DFS contienen los secretos de los crímenes de Estado cometidos contra el pueblo organizado.

La DFS fue parte de la estructura policiaco militar del Estado mexicano para ejecutar la contrainsurgencia; fue parte de la estructura contrainsurgente que desde los años cincuenta desencadenó la violencia contra el pueblo.

¿Qué es la contrainsurgencia en términos prácticos? Un conjunto de técnicas y actos violentos que se aplican al “enemigo interno”, es decir, a quien el Estado define como enemigo político que pone en peligro el *statu quo* que se caracteriza por ser opresivo, entre ellos destacan las prácticas de terrorismo de Estado como lo es la detención-desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la tortura, entre otras prácticas violentas.

El detenido-desaparecido es sustraído violentamente de su cotidianidad, sometido a todo tipo de violencia y negado a todo tipo de derecho, le es negado como él es negado, deja de existir para la legalidad burguesa, ésta se empeña en borrar todo rastro de su existencia.

La política de gobierno fincada en la represión se vio fortalecida y tomó cuerpo en la doctrina de la contrainsurgencia impulsada e impuesta por el imperialismo norteamericano a través de la política de seguridad nacional. El Estado adopta la postura de no dar reconocimiento al sujeto revolucionario, éste es presentado como delincuente, a la vez, al interior de las estructuras policiaco militares se le reconoce como el enemigo interno a combatir hasta la eliminación política, militar y físicamente bajo métodos violentos que se sustraen de la ley o que son avalados por ésta.

Así se configuró una política de gobierno fincada en la violencia de clase ejercida contra los desposeídos, contra los que se organizaron para hacer frente a tal violencia que emanaba del régimen y sus instituciones.

La desaparición forzada como práctica contrainsurgente y como práctica de Terrorismo de Estado (TE) a partir de mediados de la década del 60 del siglo pasado adquirió connotación represiva; aún se practica por los cuerpos represivos,

II. Notas sobre la contrainsurgencia en México

durante todo ese tiempo ha tenido continuidad como parte de la política represiva del gobierno.

La violencia de Estado ha tenido continuidad histórica, desde la década del 50 del siglo XX constituyó política de gobierno, fue utilizada para contener y aniquilar políticamente toda expresión de crítica política de masas; a partir de mediados de los 60 del mismo siglo tuvo como objetivo aniquilar política y militarmente al movimiento revolucionario, proceso que terminó en la década del 80; en la década del 90 adquiere nueva connotación, sobre todo cuando se orienta al combate al movimiento insurgente, el objetivo concreto se centró contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y el Ejército Popular Revolucionario (EPR); a partir de 2000 a 2018 la violencia de Estado adquiere una nueva característica, los crímenes de lesa humanidad se vuelven sistemáticos y generalizados, se configura el terrorismo de Estado como política de gobierno, destacan la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial como prácticas de terrorismo de Estado; del 2018 a la fecha los crímenes de lesa humanidad persisten, como prácticas de terrorismo de Estado son cometidas fundamentalmente por todo el aparato represivo, son parte de la cotidianidad en todo el país.

La violencia política que emana del Estado ha tenido continuidad política, es producto de la misma política de gobierno y está sustentada en la doctrina de la contrainsurgencia que impuso el imperialismo norteamericano en América Latina, se expresó en la existencia de ejércitos militares para combatir al enemigo interno, es decir, al pueblo inconforme, al pueblo organizado que plantea un proyecto de nación donde no exista la desigualdad económica, política y social.

La desaparición forzada de personas es un acto criminal de parte del aparato represivo, contempla la sustracción de la víctima de la ley, se niega todo tipo de información sobre ella, no se reconoce el acto criminal ni a la víctima y se oculta todo rastro e indicio que lleve a conocer la verdad.

La ilegalidad a la que es sometida la víctima no es desde el momento de su desaparición, existe desde antes, esa condición es la que facilita que el ciudadano sea convertido en *enemigo interno*, se sobreentiende que es en términos políticos si es sujeto político, si es sujeto revolucionario contempla el aspecto político-militar. A la víctima ya se le había criminalizado, se le consideró enemigo del Estado y por consiguiente era objeto de represión en toda la extensión de la palabra, no es considerado sujeto de derecho, por consiguiente, lo que le pase en manos de los victimarios tiene valía desde el estado de derecho que hace deseable y posible el

cometido de crímenes de lesa humanidad fincados en la concepción fascista sobre el hombre.

En las dictaduras de Sudamérica y Centroamérica el terrorismo de Estado fue política de gobierno sustentado en un estado de derecho fincado en la concepción fascista, los crímenes de lesa humanidad se cometieron sistemática y generalizadamente contra toda la población, en específico, contra el sujeto político y el sujeto revolucionario.

En México, no se instauró formalmente una dictadura militar o cualquier otra expresión de dicho autoritarismo, sin embargo, la dictadura del capital se expresó en la dictadura burguesa, es decir, en la democracia burguesa y en el estado de derecho que criminalizó la inconformidad y la protesta popular, quienes transitaron por ellas fueron elevados a enemigos de la patria, en el sujeto político inconforme y en el sujeto revolucionario recayó fundamentalmente la violencia de Estado fincada en la doctrina de la contrainsurgencia auspiciada por el imperialismo norteamericano.

El proceder reaccionario y violento en Sudamérica se expresa por la llegada de elementos fascistas después de la Segunda Guerra Mundial que confluyeron con la concepción de las élites explotadoras; en Centroamérica por la profunda dependencia con respecto al imperialismo, éste impuso dictaduras cívico-militares para garantizar y proteger sus intereses.

La concepción fascista sobre el hombre es reaccionaria, enarbola la bandera del racismo y se otorga el derecho de aniquilar a los pueblos “débiles”, se funda en una concepción anticomunista que considera a los comunistas como seres imperfectos y proclives a la violencia y al anarquismo, que rompen con la armonía de las sacrosantas instituciones burguesas.

La política del Estado mexicano siempre ha sido de doble rasero, hacia el exterior se muestra progresista y expresa solidaridad con las causas libertadoras de los pueblos del mundo, no obstante, al interior asume una política reaccionaria y represiva, así al mismo tiempo que reconocía al gobierno de Salvador Allende y su lucha por transformar a Chile, en México se reprimía toda expresión de inconformidad popular, se desarrollaba una larga campaña contrainsurgente contra todo el movimiento revolucionario.

Bajo las banderas de la defensa de la revolución mexicana y sus logros se desató la cacería contra el sujeto progresista y el revolucionario, en los hechos la revolución mexicana no benefició al pueblo trabajador, para éste las loas a dicha

II. Notas sobre la contrainsurgencia en México

revolución le resultaron incomprensibles en tanto que en nombre de ella se le explotaba y oprimía.

La política del Estado mexicano se fincó en la doctrina contrainsurgente de los Estados Unidos, tomó cuerpo en la violencia de Estado determinada por la Escuela de las Américas donde se adoctrinó y preparó a miles de militares latinoamericanos que orquestaron golpes de Estado, impusieron dictaduras militares o Estados falsamente democráticos que fincaron su política de gobierno en la contrainsurgencia.

La táctica contrainsurgente consistió en negar el contenido político y revolucionario de quienes pugnaban por un cambio radical en la sociedad mexicana; al transformador social consciente y combativo se le despolitizó a propósito, se le deslegitimó políticamente y se le proyectó desde las instituciones de gobierno y los medios de comunicación como delincuente; al revolucionario se le presentó como gavillero; al joven inconforme, al que protestaba o que tenía militancia revolucionaria gobierno y medios de comunicación lo definieron como ladronzuelo; al sujeto revolucionario lo definieron como frustrado e inconforme; a los grupos y organizaciones revolucionarias se les presentó como organizaciones gansteriles, como miembros del hampa internacional; y cuando no funcionaba ninguno de esos epítetos se recurrió a presentarlos como ramificaciones del comunismo internacional. Emergió en la conceptualización el “delincuente común” para diluir la condición revolucionaria de las víctimas de la violencia de Estado.

La política represiva se sustentó en un estado de derecho que justificó el actual criminal del Estado mexicano y su aparato represivo; una estructura policiaco militar que materializó la violencia de clase en todo el país; y, un gobierno antipopular, represivo y proempresarial que justificó la opresión política en una concepción reaccionaria presentada bajo las banderas del “nacionalismo revolucionario”.

El andamiaje de la represión adquirió la justificación jurídica-ideológica, creó a la vez tipificaciones que deshumanizan a la víctima del terror de Estado, en lugar de prisionero político se habló de paquete para designar a la víctima de desaparición forzada o ejecución extrajudicial, prácticas de terrorismo de Estado cometidas por toda la estructura del Ejército mexicano. Todo el andamiaje represivo, todo el aparato policiaco militar abocado al combate contrainsurgente adoptó dicho lenguaje que deshumaniza o cosifica al combatiente político, es la adjetivación que despolitiza y deshumaniza.

La práctica represiva tiene su justificación, la víctima es la única responsable

y culpable de lo que se hace y le sucede; ahí se fundamenta el actuar del aparato policiaco militar, el proceder del agente de investigación contrainsurgente y del torturador, fundan su actuar en la táctica romana, en un momento dado reconocen la valía del contrincante, lo elevan a enemigo digno para que cuando se le aniquile aparezca victimario como un ente mucho más capaz que la víctima.

La estrategia contrainsurgente adoptada por el Estado mexicano conlleva necesariamente una táctica, ésta se condensa en la existencia de una estructura que la planifica y la ejecuta a través de unidades operativas que contemplan el aparato policiaco militar. Cuerpos especializados en el combate irregular, éste sólo es posible si se aísla políticamente al combatiente insurgente de su base política, es decir, del pueblo inconforme y organizado, sólo así es posible asestar los golpes militares con el objetivo del aniquilamiento.

Lo que desde la academia se denomina el surgimiento de una nueva disidencia, no es más que la existencia de la crítica de las armas, es decir, surgimiento y existencia del movimiento revolucionario que se planteó resolver la necesidad histórica de la revolución socialista. A partir de 1965 se considera el punto de partida de la lucha por el socialismo en México a través de la lucha armada revolucionaria.

Aunque desde este espacio sólo se destaca el carácter militar de la crítica revolucionaria, ésta no funda su acción sólo en la lucha armada, ante todo ésta se desprende de la lucha política, el movimiento revolucionario desde un principio comprendió dos aspectos que caracterizaron organización y lucha, el doble carácter, el político-militar.

Despolitización y criminalización del enemigo interno van de la mano, se complementa con la judicialización en algunos casos y en otros con el crimen de lesa humanidad. Esa ruta desdibuja la crítica política, distorsiona y niega la acción política, ésta es presentada como acción criminal que atenta contra la sociedad, carente de moralidad, sin motivación política, mucho menos ideológica. El enemigo interno encarna en el sujeto que sintetiza todos los males de la sociedad, es decir, el elemento descompuesto al que hay que combatir sin tregua ni cuartel.

Como parte de la contrainsurgencia está el lenguaje político para justificar el proceder criminal del Estado, se invocan los demonios de la represión como un acto de provocación de quienes ejercen la crítica política, éstos son los únicos responsables de la violencia, así las víctimas son presentadas como los victimarios, los provocadores insensatos de la represión, el Estado es obligado a responder con la violencia institucional.

III. LA CONTRAINSURGENCIA EN MÉXICO (1994-2018)

III. La contrainsurgencia en México (1994-2018)

La irrupción pública del EZLN y del EPR plantea un hecho de alcance histórico, a pesar de las diversas campañas de contrainsurgencia la guerrilla, como genéricamente se refiere al movimiento revolucionario, no fue política y militarmente aniquilada, su sola existencia constituye un cuestionamiento al régimen económico, político y social que se finca en la explotación y la opresión capitalista.

Un doble acontecimiento que tiene profundas raíces históricas producto de la desigualdad económica, política y social que engendra el régimen social; a la vez, un acontecimiento político en la historia contemporánea que nos remite a la política de contrainsurgencia adoptada por el Estado mexicano.

Política que ha tenido continuidad transexenal, materializada en una política represiva contra toda expresión de voluntad popular de combatir, sobre todo aquella expresión organizativa del pueblo fuera de los marcos corporativizantes.

La lucha por la transformación de la sociedad en torno a los intereses populares es lo esencial del planteamiento de los revolucionarios, éstos en la cruda realidad han aprendido a través de la historia que la violencia emerge primero tanto del régimen como de la política de gobierno, tiene un objetivo bien definido, sofocar a sangre y fuego toda expresión popular que se plantee la transformación revolucionaria de la sociedad.

Un análisis reduccionista diluye la esencia del problema al carácter “violento” de los revolucionarios y con ello, omite que la violencia emerge del régimen social y de la política de gobierno; se diluye la esencia del fenómeno donde el Estado tiene el monopolio de la violencia contra los oprimidos; y, como consecuencia, se niega a éstos el derecho a la autodefensa, se niega a las masas oprimidas el derecho a la rebelión, el derecho a la revolución.

En ese contexto de violencia que emerge del Estado, los revolucionarios no hacen más que responder a la violencia reaccionaria con formas y principios de organización política y militar que les permitan hacer frente a dicha política que se finca en la violencia de clase.

El capitalismo como modo de producción es violento y atenta contra la especie humana; fincada su existencia y reproducción en la lógica de la defensa de la propiedad privada se empuja al hombre a un proceso intenso e ininterrumpido de degradación, donde la violencia es parte fundamental del proceso de deshumanización.

El régimen que emergió después de la revolución mexicana está fincado en la violencia de clase, sobre ésta se han sentado, defendido y protegido los intereses de la burguesía mexicana, primero a través del PRI, posteriormente con el PAN, con el retorno del PRI y con la actual administración, en política contrainsurgente hay continuidad, todas las corporaciones policiaco militares que componen el aparato represivo se guían bajo la doctrina de combatir el enemigo interno, es decir, la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) creada y promovida por el imperialismo norteamericano.

En torno a esa perspectiva de violencia que emerge del régimen social y de la política de gobierno, los revolucionarios siempre hemos enfrentado a la contrainsurgencia, unas veces organizados, otras a la defensiva o a la ofensiva, política y doctrina fincada en la violencia reaccionaria para sofocar las aspiraciones libertarias de las masas trabajadoras. Por tanto, la lucha por la transformación de la sociedad mexicana no discurre bajo las buenas intenciones o los buenos deseos, toda expresión de lograr un cambio social “sin violencia” resulta ingenua porque en política toda acción del gobierno contra el pueblo organizado es expresión de violencia de clase contra los oprimidos.

La guerra del Estado mexicano contra todo el movimiento revolucionario está fincada en la contrainsurgencia, en específico, en la doctrina contrainsurgente impuesta por el imperialismo norteamericano, doctrina y política de gobierno, son parte de una misma política para contener y aniquilar a los revolucionarios que con su acción y pensamiento plantean la transformación revolucionaria de la sociedad mexicana.

La esencia de la contrainsurgencia en México estriba en que ésta ha sido adoptada e implementada por los diferentes gobiernos de manera voluntaria, no ha mediado presión imperialista, por el contrario, se ha adoptado de manera diligente lo cual plantea otra vertiente del fenómeno, el Estado mexicano adopta la doctrina contrainsurgente impulsada por el imperialismo norteamericano, la GBI, la convierte en política de gobierno.

La irrupción del EZLN se da en el marco de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), un tratado que significaba mayor subordinación de México con respecto al imperialismo. Presentado desde el poder como el mayor acto de democracia y desarrollo económico, no obstante, el discurso gubernamental lo que soslayaba públicamente era la dependencia económica, ésta

III. La contrainsurgencia en México (1994-2018)

se traducía en dependencia económica y por consiguiente en mayor dependencia política, ataba el presente y futuro del país a las cadenas de la dependencia con respecto al imperialismo.

La existencia del EZLN y el EPR, mejor dicho, PDPR-EPR, puso en entredicho la política contrainsurgente aplicada a mediados de los años 60 y finales de los 80, públicamente la cúpula policiaco militar encargada de objetivarla daba por aniquilado al movimiento revolucionario, no obstante, el 1º de enero de 1994 y el 28 de junio de 1996 se desmoronaba la versión oficial.

La irrupción de una expresión del movimiento revolucionario se daba en el marco de la caída del socialismo en la URSS y el inicio de la hegemonía del imperialismo norteamericano en la palestra internacional, en apariencia significaba una contradicción histórica con los tiempos de la globalización y el neoliberalismo.

La irrupción pública del EPR y posteriormente del PDPR se da en el marco histórico de la agudización de la explotación y opresión capitalistas; del incremento de la represión bajo la estrategia de la Guerra de Baja Intensidad; de la agudización de la crisis económica y política del régimen social; del proceso de militarización del país y la sociedad; y la generalización de la protesta popular contra el gobierno antipopular, represivo y proimperialista.

Ahí donde algunas plumas ven triunfos pírricos con la irrupción pública de nuestro ejército se equivocan porque su visión no supera los estrechos marcos del academicismo, la campaña mediática contra la nueva expresión de la voluntad de combatir a través de la crítica de las armas, revela la importancia que desde el poder político y económico se le daba y representaba, los guardianes del capital se encresparon y recurrieron a un nuevo ciclo de violencia contra las masas trabajadoras, cuyo objetivo era romper toda simpatía con los revolucionarios.

La campaña mediática de desprestigio del EPR constituyó parte de la campaña contrainsurgente, era la guerra psicológica para ganar mentes y corazones, para aislar a los revolucionarios del pueblo y asestar golpes militares para aniquilar a la fuerza político militar que desafiaba al Estado mexicano.

El ablandamiento del terreno consistió en descalificar el origen y composición del EPR con un propósito: deslegitimar la causa política, despolitizar su condición para presentarlo en el estrecho marco policiaco, es decir, insinuar una condición criminal, presentar a un grupo de trasnochados, violentos y carentes de “base

social”. Un discurso criminal que chocó con la historia y la realidad que daban condición material a nuestro partido y ejército.

El discurso oficial es contrainsurgente, el objetivo también, de esa agua bebieron destacados “periodistas” o “investigadores”, también lo hicieron políticos de oficio de diferente color partidario, sobre todo los intelectuales orgánicos al Estado y las plumas oficiosas o mercenarias. Todos abrevaron de la fuente contrainsurgente y justificaron una nueva oleada de violencia reaccionaria bajo el entendido de combatir a la “guerrilla mala”, a la “guerrilla que no tenía base social”, en los hechos constituye una declaración de guerra contra los revolucionarios que atentan contra la sociedad burguesa y su Estado criminal.

La consigna del Estado de actuar con todo el peso de la ley es la declaración pública de una larga campaña contrainsurgente contra nuestro partido-ejército, es la consigna contrainsurgente que da luz verde a todo el aparato represivo para sofocar la crítica de las armas a través de la contrainsurgencia. A una fuerza revolucionaria no se le ataca con tal énfasis si no representa ningún peligro político o militar, es lo que no ven quienes “estudian” desde los estrechos marcos academicistas al movimiento revolucionario en el país.

En esa lógica, el lenguaje que emanó desde el imperialismo norteamericano es el típicamente contrainsurgente, queda plasmado en las declaraciones de los representantes de éste al tipificar como terrorismo toda actividad revolucionaria. Las acciones que se desprendieron bajo esa política fue el respaldo económico, político y militar al régimen priista, se trataba de sostenerlo para garantizar sus intereses.

La contrainsurgencia en México ha tenido un hilo conductor, continuidad transexenal y homogeneidad doctrinal; desde mediados de la década del 60 su objetivación ha estado bajo la misma cúpula policiaco militar, ésta la ha diseñado y ejecutado bajo el esquema de las Fuerzas Armadas, en consecuencia, el Ejército mexicano es el responsable material de su planificación y ejecución, en esa cadena de mando el presidente de la república, en su condición de jefe supremo de las Fuerzas Armadas, siempre ha sido parte activa de la contrainsurgencia.

Los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez, José López Portillo y Miguel de la Madrid, en la historia moderna del país, son los sexenios que se caracterizan por la violencia contrainsurgente que pretendió aniquilar el

III. La contrainsurgencia en México (1994-2018)

movimiento revolucionario, no obstante, no lo lograron, al menos dos esfuerzos organizativos eludieron los golpes estratégicos y emergieron en la palestra política del país cuando las condiciones objetivas lo exigieron.

A partir de 1994, con Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo la contrainsurgencia adquiere un nuevo impulso e intensificación, el cual se mantiene hasta nuestros días. La concepción doctrinal en ambos períodos constituye la misma, se centra en el combate al enemigo interno, es decir, combatir al pueblo organizado.

En ambos períodos la esencia de la contrainsurgencia estriba en ejercer la violencia de Estado contra las masas inconformes; violencia de clase que tiene por objetivo destruir la base política que da sustento y vida al movimiento revolucionario; en generar con ella el terror para inhibir cualquier expresión de simpatía con los revolucionarios, en sí, se trata de golpear económica, política, psicológica y militarmente la base política del movimiento revolucionario.

En esa lógica de violencia de Estado, el cometido de crímenes de lesa humanidad es parte del proceder de los cuerpos policiaco militares, así, la desaparición forzada de personas por motivos políticos adquiere connotación como grave violación a los derechos humanos, como crimen de lesa humanidad, como práctica de terrorismo de Estado y como práctica contrainsurgente.

El plan contrainsurgente consistió en la generalización de los programas asistencialistas para quitar base política al movimiento revolucionario; el intenso proceso de militarización tanto de la geografía nacional y la vida social; el impulso del paramilitarismo como punta de lanza de la violencia contra el pueblo organizado; y, la violencia desenfrenada bajo la doctrina contrainsurgente para aniquilar al enemigo interno.

Partimos de que la contrainsurgencia es un conjunto de medidas económicas, políticas, sociales, psicológicas, militares y diplomáticas que conforman una estrategia y táctica para identificar, cercar, aislar y aniquilar a una fuerza revolucionaria, un movimiento insurgente, o, un gobierno antiimperialista. Es la estrategia y táctica adoptadas por la contrarrevolución en el plano internacional, organizada, estructurada y dirigida por el imperialismo, encabezado fundamentalmente por el norteamericano, doctrina creada a partir de la sistematización de la intervención imperialista para sofocar los procesos revolucionarios en el mundo caracterizados

por su condición anticapitalista y antiimperialista.

En la actualidad la GBI está enmascarada en la supuesta lucha contra el “terrorismo” y el “narcotráfico”, dos ejes de la GBI, ambos constituyen el enemigo interno a combatir, la amenaza internacional a enfrentar y aniquilar. Dos categorizaciones ambiguas que permiten meter en ese costal a toda expresión de lucha anticapitalista y antiimperialista, dos categorías que facilitan la implementación de medidas policiaco militares del orden contrainsurgente.

La contrainsurgencia ideológicamente está fincada en el anticomunismo, éste perdura aún bajo las banderas imperialistas de luchar “contra el terrorismo” en abstracto y el narcotráfico. De esta fuente ideológica se desprende el término de narcoguerrilla para justificar la contrainsurgencia, en específico, en Colombia, un terminajo que pretendieron imponer funcionarios norteamericanos para obligar al gobierno mexicano a plegarse aún más a sus exigencias contrainsurgentes, en ese mismo contexto está la definición de Estado fallido, en ambos casos es el discurso contemporáneo de la contrainsurgencia.

El Ejército mexicano tiene por doctrina la defensa interior, combatir al enemigo interno, se condensa en el Plan DN-II, enfocado en combatir peligros internos, es decir, a toda expresión organizativa-popular que cuestione el régimen social a la cual engloban como “terrorismo” o “delincuencia”.

La esencia de su doctrina estriba en negar el carácter político de toda la inconformidad popular, ésta es categorizada en diferentes vertientes como delincuencia, la despolitización de la protesta y organización popular se condensa en la criminalización de éstas y la pobreza.

Dentro de ese marco no se combate al sujeto político que protesta y se organiza para hacer válidos sus derechos conculcados; se combate a criminales, a delincuentes, al sujeto descompuesto, a “enemigos de la patria”.

Históricamente la contrainsurgencia siempre ha corrido bajo la dirección del Ejército mexicano, desde mediados de la década del 60 del siglo pasado hasta nuestros días ha consistido en el impulso de unidades contraguerrilleras, especializadas en la lucha antisubversiva y el terrorismo, es decir, en la lucha contrainsurgente, en ese marco la Brigada Blanca, el Grupo de Montañismo Anáhuac (GMA) y los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (GAFE) son parte de los instrumentos contrainsurgentes de dicha historia.

III. La contrainsurgencia en México (1994-2018)

La irrupción pública del EZLN y la ofensiva para contenerlo se engloba en un plan contrainsurgente que contempló la acción militar abierta y encubierta, campañas psicológicas para el desprestigio, campañas cívicas para disputar la base política, utilización del paramilitarismo, la acción policiaco militar contra la base política para generar terror, negar la condición revolucionaria y reducir el problema a un asunto policiaco y de carácter local, intensificación de la militarización del país.

Inicialmente fueron movilizados 12 mil efectivos que tendieron un cerco y un muro de contención, la acción militar se tradujo en el cometido de crímenes de lesa humanidad. Se suma la acción del paramilitarismo que a partir de 1994 tuvo un mayor impulso, su antecedente histórico son las bandas de gavilleros que asolaban amplias regiones del país donde había algidez de la lucha revolucionaria (Guerrero) o la toma de las tierras por campesinos pobres en la región de la Huasteca.

Para el plan contrainsurgente contra el EPR se movilizaron 12 mil efectivos militares que se sumaban a los existentes a partir de 1994, se crearon nuevos grupos de operaciones especiales en el plano nacional y estatal, se destinaron millones de pesos para la acción cívica, se volvió a intensificar la militarización, se crearon instancias policiaco militares especializadas en la búsqueda y captura de militantes del PDPR-EPR, se desató una ofensiva policiaco militar contra organizaciones políticas de masas y regiones del país que se consideraban parte de la base política y se lanzaron campañas de guerra psicológica para sembrar junto con la acción policiaco militar el terror de Estado. La ofensiva consistió en ejercer la violencia de Estado que justificó el cometido de crímenes de lesa humanidad, se desprende de la consigna de todo el peso de la ley contra el PDPR-EPR.

La acción militar contrainsurgente se fincó en la creación y movilización de batallones de infantería y los grupos de fuerzas especiales antiguerrilleros que se lanzaron a la búsqueda y captura del EZLN y del PDPR-EPR, a su paso dejaron una estela de víctimas por la violencia de Estado que diseminaron por todo el país.

La contrainsurgencia en México siempre ha contado con el respaldo del imperialismo norteamericano en todos los ámbitos, el Estado mexicano asumió desde mediados de los años 60 del siglo pasado la doctrina contrainsurgente que consistió en combatir al enemigo interno; adoctrinamiento y entrenamiento de oficiales; asesoría en la creación de unidades especiales de contraguerrilla y armamento específico para la guerra irregular o para contener la protesta popular

es parte de la asesoría en torno a la contrainsurgencia, asesoría que se traduce en dependencia militar.

La doctrina contrainsurgente que adopta el Ejército mexicano y todo el aparato represivo es la doctrina de la contrarrevolución auspiciada por el imperialismo norteamericano, se observa en el respaldo de éste al Estado mexicano. De 1994-1996 la asistencia en materia de contrainsurgencia se ha disparado en un 400% en relación a años anteriores, esto explica un caudal de recursos materiales, humanos y bélicos en torno a la lucha contra el movimiento revolucionario, la estrategia contrainsurgente se fortaleció en todos los sentidos y ámbitos.

En perspectiva podemos afirmar sin titubear que ningún grupo, organización o partido revolucionario sobrevive a una larga campaña de contrainsurgencia si no cuenta con: un lineamiento político que guíe su actuar; un profundo arraigo en las masas populares que lo alimentan, visten, calzan y protegen; y, una ideología firme que le permita tener una actitud valorativa en función de los intereses populares y el ideal comunista.

Se puede tener una interpretación subjetiva del efecto real o supuesto de la contrainsurgencia producto del engaño policíaco, de la especulación academicista o del posicionamiento de las plumas mercenarias, no obstante, la verdadera historia del movimiento revolucionario en México aún no ha sido revelada en su exacta dimensión por una sencilla razón, el movimiento revolucionario en México existe, tiene continuidad histórica y muchas de las inquietudes que desvelan a investigadores, sean sinceros o no, aún son secretos revolucionarios porque de ello dependen vidas de hombres y mujeres que nutren el actual proceso revolucionario.

La versión policíaca y la especulación academicista están profundamente equivocados en suponer un pasado turbio, una tendencia irracional a la violencia y una visión reduccionista de nuestra historia y funcionalidad.

Beben del agua de la contrainsurgencia aquellos que asumen que el movimiento revolucionario ha sido derrotado o contenido por la contrainsurgencia, es un viejo deseo de la cúpula policíaca militar que planifica, estructura y objetiva la contrainsurgencia.

Lo que para algunos investigadores consideran trasnochado, anacrónico e incluso “sectario” constituye ideología, convicción y voluntad de combatir. Lo mismo sucede con periodistas que “investigan” nuestra historia y dan voz y rostro

III. La contrainsurgencia en México (1994-2018)

a los traidores de la revolución y con ello hacen eco de la basura contrainsurgente al contribuir a la campaña de desprestigio a los fundadores de nuestro partido.

Hasta hoy ha fracasado la contrainsurgencia por una sencilla razón, como movimiento revolucionario tenemos arraigo en las masas, éstas alimentan, calzan, visten y protegen a los revolucionarios porque representan alternativa a la explotación y opresión capitalistas.

En la actualidad podemos definir que el Ejército mexicano asume la doctrina de la GBI; todo el aparato represivo está en función de combatir el enemigo interno, en ese sentido, los dichos desde Palacio Nacional de que el ejército es pueblo uniformado es una expresión propagandística, porque históricamente el Ejército mexicano es un instrumento de opresión política, es la columna vertebral del Estado mexicano que se sostiene con el puntal de la violencia de Estado, la violencia de clase, es decir, la violencia que brota del régimen, sus instituciones y hombres que las hacen funcionar para mantener a flote el modo de producción capitalista.

Si el PDPR-EPR ha superado campañas contrainsurgentes desde mediados de los años 60 del siglo pasado, ha sido por la estrategia, táctica y metodología definida por los primeros núcleos de profesionales que le dieron vida a la Unión del Pueblo, raíz y fundamento de nuestro partido.

**IV.
CONTRAINSURGENCIA
EN LOS GOBIERNOS
PANISTAS
FOX-CALDERÓN
(2000-2012)***

***Publicado en *El insurgente* (Año 28 / No. 231 / Enero de 2024)**

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

La contrainsurgencia en los sexenios panistas se aplicó y desarrolló desde una mayor injerencia y participación directa del imperialismo estadounidense, sobre todo en el diseño y toma de decisiones en lo táctico operativo a través de la “coordinación y cooperación bilateral entre EUA-México para el combate a la producción y tráfico de drogas”, para lo cual se celebraron y operaron diversos acuerdos, planes, operaciones y operativos conjuntos bajo el mismo formato, que reprodujo la experiencia contrainsurgente, a manera de continuidad, implementada en la década de 1970 con la “Operación Cóndor”.

El factor político que permitió este avance en grandes proporciones fue la llamada transición democrática, la llegada a la administración federal del Partido Acción Nacional (PAN), con Vicente Fox Quezada, y la posterior continuidad con Felipe Calderón Hinojosa, que significó el arribo del conservadurismo y la concepción más reaccionaria de la oligarquía a la administración del Estado mexicano.

Con ello, los planes contrainsurgentes norteamericanos esbozados desde la década de 1990 para México y América Latina, como parte de la actualización de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) desarrollada desde la administración estadounidense de Ronald Reagan (Doctrina Reagan), se fortalecieron y adquirieron otra dimensión.

Donde el argumento del “combate al narcotráfico y los cárteles de la droga” constituyó y ha constituido la parte medular de la estrategia de seguridad nacional estadounidense con la que ha desarrollado su relación con el Estado mexicano, al menos durante la segunda mitad del siglo XX a la fecha.

Esta noción es la que prevalece desde la Operación Cóndor hasta la actualidad, implementada y desarrollada como estrategia y política de seguridad pública en nuestro país, parte integral de la GBI y la contrainsurgencia como política de Estado coordinada desde el Departamento de Estado estadounidense.

Apenas llegado a la presidencia, Fox comenzó a fincar la “fortaleza” de su gobierno hacia el exterior en la fuerte relación con Estados Unidos, caracterizándose por el injerencismo estadounidense y por el entreguismo y subordinación de México a los planes y proyectos hemisféricos del imperialismo.

En materia económica el eje rector del gobierno foxista se centró en la integración

productiva y la intercomunicación (cadenas de suministro) con América del Norte y Centroamérica, para lo cual se proyectaron grandes proyectos estratégicos para el centro del país y sobre todo para el sur sureste del país, que contemplaba al Istmo de Tehuantepec como “polo de desarrollo estratégico”.

En política de seguridad, el fortalecimiento y modernización de las policías figuraron como una de las principales prioridades de su gobierno, lo que destacó el vínculo y “coordinación” con Estados Unidos a través de la capacitación y apoyo técnico, así como la cooperación económica en esta materia, a condición de modificar la legislación en torno a ella; el asesoramiento y capacitación corrió a través de las agencias de seguridad interior estadounidenses que se establecieron a sus anchas en territorio nacional.

Toda la política pública nacional hacia el interior se desarrolló en torno a esas directrices económicas y de seguridad, con lo que se esbozaba una nueva embestida contra el movimiento popular y población en general que se opusieran a los proyectos de saqueo y despojo que contemplaba el programa de gobierno de la “transición democrática”, que por la coyuntura internacional resultaban ambiciosos y estratégicos para el imperialismo estadounidense.

Situación que se presentó apenas comenzara el sexenio foxista y que fue escalando durante todo su mandato, tanto en descontento y protesta popular como en la represión por parte del gobierno; la escalada de violencia y criminalidad de Estado se expresó en el operativo desplegado contra los pobladores de Atenco, los días 3 y 4 de mayo de 2006, agrupados en el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) que se oponían a la construcción del nuevo aeropuerto internacional en el Valle de Texcoco, anunciado desde el 2001 por Vicente Fox como parte del proyecto contemplado en el Plan Puebla Panamá (PPP) dado a conocer también oficialmente en 2001, pero firmado desde el 2000.

El operativo corrió a cargo de la Policía Federal Preventiva (PFP) y la Agencia Estatal de Seguridad (AES) del estado de México, gobernado por Enrique Peña Nieto, fue encabezado por el Almirante Wilfrido Robledo Madrid director de la AES y se caracterizó por la brutalidad y la saña que incluyó violaciones y vejaciones sexuales a mujeres, allanamientos de morada contra toda la población, así como la tortura física y psicológica, incomunicación y elaboración de expedientes inculpativos a priori contra los detenidos.

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

Fue acompañado de una intensa campaña mediática de criminalización, por parte de los monopolios de la comunicación, que siempre llamó a la represión y la justificaba fomentando el odio y desprecio hacia los detenidos.

La represión en Atenco dejaba ver que no se trataba de un simple desalojo y operativo policiaco “para restablecer el orden”, sino de la aplicación doctrinaria de técnicas y métodos de la contrainsurgencia en la política de seguridad pública; a eso obedecía el mando militar en la PFP con el que fue creado en enero de 1999 y todas las directrices en esa dirección que se habían estado operando durante el sexenio.

En el sexenio de Felipe Calderón la política de gobierno adquirió una nueva dimensión en materia de seguridad, ésta se centró en el “combate al narcotráfico” a través de las Fuerzas Armadas.

En cuanto arribó a la presidencia, tras un proceso electoral fraudulento que lo convirtió en espurio, la seguridad y el combate a la delincuencia se convirtió en el discurso y política oficial del gobierno federal al grado de declarar “la guerra contra el narco”; así, la “guerra” se convirtió en el principal objetivo y razón de ser del Estado mexicano en clara alineación y subordinación con las directrices dictadas desde el Pentágono en la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) firmada en 2005.

La estrategia se centró en la militarización del país, con lo que se operaba un “nuevo paradigma” de seguridad en México; la noción de seguridad pública ahora giraba hacia las nociones conceptuales de seguridad nacional y seguridad interior, propias y acordes a los principios doctrinarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que se impusieron con mayor fuerza y de manera oficial en dicho acuerdo.

Bajo esta estrategia, la violencia de Estado adquirió la dimensión de terrorismo como política de Estado ejecutada contra el pueblo por motivos políticos y sociales a través del cometido de crímenes de lesa humanidad, principalmente la ejecución extrajudicial, desaparición forzada y desplazamiento forzado; las cifras que se acumularon en el sexenio calderonista, en el cometido de estos crímenes, sobrepasaron las existentes hasta entonces registradas en todo el continente, incluidas la de los países del Cono Sur que estuvieron bajo dictaduras militares.

El cometido de crímenes de lesa humanidad, preponderantemente desaparición forzada y ejecución extrajudicial, se convirtió en la característica principal de la estrategia de la militarización de la seguridad pública; así como la proliferación de los grupos y cárteles de la droga por todo el país. Con lo que quedó claro que el terrorismo de Estado fue el “nuevo” paradigma de seguridad.

Verdaderas cifras del terror que al final del sexenio de Calderón en materia de desaparición forzada ascendían a más de ciento cincuenta mil detenidos desaparecidos en todo el país, un fenómeno en ascenso que seguiría la tendencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Esto como expresión más nítida de la violencia y terrorismo de Estado, a lo que se suma la violencia institucionalizada y “normalizada” desde la época del priismo de la represión, el asesinato político y presos políticos que nunca ha dejado de aplicarse como parte de la institucionalidad del Estado mexicano.

De igual forma las ejecuciones extrajudiciales se contabilizaron por cientos de miles, al punto de no tener una cifra exacta ya que, en el marco de la guerra contra el narco, en su mayoría se registraron como homicidios dolosos con violencia desde la tipificación jurídica de la institucionalidad, públicamente se presentaron como “delincuentes abatidos” y “daños colaterales”.

De la magnitud de las cifras y del fenómeno dan cuenta los medios de la prensa escrita en esos años, que abunda en ejemplos diarios que destacan por el grado de violencia con brutalidad y horror ejercidos sobre las víctimas.

En el sexenio de Calderón el fenómeno de la desaparición forzada se convirtió en práctica sistemática y generalizada del Estado Mexicano, cometido desde las estructuras policiaco militares y paramilitares; el fenómeno del narcotráfico como expresión del paramilitarismo y la contrainsurgencia se potencializó y generalizó como fenómeno desde y para el Estado con intereses económicos y políticos de clase.

El supuesto mal que se iba a combatir con la estrategia de seguridad basada en la militarización del país, lejos de disminuir se fortaleció y esparció por toda la geografía mexicana bajo distintos nombres y nomenclaturas de organizaciones del crimen organizado y cárteles del narcotráfico.

Un patrón se hizo evidente, ahí donde hacía presencia y se establecía el

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

ejército como parte de los operativos planificados desde las cúpulas castrenses, el fenómeno del narcotráfico y la descomposición social se potencializaron, junto con las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada; constituyéndose así el binomio cuerpos policiaco militares-fenómeno del narco como lógica de la violencia criminal en México, vigente hasta la fecha.

Lógica y patrón de la violencia que no se queda en la percepción pública, es comprobable con hechos, datos y cifras que son reveladores; los ejemplos de mayor relevancia son los estados del norte del país, sobre todo Chihuahua; Michoacán y Veracruz; todos bajo el marco de Operativos Conjuntos con mando centralizado en las Fuerzas Armadas: Operativo Conjunto Chihuahua, marzo de 2008; el llamado michoacanazo, mayo de 2009; y, el Operativo Conjunto “Veracruz Seguro”, octubre de 2011.

Estos ejemplos destacaron por el patrón y *modus operandi* seguido en el llamado combate a la delincuencia, donde una difusa delincuencia organizada y cárteles del narco adquieren poderío y control casi insuperable, desafiando al Estado mexicano en el ejercicio del monopolio de la violencia; tesis del gobierno con el que se pretendió, y pretende desde entonces, justificar la militarización del país y los crímenes de Estado y lesa humanidad.

Se trataba de la puesta en marcha de las directrices doctrinales de la seguridad nacional estadounidense, impuestas y aceptadas en la Iniciativa Mérida, firmada en 2007, que trazaba el Estado policiaco militar como eje central de la seguridad hemisférica.

Los resultados, mayor violencia e incremento del fenómeno del narcotráfico y la descomposición social, una criminalidad sin límites. En su momento fueron Los Zetas, los Caballeros Templarios, los Matazetas y un sin fin de nombres y siglas que proliferaron en razón y concordancia con el despliegue del ejército y la marina en la geografía nacional.

Al final de los sexenios panistas el fenómeno del narcotráfico y la violencia adquirió niveles más allá de los que se hubieran experimentado en la década de 1970 con la Operación Cóndor en todo el continente y se tradujo en un baño de sangre y terror para el pueblo, las estructuras encargadas de planificar y ejecutar los crímenes de lesa humanidad se fortalecieron y adquirieron mayor poder e impunidad, con la prevalencia de una cúpula militar sobre lo civil como rasgo en

ascenso de la institucionalidad del Estado que hasta la fecha permanece.

Desde esa cúpula militar se ha constituido un generalato desde el que se extienden los vínculos criminales del fenómeno del narcotráfico y la violencia en todo el país, de facto son, en coordinación y bajo mando estadounidense, los que articulan, planifican y dirigen las estructuras criminales de Estado encargadas de los más deleznable crímenes contra el pueblo.

Esto se puede constatar en las directrices oficiales instruidas y seguidas por los cuerpos policiaco militares durante el sexenio de Calderón, que revelan la verdadera esencia de la estrategia de la “guerra contra el narco”.

La “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”, considerada la “biblia” militar durante el sexenio calderonista, basada en la “amplia libertad de acción e iniciativa”, y el “don de mando” de los comandantes de las 12 regiones militares del país para realizar “acciones contundentes” contra el “enemigo”; y, el documento doctrinal “La Secretaría de la Defensa Nacional en el Combate al Narcotráfico”, implementado en el mismo período.

Ambos documentos formaron el cuerpo doctrinal de la estrategia de la “guerra contra el narco” aprobados e implementados por la cúpula castrense, coordinado y vigilado por el imperialismo estadounidense; bajo esas directrices emanadas directamente de las Fuerzas Armadas se crearon grupos paramilitares y escuadrones de la muerte encargados de ejecutar los más aborrecibles crímenes, como la tortura, las mutilaciones, descuartizamientos, acciones de limpieza social..., todo bajo el difuso espectro de la delincuencia organizada y los cárteles de la droga.

Ese fue el aporte del panismo en la administración federal en la política contrainsurgente, poner las bases, mecanismos e instrumentos del Estado policiaco militar en nuestro país, como elemento y pieza fundamental de la estrategia estadounidense para América Latina.

En política exterior esto se expresó en completa alineación y sumisión a la política e intereses estadounidenses, con lo que se cambiaba la doctrina Estrada por la “sesión inteligente de la soberanía nacional”, al grado de poner a las Fuerzas Armadas bajo la subordinación del Comando Norte y Comando Sur del Pentágono.

Al igual que en los años de la llamada guerra sucia, diversos fueron los acuerdos celebrados entre México-Estados Unidos durante los sexenios panistas

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

en materia de “cooperación, coordinación y acción conjunta” en “el combate al narcotráfico”, pero los de orden estratégico y de los que se desprenden todas las medidas e instrumentos como política integral de seguridad, la GBI, son: el Plan Puebla Panamá (PPP, 2001); Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN, 2005); e, Iniciativa Mérida (2007).

Cada uno de ellos con objetivos y alcances bien definidos en el ámbito económico, político, social y militar que caracterizaron y determinaron la política de gobierno en cada uno de estos aspectos, pero todos bajo la lógica de la seguridad nacional estadounidense y la mascarada del “combate al narcotráfico” como eje articulador.

La puesta en marcha de los proyectos emanados de estos acuerdos pronto configuró un contexto de represión ante la oposición y resistencia que generó en distintas regiones y sectores populares que contemplaban tales planes pactados; sobre todo porque el descontento y protesta nunca se apaciguaron como lo pretendían los pregoneros de la “alternancia democrática” con la llegada de Vicente Fox a la presidencia de la república.

En materia de seguridad, el panismo dio continuidad a los planes ya trazados durante la administración de Ernesto Zedillo que creó un nuevo cuerpo policiaco militarizado, la PFP, dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Cuerpo policiaco militar que se conformó por elementos de la Policía Federal de Caminos, Policía Fiscal y Ejército mexicano, se le dieron atribuciones de seguridad pública bajo el supuesto paradigma de un cambio de fondo en la seguridad que para finales del sexenio de Zedillo ya era una muletilla común en los políticos de oficio y funcionarios del régimen.

Llegado Fox a la presidencia, uno de los cambios que operaría en esta materia fue poner a la PFP bajo el control de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), cuyo titular era Alejandro Gertz Manero, y la creación de la Agencia Federal de Investigación (AFI) a cargo de Genaro García Luna; al frente de la PGR nombraría al general Macedo de la Concha; Eduardo Medina Mora se desempeñó como director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN); como Secretario de la SEDENA el general Gerardo Clemente Ricardo Vega García y de la Marina el Almirante Marco Antonio Peyrot González. Estos fueron los principales responsables de la política de seguridad durante el sexenio foxista.

En la implementación y ejecución de la estrategia de seguridad y la violencia institucional como parte de la contrainsurgencia, que durante el sexenio de Calderón se caracterizaría por el terrorismo de Estado, el panismo se valió de la amplia experiencia del priismo y se apoyó y utilizó los mismos instrumentos, personajes y hombres del régimen que desde la década del 60 fungen como piezas y engranajes clave de la contrainsurgencia en nuestro país, algunos con características vinculantes al imperialismo estadounidense, a través de sus agencias de espionaje y de seguridad como la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y el Departamento de Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Personajes como Alejandro Gertz Manero, Pedro Ojeda Paullada, Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, Tomás Zerón de Lucio, Wilfrido Robledo Madrid, General Rafael Macedo de la Concha, tuvieron una activa participación durante el panismo; algunos de ellos como Gertz Manero se caracterizan por ser piezas clave de la maquinaria contrainsurgente en México sin importar partido político que detente la administración federal; lo mismo han servido con sus oficios criminales al viejo PRI que al PRD, PAN y hasta a Morena actualmente.

En el sexenio de Calderón, varios de estos personajes vuelven a figurar en cargos clave para implementar la estrategia de seguridad que enlutó y ensangrentó al país: Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván; Secretario de Marina, Mariano Francisco Saynez Mendoza; Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna; titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora; subdirector del CISEN, encargado de monitorear los grupos guerrilleros activos, Jorge Tello Peón; entre otros vinculados al aparato de inteligencia y seguridad nacional con larga trayectoria como Monte Alejandro Rubio García, Tomás Zerón de Lucio y Ardelio Vargas Fosado.

La presencia transexenal de este tipo de personajes, a pesar de las acusaciones que pesan sobre ellos, devela la naturaleza criminal del Estado mexicano y su política contra el pueblo que se extiende de forma transexenal, así como un patrón de la contrainsurgencia.

Son estos mismos personajes que desde la administración pública, en el ámbito civil, se han encargado de operar la política y medidas contrainsurgentes, así como garantizar impunidad y protección político-jurídica a los criminales de Estado del

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

pasado y presente, incluidos ellos mismos.

Los mecanismos e instrumentos que para ello se han utilizado son varios, uno de ellos el de la supuesta atención a las víctimas de los crímenes de Estado del pasado, los de la llamada guerra sucia.

Maniobra política que ante la exigencia y demanda de los familiares de las víctimas, de desaparición forzada, supo aprovechar la administración de Vicente Fox al crear la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP) bajo la careta de la alternancia democrática; esta fiscalía documentó casos de desaparición forzada de la “guerra sucia” pero sin garantizar justicia.

Lo que se tradujo en que ningún responsable material ni intelectual de estos crímenes de lesa humanidad fuera procesado ni llevado ante los tribunales, ni mucho menos se dio con el paradero de las víctimas de desaparición forzada.

Así las estructuras encargadas de planificar, coordinar y dirigir esta violencia criminal quedaron intactas y remozadas, bajo el marco de la “nueva” relación bilateral con Estados Unidos que prestaba mayor apoyo y asistencia en tareas de seguridad y combate al narcotráfico, bajo la centralización del mando, falsamente destacó “el respeto a los derechos humanos”, lo que invistió a los criminales de Estado de impunidad.

Para lo que sirvió la creación de esta fiscalía especial fue para tratar de desvincular al Estado mexicano y sus cuerpos policíacos y militares de ese pasado criminal bajo el supuesto de que con la salida del PRI de la administración federal, se daba paso a la democracia en el país y atrás quedaban todas esas prácticas aborrecibles y criminales de la “guerra sucia”, al tiempo que se fortalecían los cuerpos policíaco militares y la política de seguridad pasaba a primer término en la política nacional.

Mientras tanto los crímenes de Estado y de lesa humanidad se siguieron ejecutando en el sexenio de la “alternancia democrática” que fue la antesala de lo que pronto deviniera en terrorismo de Estado en el sexenio de Felipe Calderón.

Una muestra del grado de criminalidad e impunidad de Estado la encontramos en lo absurdo y perverso de los administradores del régimen, con relación al trato y atención a las víctimas de la violencia de Estado, que llega a lo kafkiano al tener a uno de los responsables de administrar y supervisar la contrainsurgencia en la

década del 70, el Plan Cóndor, en la institución encargada de investigar y procurar justicia actualmente, que se supone tendría que investigar y castigar estos crímenes.

Se trata del fiscal general Alejandro Gertz Manero, otrora coordinador general del Plan Cóndor en México en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez y cuyo mentor fue el entonces procurador de la república Pedro Ojeda Paullada; plan netamente contrainsurgente con el que se cometieron crímenes y atrocidades de todo tipo, con tácticas y métodos impartidos en la Escuela de las Américas como el de “tierra arrasada” que se aplicó en el triángulo dorado, en el norte del país, sobre la población que se consideraba podría ser o llegar a ser base política de la guerrilla.

En ese entonces, como ocurriría luego en los sexenios panistas, la justificación pública fue el combate a la siembra y trasiego de enervantes; con la implementación del Plan Cóndor este fenómeno se potenció y extendió de manera exponencial en todo el triángulo dorado, así como en otras partes del país, aparejado a un sinfín de crímenes de Estado y de lesa humanidad como la desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y el desplazamiento forzado de poblaciones enteras, sobre todo en Chihuahua y Sinaloa, estados que se consideraban de fuerte presencia de la Liga Comunista 23 de Septiembre.

Misma estrategia y política contrainsurgente que en el sexenio de Calderón adquirió las dimensiones de terrorismo de Estado en todo el país.

Por eso, que Alejandro Gertz Manero hoy ocupe la Fiscalía General de la República (FGR) resulta perverso, porque en los casos de investigación de crímenes de Estado y de lesa humanidad que han prosperado por la trascendencia y exigencia popular, la FGR siempre interviene; un victimario de la llamada guerra sucia “procurando justicia” a las víctimas de crímenes de lesa humanidad resulta grotesco y perverso, un rasgo distintivo de la contrainsurgencia en nuestro país.

Los generales que participaron en la elaboración y aprobación de la llamada biblia militar, base de instrucción operativa del terrorismo de Estado en el sexenio de Calderón, fueron:

General de brigada Rogelio Armando Patiño Canchola, jefe de la sección siete (Operaciones contra el narco) del Estado Mayor de la Sedena, quien elaboró el documento “Directiva para el Combate Integral al Narcotráfico 2007-2012”.

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

General Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, adiestrado y adoctrinado por el pentágono en la Escuela de las Américas; fue Comandante de agrupamiento en la Fuerza de Tarea Arcoíris, creada para sofocar el levantamiento del EZLN en 1994; en el sexenio de Calderón fue jefe del Estado Mayor de la SEDENA y como tal dio el visto bueno a dicho documento.

General de División y Secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, encargado de aprobar y transmitir las instrucciones y contenidos de la Directiva, acordes a la “visión presidencial”, a los comandantes de las 12 regiones militares del país para que las transmitieran por la cadena de mando.

Destaca también, por el cargo que ocupa en el actual sexenio:

General Luis Crescencio Sandoval, actual secretario de la SEDENA, en 2011-2012 tenía el mando como comandante de la guarnición militar fronteriza en Piedras Negras, Coahuila, fechas en que “los zetas” “controlaban” el CERESO de Piedras Negras y se registró el asesinato e incineración de alrededor de 150 personas en su interior.

Los militares tenían el control de la entrada y salida del penal, pero “mágicamente” no vieron ni se dieron cuenta de nada.

También bajo su mando de esta guarnición militar, se suscitó la “matanza de Allende” (marzo de 2011) donde 350 personas fueron asesinadas o desaparecidas e incineradas también a nombre de los zetas, se aplicó la táctica de tierra arrasada destruyendo con maquinaria pesada en pleno día alrededor de 40 casonas, siete ranchos, 27 residencias y departamentos en Piedras Negras, de igual forma los militares tenían bajo su mando el control de la seguridad en la región y a pesar de las incesantes llamadas de auxilio de la población, en esos días, los militares no se percataron ni acudieron a los llamados.

Este documento junto con el otro denominado “La Secretaría de la Defensa Nacional en el combate al narcotráfico”, en el que se llama a una “cruzada” contra el “enemigo” para “aniquilarlo”, forman el cuerpo doctrinal contrainsurgente del sexenio calderonista; en el segundo documento se hace énfasis en que el narcotráfico ponía “en riesgo la viabilidad del país”, ya que se “trata de una amenaza interna, actual y violenta que afecta los campos político, económico, social y militar”.

En este cuerpo doctrinal-operativo descansan los métodos, técnicas y

modus operandi del actuar de los cuerpos policíaco militares en las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada, con la que se explica la lógica criminal y de violencia prevaleciente en toda la geografía del país.

Uno de cuyos rasgos ha sido matar presuntos criminales, manipular la escena del crimen e inventar una mentira; en el caso de la desaparición forzada su ejecución se comete de forma indistinta por los cuerpos policíaco militares y los paramilitares, la orden y mando operativo siempre está en las estructuras castrenses.

Denuncias formales y quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que han derivado en recomendaciones, así lo confirman. De lo que se desprende una práctica sistemática que configura un método y modus operandi tanto de los cuerpos policíaco militares y paramilitares que remite al citado cuerpo doctrinal, por lo que no se trata de casos de indisciplina por parte de la tropa y elementos aislados.

Algunos casos con los que se evidencia lo anterior, por su repercusión pública, son los siguientes:

2006-2007, represión contra el pueblo de Oaxaca en el contexto de protesta generalizada y agrupada en la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que se saldó con el cometido de crímenes de lesa humanidad por los cuerpos policíacos y paramilitares. Al igual que en Atenco, el operativo para el desalojo constituyó y se articuló desde la doctrina contrainsurgente.

Se utilizaron escuadrones de la muerte que entre la población se conocían como las “caravanas de la muerte” que se encargaron de sembrar el terror y la muerte en el plantón de la APPO, población y comunidades que simpatizaban y apoyaban al movimiento popular.

Estos hechos están ampliamente documentados en el Informe de la Comisión de la Verdad creada para investigar estos hechos represivos.

25 de mayo de 2007, detención desaparición de dos de nuestros compañeros, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, en la ciudad de Oaxaca, por fuerzas policíaco militares. La denuncia pública de este crimen adquiere impacto nacional e internacional por el accionar militar de nuestro Ejército Popular Revolucionario.

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

Sobre el caso existe una recomendación de la CNDH, una sentencia de un tribunal de circuito y una más por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reconocen la participación de las fuerzas policiaco militares en el cometido de este crimen.

Abril de 2010, Tamaulipas, asesinato de dos niños en un retén militar y varias personas heridas incluidos sus padres.

El caso generó indignación y protesta en el país tras darse a conocer el testimonio de la madre y los sobrevivientes que detallaron el proceder criminal de los militares; ante el escándalo el secretario de gobernación, Fernando Gómez Mont, se dedicó a difundir una versión tergiversada y falseada con descaro para deslindar al ejército, principal tarea que por ese entonces desempeñaba como parte de sus oficios.

Marzo de 2010, asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey, caso que trascendió mediáticamente por el hecho de que dicho instituto educativo pertenece a la élite empresarial del norte del país y por la protesta que generó en el alumnado, por lo que su rector encabezó la exigencia de explicación y justicia ante el asesinato de los dos jóvenes que en un principio fueron presentados como integrantes del narco, delincuentes abatidos en enfrentamiento con los militares, a pesar de que existían imágenes que desmentían la versión oficial.

El caso cobró gran relevancia pública por el fuerte cuestionamiento del rector a la estrategia de seguridad del gobierno federal, en torno al cual se sumaron algunos personajes del mundo empresarial y presentaron una propuesta de seguridad al Congreso de la Unión; la situación se calmó cuando el rector se vio obligado a renunciar.

En 2012 se hace pública la existencia de “pelotones de la muerte” creados por el ejército en el norte del país, las denuncias son reveladoras ya que vienen de propios militares a los que se enjuicia en el fuero militar por diversos delitos, sin que se involucre a los mandos.

Revelan la creación de estos “pelotones de la muerte” como parte del operativo conjunto en Chihuahua entre 2008-2009, encargados de cometer todo tipo de crímenes y delitos como la tortura, mutilación, ejecuciones extrajudiciales, incineración y disolvencia con ácido a sus víctimas, desaparición forzada, robo,

connivencia con el narcotráfico, venta de droga, acuerdos con grupos criminales y todo lo que públicamente desde las autoridades se dice es la razón de la estrategia de seguridad nacional.

Se hace evidente, con sus denuncias signados en sus declaraciones en tribunal militar, que el modus operandi criminal que se le achaca a la delincuencia organizada y grupos del narco, es exactamente el mismo que los militares procesados denunciaron como parte de su preparación militar y el proceder cotidiano en sus tareas operativas, que ejecutan por orden de sus superiores que los han “dejado solos”, acusaron.

Sus declaraciones y testimonios, hechos públicos por su defensor, apuntaron como responsables a la alta jerarquía militar, el secretario de la SEDENA y Felipe Calderón como comandante supremo de las fuerzas armadas, ya que dijeron fueron las instrucciones que les dieron desde las comandancias regionales y que el propio secretario de la SEDENA sabía.

El caso se fue diluyendo en lo público, por la interminable danza del terror que copaba a diario todos los medios informativos, las maniobras de “la justicia militar” que no permitió mayor seguimiento y por la coyuntura electoral de 2012.

Estos cuatro ejemplos de los múltiples que abundan por todo el país, son suficientes para revelar el patrón existente en el cometido de las ejecuciones extrajudiciales y la desaparición forzada por los cuerpos policiaco militares y los grupos paramilitares encubiertos bajo cárteles del narco, así como el actuar omiso, cómplice y deliberado de los encargados de las diferentes instituciones de gobierno encargadas de investigar y procurar justicia.

Un patrón que se volvió común durante el sexenio de Calderón y que hasta la fecha perdura, es el siguiente:

En todos los casos de ejecución extrajudicial y/o desaparición forzada, en los que se ven involucrados militares, siempre se vincula a las víctimas con la delincuencia y el narco, esto a pesar de que exista evidencia probatoria de su responsabilidad (fotos, videos); cuando se hace insostenible la versión oficial se procede a deslindar la responsabilidad con el recurso del “fuego cruzado” donde el victimario siempre es la delincuencia; en caso de no poder sostener la versión, se reconoce a medias la responsabilidad atribuyéndola al actuar indisciplinado de

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

individuos aislados, pero nunca como parte de la cadena de mando.

Rasgos y patrones componentes de la contrainsurgencia

Algunos de los principales componentes de la contrainsurgencia que prevalecieron como parte de un cuerpo doctrinal durante los sexenios panistas, con mayor énfasis en el de Felipe Calderón Hinojosa, bajo el marco estratégico de la “guerra contra la delincuencia y el narcotráfico” fueron los siguientes: 1) construcción del enemigo interno; 2) Centralización del mando de los cuerpos policíaco militares y de la seguridad pública a cargo de generales; 3) Técnicas de guerra psicológica; 4) Despersonalización y deshumanización del “enemigo” interno; y, 5) Métodos y técnicas de terror y exterminio.

1) Construcción del enemigo interno.

Este se creó con la “guerra contra el narco” al presentar a los “delincuentes y narcos” como los enemigos de la sociedad a los que hay que combatir y exterminar porque amenazan y atacan contra la seguridad del país y ponen en peligro a la sociedad misma; con la característica que la delimitación de este “enemigo interno” es difusa, depende de las condiciones y circunstancias propias del desarrollo de los proyectos económicos estratégicos puestos en marcha.

Al grado que durante el sexenio calderonista el criterio bajo el que se juzgaba quien era delincuente y narco fue discrecional, cualquier ciudadano era culpable hasta demostrar lo contrario. Bajo esa premisa se juzgó públicamente de delincuentes y/o narcos a todos los detenidos en retenes y operativos, así como a los ejecutados y desaparecidos por los cuerpos policíaco militares y paramilitares.

2) Centralización del mando de los cuerpos policíaco militares y de la seguridad pública a cargo de generales.

La estrategia de seguridad bajo la premisa de la militarización se presentó como una necesidad para combatir a la delincuencia que se había “apoderado” de territorios en algunas partes del país, lo que implicaba emplear a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad.

Esto bajo el supuesto de que las policías municipales y estatales encargadas de esas tareas carecían de la capacidad y los recursos para enfrentar el poderío de los cárteles del narco, además de que en muchos casos éstas habían sido infiltradas

por el narco; por ello se requería de los “mecanismos y herramientas” de seguridad necesarios para el “combate frontal” de la delincuencia, tales herramientas eran la Policía Federal con elementos del ejército mexicano y el mando único depositado en militares.

Con este argumento se pretendió justificar el Estado policíaco militar y el estado de excepción de facto que significó el despliegue del ejército en las calles, contraviniendo con ello a la Constitución; y, poco a poco se delegó la representación de la seguridad pública en generales.

3) Técnicas de guerra psicológica.

El despliegue del ejército por toda la geografía nacional en tareas de seguridad pública, significó también una campaña militar de propaganda permanente planificada, a la que se le dio cobertura desde el inicio por los monopolios de la comunicación; desde el Ejecutivo federal y las Fuerzas Armadas se impuso durante seis años, a través de estos monopolios, “la guerra contra el narco” como agenda pública nacional, con ello se impuso una dictadura de opinión.

Eso permitió, desde el Estado, criminalizar a las víctimas del terrorismo de Estado y a todos aquellos, individuos u organizaciones, que se opusieron a los proyectos de despojo y saqueo que impulsaba el gobierno federal.

Ejemplos ilustrativos de ello son la represión en Atenco en el Estado de México y a la APPO en Oaxaca. En ambos casos la represión contó, desde antes del operativo, durante y después, con un amplio despliegue “informativo” sobre la problemática desde la versión oficial del Estado; la característica fue la condena pública mediática a la protesta popular y los llamados a la represión, bajo la incitación al odio y a la violencia contra los que protestaban.

Con ello se “justificó” desde la campaña mediática la represión y los crímenes de Estado cometidos por el aparato policíaco militar.

La dictadura de opinión fue tal que durante todo lo que duró la “guerra contra el narco” los medios informativos no dejaron de coberturarla un solo día, saturaron la opinión pública desde la radio, televisión, prensa escrita e internet con imágenes, videos y la narrativa de la “guerra contra el narco”.

Una verdadera campaña de guerra psicológica desde la que se mandaban

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

mensajes de terror y miedo a toda la población con las ejecuciones extrajudiciales en plena calle y luz del día, los “levantones” de personas que luego aparecían desmembrados, encobijados, o colgando de un puente, la difusión de imágenes y videgrabaciones de torturados y ejecutados, hasta llegar a lo más aberrante y bárbaro de los mensajes entre supuestos cárteles con las visceras de las víctimas. Todo transmitido y coberturado detalle a detalle.

Es en este contexto que se dan las supuestas transmisiones en vivo de operativos de la Policía Federal a los que da cobertura nacional Televisa y su conductor de noticias estrella, Carlos Loret de Mola; los operativos, como quedaría demostrado después, eran montajes con base a la creación expofeso de supuestos delincuentes que en realidad eran víctimas de la Policía Federal. Un proceder común durante todo el sexenio de Calderón, que develaba el contubernio y complicidad de la estrategia de seguridad con los monopolios de la comunicación.

La cobertura de los propios operativos policiaco militares, se convirtieron en sí mismos propaganda dirigida a intimidar y generar terror en la población, una demostración de poder y fuerza al “enemigo”, a eso obedecía en gran parte el asesinato a mansalva en puestos de control y retenes sobre la población inerm.

4) Despersonalización y deshumanización del “enemigo” interno

Desde que declaró la “guerra contra el narco” Felipe Calderón, como presidente de la república y jefe supremo de las fuerzas armadas, se dirigió a la opinión pública refiriéndose reiteradamente a la “delincuencia y narcos” como el “enemigo a combatir y exterminar”.

Conforme avanzó su sexenio sus discursos cada vez más adquirían el lenguaje propio de los regímenes fascistas, en el que se despoja a ese “enemigo” de todo atributo de persona y lo sitúa siempre fuera de la ley, es decir fuera de todo marco y norma de derecho; por lo tanto esos “delincuentes y narcos” no podían ser considerados como sujetos de derecho, humanos, sino como merecedores de ser eliminados sin que ello signifique delito o falta alguna al estado de derecho, ya que son una amenaza y peligro para la sociedad.

Bajo este razonamiento criminal, la existencia de ese “enemigo” se equipara a la de un animal o ente extraño y nocivo para la sociedad.

Desde esta concepción reaccionaria no hay por qué respetar los derechos

humanos y la dignidad del “enemigo”, en este caso de los “delincuentes y narcos”, se puede hacer con ellos lo que se quiera sin que eso signifique delito o falta alguna.

Basta con citar uno solo de los discursos, dado el 21 de diciembre de 2011 en los Ángeles California, del jefe supremo de las fuerzas armadas, refiriéndose a la delincuencia, para develar este componente medular de la contrainsurgencia:

“...Y eso, amigas y amigos, empezó a crecer como un cáncer, como una plaga, como una plaga que se mete en todas las coladeras, en todas las recámaras, en todos los baños. Y esa plaga, amigas y amigos, esa plaga que es el crimen y la delincuencia, es una plaga que estamos decididos a exterminar en nuestro país.”

Tácitamente, en sus propias palabras, el presidente de la república reconocía la eliminación física de personas, “el exterminio”, como parte de su estrategia de seguridad; esto es, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de personas consideradas una “plaga”, por lo tanto, no sujetos de derecho.

Desde los monopolios de la comunicación y comunicadores orgánicos del régimen también se contribuyó y reprodujo esta concepción reaccionaria, con la intención de que se convirtiera en un consenso social. Ejemplo de ello son los dichos de Ciro Gómez Leyva casi en los mismos términos para referirse al asesinato de supuestos delincuentes.

5) Métodos y técnicas de terror y exterminio

La implementación de estos métodos y técnicas proliferó en todo el país y fue lo que más se ejecutó operativamente bajo la mascarada del enfrentamiento entre cárteles del narco, como causa de la violencia “caótica y sin control” donde el hilo conductor se pierde; bajo esta modalidad se cometieron y se siguen cometiendo miles de crímenes por motivos políticos y sociales.

La formación de escuadrones de la muerte, desde las estructuras policiaco militares, tienen ese propósito, diseminar la violencia y el terror, al igual que el desplazamiento forzado de pueblos y comunidades enteras, así como la ejecución extrajudicial selectiva; casos de esta naturaleza se registraron sobre todo en el norte del país.

A eso se debe el constante surgimiento de nombres y siglas de grupos y cárteles del narco, conforme avanza la militarización del país, que se caracterizan por sus

IV. Contrainsurgencia en los gobiernos panistas Fox-Calderón (2000-2012)

prácticas de violencia deshumanizadas con base en el tormento y la tortura con un grado de crueldad y perversidad indecible, que sigue una lógica ascendente hasta la fecha.

Una violencia indescriptible e incomprensible, a decir de muchos “analistas”, pero que tiene su matriz de origen en la Escuela de las Américas, “enriquecida” por las Fuerzas Armadas del país; lejos de ser caótica es completamente planificada, estructurada y dirigida.

Bajo ese contexto de terrorismo de Estado en el plano nacional, como parte de la estrategia de seguridad con base en la militarización del país, miles de crímenes de Estado y de lesa humanidad se cometieron contra el pueblo, incluidos nuestros dos compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya; también se cometieron múltiples violaciones a los derechos humanos contra la población.

Crímenes y agravios contra el pueblo que hasta la fecha siguen en la impunidad, que emanaron de una estrategia diseñada y operada desde las más altas esferas del poder político y militar, como parte orgánica de los planes y doctrina contrainsurgente para el siglo XXI de la doctrina de seguridad nacional del imperialismo estadounidense, que pone sus prioridades en los recursos energéticos y estratégicos como el agua y minerales, así como en la “seguridad hemisférica”, es decir, de los Estados Unidos.

Por eso, la responsabilidad de estos crímenes no se reduce a los perpetradores materiales, sino que se extiende por cadena de mando a los encargados de planificarlos y aprobarlos, de igual forma, pero a la inversa, de cómo se transmitieron las directrices a la tropa.

Por lo que dicha responsabilidad llega hasta el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, Felipe Calderón Hinojosa y la jerarquía militar de su sexenio, así como toda una lista de personajes que en distinto momento han ocupado cargos públicos que los involucra por acción u omisión en su responsabilidad, criminales de Estado que en su mayoría viven bajo el amparo de la impunidad.

V. LA CONTRAINSURGENCIA EN OAXACA*

***Publicado en *El insurgente* (Año 27 / No. 224 / Mayo de 2023)**

V. La contrainsurgencia en Oaxaca

Desde 1996 a la fecha Oaxaca ha estado bajo la violencia contrainsurgente que ha cobrado cientos de víctimas, éstas son en la actualidad parte de la estadística de la violencia que emana del régimen político y de la política de gobierno, fincada tanto en la doctrina de la contrainsurgencia de la Guerra de Baja Intensidad (GBI) y el terrorismo de Estado.

Los crímenes de lesa humanidad son parte de la historia contemporánea y un recordatorio de que el PRI-gobierno fincó sexenio tras sexenio el imperio de la injusticia, del despojo violento y la imposición de los intereses de una minoría explotadora a través del terrorismo de Estado.

La desaparición forzada de personas y las ejecuciones extrajudiciales son una constante, parte de la violencia que azota al pueblo; las víctimas de la violencia de Estado son fundamentalmente de las masas trabajadoras, del pueblo que protesta y está organizado fuera de los marcos corporativizantes.

Trabajadores de la educación, campesinos, indígenas, luchadores sociales de diferentes organizaciones, defensores de derechos humanos y revolucionarios son las víctimas que nutren la estadística del terror; la administración actual reconoce más de 100 mil, sin embargo, dicha cifra resulta extremadamente conservadora porque por cada denuncia hay diez desapariciones forzadas no denunciadas, de esa magnitud es la violencia de clase que se vive en el país.

En Oaxaca la violencia de Estado se intensificó a partir de 1996, adquirió la especificidad de la contrainsurgencia que los cuerpos policiaco militares se encargaron de objetivar, uno de ellos fue la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR) cuyo objetivo era detener y aniquilar militantes y combatientes del PDPR-EPR.

A partir de las denuncias de las víctimas de la violencia de Estado, de la documentación de ésta por parte de organizaciones de derechos humanos, investigaciones periodísticas y académicas se ha podido establecer que la región de los Loxichas ha vivido desde 1997 bajo el asedio policiaco militar.

La violencia que ha asolado la región es violencia de clase, es decir, violencia de Estado, violencia contrarrevolucionaria que ha cobrado cientos de víctimas, todas tienen un común denominador, son indígenas y son acusados de ser Base Política del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

Se ha documentado que producto de la acción de los cuerpos policiaco

militares, del ejercicio de todo el peso de la ley y de una política contrainsurgente del gobierno en los Loxichas se traduce en más de treinta desapariciones forzadas, por lo menos 50 ejecuciones extrajudiciales, 250 detenciones ilegales, más de 200 casos de tortura, más de 80 cateos ilegales.

La violencia de Estado también se tradujo en 160 personas encarceladas por motivos políticos de manera injusta y arbitraria, incontables violaciones sexuales de mujeres y una interminable espiral de violencia que aún no termina, la cual se configura en hostigamiento y persecución política, en amenazas de muerte, el encarcelamiento injusto y arbitrario, en síntesis, en destrucción de bienes materiales y en saqueo indiscriminado en manos de grupos paramilitares.

Los responsables materiales de tal violencia son los cuerpos policiaco militares que le dieron vida a las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) que se instalaron en los Loxichas, su labor fue fundamentalmente contrainsurgente, ahí anidaron los criminales de Estado, desde ellas salieron a la cacería de los falsos guerrilleros, porque a quienes desaparecieron de manera forzada, a los que ejecutaron extrajudicialmente, a quienes encarcelaron como guerrilleros y comandantes del EPR en realidad eran ciudadanos que estaban organizados y luchaban por sus derechos y contra el caciquismo a través de una organización política de masas.

En esa orgía de violencia destacó la FPAR, en el lapso de dos años (1997-1999) de operaciones contrainsurgentes del Ejército mexicano y este cuerpo policiaco contrainsurgente destacó Pedro Hernández Hernández como un criminal de Estado, quien obedeció órdenes directas de quien fuera en ese entonces gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano.

La violencia contrainsurgente de inmediato cobró víctimas, parte del mecanismo de objetivarla consistió en capturar indígenas que participaban en la lucha política de masas para ser acusados de pertenecer a nuestro partido-ejército, así emergieron los falsos comandantes que fueron sentenciados a purgar sentencias por 20 años acusados por el Estado de terrorismo, sabotaje, rebelión, conspiración, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad, robo, portación de armas de uso exclusivo del ejército y homicidio. Expresos políticos sobre los cuales aún el Estado se ceba en ellos a través del mecanismo de la fianza económica para “reparar el daño al Estado mexicano”.

Todos los que están en esta estadística son víctimas de la violencia de Estado,

V. La contrainsurgencia en Oaxaca

producto de la acción contrainsurgente de los cuerpos policiaco militares, en específico de la FPAR que ahí se estrenó en su función contrainsurgente.

Una situación similar se vivió en el país producto de la política del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León que declaró ejercer todo el peso de la ley a quienes se habían atrevido a reivindicar la necesidad de la transformación de México por métodos revolucionarios, la violencia contrarrevolucionaria se tradujo en las 96 ejecuciones extrajudiciales en Oaxaca, Chiapas y Guerrero documentadas por organizaciones de derechos humanos. Son sólo una muestra de lo que es la violencia contrainsurgente y el actuar criminal de todo el aparato represivo creado por el PRI-gobierno.

En este proceso de violencia en la región de los Loxichas el Estado mexicano emerge como un ente represivo, como el instrumento de clase para imponer violentamente los intereses burgueses, la política de un gobierno que está para la defensa de dichos intereses. La acción política de organizaciones de masas y de derechos humanos permitió desenmascarar al Estado mexicano, al gobierno federal y el de Oaxaca como antipopulares y represivos.

El mecanismo de la violencia contrainsurgente para imponer por violencia de Estado el poder caciquil priista consistió en la acción criminal de los “entregadores” y “limpiadores”, en ambos mecanismos le dieron vida indígenas desclasados al servicio del caciquismo priista, organizados, entrenados y dirigidos por el Ejército mexicano el cual dirigía la acción criminal de la FPAR.

Los “entregadores” eran el dedo que señalaba a la próxima víctima la cual era detenida por el Ejército o la FPAR; “los limpiadores” eran quienes objetivaban las ejecuciones extrajudiciales. Ambos entes criminales constituyeron una modalidad de los grupos paramilitares que en los manuales de contrainsurgencia denominan como “rondas comunitarias”.

Uno de los responsables de la ola violenta de carácter contrainsurgente lo fue Ramón Eduardo López Flores, quien era de la Comisión Política de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno, su trabajo consistió en “ablandar el terreno” ofreciendo a los luchadores sociales, a representantes de los pueblos indígenas carro, casa, dinero si se plegaban a la política del gobierno de Diódoro Carrasco, después de dichos ofrecimientos se desencadenaba la violencia policiaco militar para imponer por las malas los intereses y exigencias del gobierno

antipopular y represivo del PRI.

La ejecución extrajudicial del luchador social Celerino Jiménez Almaraz, el día 24 de abril de 1997 por parte de la policía y el ejército ilustran cómo eran los operativos contrainsurgentes en los Loxichas, éstos eran encabezados por el Ejército mexicano en conjunto con la Policía Judicial del Estado de Oaxaca, dentro de ella se camuflaba la FPAR.

Militares y policías llegaron al amparo de la noche cercaron la humilde vivienda, entraron violentamente al hogar campesino y ejecutaron de manera extrajudicial al luchador social que ante los medios presentaron como guerrillero. El argumento oficial sobre los hechos es cínico y absurdo: militares y policías fueron atacados por guerrilleros por lo que se vieron obligados a repeler la agresión, un argumento típico de los criminales de Estado.

La verdad es otra, el operativo contrainsurgente lo conformaron una unidad de más de 60 elementos policiaco militares que torturaron a los habitantes de la vivienda indígena, ejecutaron extrajudicialmente al luchador social, su cuerpo fue ultrajado para imprimir más daño, acto seguido criminalizaron a los familiares de Celerino Jiménez Almaraz cuantas veces consideraron necesario.

Los responsables materiales de los cientos de crímenes de lesa humanidad que cometieron militares y policías siguen impunes, también quienes se dedicaron al saqueo y al despojo de las escasas pertenencias de los reprimidos. Impunes siguen los funcionarios y políticos de oficio que promovieron y exigieron la represión, los que apoyaron sin reparos morales los operativos contrainsurgentes que bañaron en sangre y violencia de Estado la región de los Loxichas.

El lenguaje y la acción de la contrainsurgencia volvió a florecer durante el tiempo del descontento magisterial popular en los años de 2006-2007, desde el andamiaje oficial se sostuvo que el gobierno de Oaxaca combatía en la ciudad capital a la “guerrilla urbana”, en ese marco de propaganda psicológica connotados agentes de la contrainsurgencia descollaron por sanguinarios, es el caso del comandante Pedro Hernández Hernández, Daniel Camarena, Moreno Rivas.

La violencia de clase y sus costos la documentó la Comisión de la Verdad de Oaxaca, en esencia es la violencia contrainsurgente que se cebó en un pueblo desarmado, el argumento de la “guerrilla urbana” fue la justificación para que los cuerpos policiacos, militares y paramilitares cometieran crímenes de lesa

V. La contrainsurgencia en Oaxaca

humanidad.

En ese contexto de violencia generalizada y sistemática es que nuestros militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez fueron detenidos desaparecidos por agentes del Estado, el día 25 de mayo de 2007, en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.

A la fecha las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales son una constante, una expresión concreta de la violencia de clase que afecta fundamentalmente al pueblo organizado fuera de las estructuras corporativizantes.

La lógica de la violencia en Oaxaca es la misma que se vivió en 1997; las víctimas de la violencia de Estado son pueblo trabajador, pueblo inconforme, pueblo organizado, es decir, sujeto político que ejerce crítica política al régimen social, a la política de gobierno.

Trabajadores de la educación, representantes de pueblos campesinos/indígenas, luchadores sociales críticos al capitalismo, integrantes de organizaciones políticas de masas, defensores de derechos humanos siguen siendo las víctimas de la política represiva del gobierno fincada en la doctrina de la Guerra de Baja Intensidad, la GBI es la rectora en la política de seguridad para garantizar desarrollo económico, sobre esa lógica se “abatén” guerrilleros por todos lados y todos los tiempos.

La violencia de clase en Oaxaca emana del Estado mexicano, hombres del régimen e instituciones están bajo la lógica de la contrainsurgencia, se confirma en cada una de las víctimas que quien tiene el monopolio de la violencia es el Estado, a través de este instrumento de opresión se ejerce la violencia reaccionaria contra los oprimidos, ¿cómo enfrentarla? ¿Cómo se puede garantizar la voluntad popular de combatir?

La autodefensa armada de las masas emerge como necesidad política, los oprimidos tienen el derecho de recurrir a ella parara oponer al poder burgués el poder político del pueblo. A la violencia fundada en la GBI se le opone la organización y lucha del pueblo a través de la Guerra Popular Prolongada.

Esa es la enseñanza y el aprendizaje que nos deja la resistencia del pueblo Loxicha, de nuestro pueblo en Oaxaca y el resto del país; heroica ha sido y lo es la voluntad de combatir a pesar de la ofensiva reaccionaria de los gobiernos federal y estatal.

**VI. LA DESAPARICIÓN
FORZADA EN MÉXICO
Y LA
CONTRAINSURGENCIA***
**(LA DETENCIÓN DESAPARICIÓN
DE GABRIEL Y EDMUNDO,
EN EL MARCO DE LA
CONTRAINSURGENCIA)**

***Publicado en *El insurgente* (Año 27 / No. 224 / Mayo de 2023)**

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

La desaparición forzada de personas por motivos políticos en México tiene un largo historial como parte de la política de gobierno fincada en la doctrina de la contrainsurgencia, la Guerra de Baja Intensidad (GBI); ha formado parte de las prácticas de violencia que emanan de la política represiva del gobierno contra los opositores políticos, luchadores sociales, defensores de los derechos humanos, luchadores conscientes por el socialismo y los revolucionarios que plantean la transformación de la sociedad en beneficio de los explotados y los oprimidos.

El crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada de personas, en el país tiene una larga data, ha sido y es cometida por el Estado a través de todo el aparato represivo y sus agentes que objetivan la GBI, por consiguiente, es parte sustancial de la violencia que emana de instituciones y hombres que le dan vida al Estado mexicano.

Está documentado desde la academia, investigaciones periodísticas, organizaciones defensoras de derechos humanos y, sobre todo, por la denuncia y movilización de los familiares de las víctimas que la desaparición forzada de personas es una práctica histórica de los gobiernos priistas y panistas, éstos fincaron la política de gobierno en el terrorismo de Estado.

A partir del año 2000 al 2018, las desapariciones forzadas se dieron en un marco de violencia sistemática y generalizada contra el pueblo, las víctimas se contabilizaron en cientos de miles; el fenómeno de la desaparición forzada en México está evidenciado, no se puede negar, tampoco ocultar que la magnitud del crimen de lesa humanidad afecta fundamentalmente al pueblo trabajador; y, en la actualidad, la desaparición forzada de personas, es parte de la situación política del país, existe y es recurrente como práctica de terrorismo de Estado, como expresión de violencia política, es decir, como violencia de clase contra el pueblo.

En ese marco de violencia se da la detención desaparición de nuestros militantes, su condición no es un hecho aislado, son parte de la estadística de las víctimas del terrorismo de Estado, política de gobierno asumida por los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, de donde emerge una línea política histórica que une al priismo y al panismo, la concepción profascista.

A nuestros compañeros Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya hoy se les conoce públicamente como lo que son, dos revolucionarios que militan en nuestro partido, el Partido Democrático Popular Revolucionario-

Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR); a pesar de la campaña mediática para desinformar, nuestro pueblo conoce que fueron detenidos-desaparecidos el 25 de mayo de 2007 en la Cd. de Oaxaca, Oaxaca por agentes del Estado mexicano por ser revolucionarios, por militar en el PDPR-EPR, es decir, por luchar con métodos revolucionarios para transformar el país en beneficio de los millones de mexicanos que viven explotados y oprimidos.

Desde esa fecha familiares, amigos, defensa jurídica, organizaciones políticas de masas, organismos defensores de derechos humanos, personalidades progresistas, hombres de la política honestos, ciudadanos sensibles a la injusticia y destacadas personalidades progresistas del ámbito internacional se solidarizaron para exigir su presentación con vida, gesto altamente humano que reconocemos y agradecemos con sinceridad desde la trinchera de la crítica de las armas.

Han transcurrido 16 años desde que se cometió el crimen de lesa humanidad, son a la vez los mismos años de lucha que desde las masas se ha exigido justicia; mismo tiempo que el pueblo organizado realiza denuncia política, de bregar tanto en el país como fuera de él para exigir justicia, presentación con vida y en libertad, verdad para conocer su paradero y condición actual y castigo a los responsables del crimen que lesiona a la humanidad; 16 años de lucha y solidaridad popular para exigir la presentación de nuestros camaradas que han significado a la vez 16 años de lucha por la presentación de todos los detenidos-desaparecidos del país.

A la vez son 16 años de indolencia y burocratismo gubernamental; tiempo transcurrido donde queda demostrada la continuidad de la política de gobierno fincada en la violencia de clase, de la cual no se excluye la administración en turno porque a diario se conoce de nuevos casos de desapariciones forzadas que condensan el grado de violencia política que emana del régimen, porque desde las instituciones a pesar del discurso oficial aún se criminaliza a quienes exigen la presentación con vida de los desaparecidos de manera forzada, así como la revictimización de familiares y solidarios con la demanda.

Nuestro pueblo conoció sobre la desaparición de nuestros camaradas, con las acciones político militares se rompió el silencio del gobierno y la verdad brotó por todo el país: en México existen miles de desaparecidos, tan grande es el fenómeno del cometido de crímenes de lesa humanidad en el país que es imposible ocultarlo, el reconocimiento de la existencia de más de 110 mil desapariciones forzadas hablan de la magnitud de la violencia de Estado y del crimen que se ha cometido,

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

es el indicativo de que *la violencia de Estado es recurrente*.

Dos casos de desaparición forzada por motivos políticos son relevantes en el país, el de nuestros compañeros y el de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Gro., ambos expresan que la desaparición forzada de personas en México está vinculada a la política represiva del gobierno fincada en la concepción contrainsurgente de la GBI.

Ambos expresan el rasgo cualitativo y cuantitativo de la política de gobierno de detener desaparecer por motivos políticos, es el resultado concreto de la política de gobierno fincada en la ideología del fascismo.

Entre el lapso de cada una de ellas se registraron miles de desapariciones forzadas en el país, todas tienen un sello característico, son producto del *combate al enemigo interno*; hoy las más de 110 mil desapariciones forzadas son parte de la estadística del terror de Estado.

Para entender el fenómeno de la desaparición forzada en el país, y en específico la de nuestros camaradas Gabriel y Edmundo hay que conocer el contexto político-histórico que vivía el país y la situación que acontecía en el estado de Oaxaca; conocer los hechos sociopolíticos y la política del gobierno que se ha sostenido sexenio tras sexenio bajo la bandera de combatir el narcotráfico y la delincuencia organizada; explorar la política del gobierno hacia el pueblo organizado a través de los sexenios priistas.

Política que se transfigura en violencia sistemática y generalizada que emana del régimen y sus instituciones, es decir, del Estado mexicano y los verdugos del pueblo; violencia de clase que afecta fundamentalmente al pueblo trabajador, al organizado, al inconforme, y desde luego, al pueblo que no está organizado para evitar que adquiera conciencia de clase.

Las víctimas de la violencia de Estado, los familiares, amigos y compañeros del que vive el crimen de lesa humanidad, organizaciones de derechos humanos y populares en su crítica política al régimen, plantean con dolor e indignación: ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? La respuesta es inequívoca, eso lo saben los funcionarios que estuvieron a cargo de la represión, lo conocen los gobernadores y los presidentes del país que en su momento no sólo conocieron de los hechos, ellos mismos son parte activa del fenómeno en tanto que el presidente de los Estados Unidos Mexicanos es el jefe máximo de las fuerzas armadas.

El pueblo con ansias de justicia pregunta ¿Dónde están los detenidos desaparecidos? Eso lo deben declarar los militares y policías que conforman la estructura de la represión, los que estructuraron y ejecutaron la violencia de Estado contra el pueblo; también deben declarar los políticos de oficio que dieron legalidad y cobertura política a la larga campaña de contrainsurgencia de mediados de los 60 a mediados de los 80 del siglo pasado, que arrojó infinidad de víctimas de la violencia del Estado.

El pueblo por experiencia sabe y tiene memoria histórica de que los funcionarios públicos que levantaron las banderas de la contrainsurgencia, entre ellos, los presidentes de la república, por excelencia tienen una concepción reaccionaria, se saben impunes y por consiguiente son cínicos, el botón de muestra lo constituyen Rubén Figueroa Figueroa, ex Gobernador de Guerrero y el ex presidente Gustavo Díaz Ordaz *que reconocieron que los desaparecidos políticos estaban muertos y que era fácil hacerlo*. Aceptación tácita del cometido de crímenes de lesa humanidad por parte del Estado mexicano, en sus propios dichos se confirma que éste es quien comete las desapariciones forzadas de personas en el país.

CONTEXTO HISTÓRICO Y POLÍTICO DE LA DESAPARICIÓN FORZADA EN EL MARCO DE LA CONTRAINSURGENCIA

La desaparición forzada en México es de larga data, un fenómeno de violencia de Estado, violencia política que viene desde los años treinta del siglo pasado, se recrudeció en los años 60-70 y se mantuvo en esa misma lógica en la década del ochenta; vuelve a ser noticia en los medios de comunicación en los 90 por la cantidad de víctimas en el “combate” contra la delincuencia y quienes luchaban por mejorar las condiciones de vida del pueblo; y a partir del 2000 a la actualidad adquiere mayor connotación, primero porque del 2000 al 2018 es producto de la política de gobierno, el terrorismo de Estado, y segundo porque en la actualidad se expresa como práctica de terrorismo de Estado.

El cometido de la desaparición forzada de personas es práctica del Estado mexicano sexenio tras sexenio que desde 1930 se ejerció como parte de la política de seguridad nacional, luego como mecanismo singular de la contrainsurgencia; práctica de los cuerpos policiaco militares que materializan la política represiva de los diferentes gobiernos desde esa fecha, en concreto, *la violencia que emana del régimen social tiene continuidad histórica*.

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

El aparato represivo en lo fundamental es el mismo cuerpo encargado de ejercer la violencia de clase y de Estado contra el pueblo, su composición y andamiaje parte de la doctrina contrainsurgente de donde emanan los crímenes de Estado. Está comprobado que el Estado mexicano es criminal desde su nacimiento y su esencia consiste en defender los intereses de la oligarquía mexicana.

El período denominado “Guerra Sucia” es un período de intensificación de violencia de Estado, fue una larga campaña de contrainsurgencia donde expresa con nitidez el autoritarismo del gobierno mexicano, éste se presentaba en el extranjero como un gobierno democrático cuando en realidad se sostenía con una política represiva, de ahí que se definiera al gobierno y régimen mexicano como una dictadura casi perfecta.

Por el tiempo de su cometido, por las formas de objetivarla y las estructuras del aparato represivo involucrado en la violencia de clase contra el pueblo, la desaparición forzada de personas en México expresa históricamente: a) crimen de lesa humanidad; b) crimen de Estado; c) práctica contrainsurgente; y, d) práctica de terrorismo de Estado. Su cometido corre fundamentalmente por el aparato represivo, los cuerpos policiaco militares, los grupos paramilitares e individuos que actúan bajo el consentimiento o la aquiescencia del Estado.

La desaparición forzada de personas, sea por motivos políticos o sociales, es violencia de Estado, es violencia de clase contra el pueblo, tanto para el que está organizado fuera de los marcos corporativizantes como el que no lo está producto de la alienación y la despolitización, tiene por objeto diseminar por todo el territorio nacional el terror de Estado con tres objetivos: 1) destruir la organización y la voluntad popular de combatir; 2) contener el descontento popular que cuestiona al capitalismo; y, 3) evitar la formación de la conciencia política que desemboca en la organización popular y en la voluntad popular de combatir a través de la lucha revolucionaria.

La evolución histórica de la desaparición forzada en México quedó registrada en el archivo de la represión que acumuló el aparato represivo, en su afán por criminalizar a la víctima las evidencias quedaron plasmadas en cada uno de los documentos que elaboró la Dirección Federal de Seguridad (DFS), el Ejército mexicano e instituciones encargadas de la represión.

Lo que en su momento constituyeron las fichas para justificar el proceder

criminal de la DFS, el Ejército mexicano y el resto de cuerpos policiacos del país, al paso del tiempo emergió como el vivo testimonio de la lucha contrainsurgente que se cebó en el pueblo, sus organizaciones y los revolucionarios.

A través de ese testimonio de la violencia de Estado y la impunidad se logró documentar irrefutablemente la existencia de la desaparición de personas por motivos políticos como una práctica represiva que comete desde hace muchos años, es decir, el Estado mexicano a través del ejército y policía la practicaba contra toda la disidencia política al régimen, este aspecto denota que la Desaparición Forzada de Personas (DFP) tiene *larga data*, lo que confirma que la violencia de Estado es histórica.

Las estadísticas e innumerables hechos de represión registran la lógica de la violencia de Estado que revelan y confirman que éste desde su fundación es criminal, es el administrador y ejecutor de la violencia de clase contra el pueblo.

En un principio la DFP era poco visible a la opinión pública, aunque su práctica estaba generalizada en todo el andamiaje del aparato represivo y en todo el cuerpo de las instituciones que conforman el Estado mexicano.

Adquirió el carácter de generalizada y tanta era la impunidad en su cometido, que no se requirió pudor para documentarla porque entre los que detentan el poder hay identidad política e ideológica, no era necesario reparar en barreras morales para documentar las arbitrariedades de los agentes del Estado; se registraron en forma de fichas políticas, en estadística del abatimiento de “malhechores”; las evidencias de su cometido quedaron plasmadas en forma de informes contrainsurgentes, es el frío testimonio de los crímenes que se cometían contra el pueblo porque el PRI era gobierno, porque éste se sentía impune al jugar el papel de administrador de los intereses de la burguesía mexicana.

A la vez, se logró tener un registro y seguimiento público a partir de la exigencia de las víctimas, en la medida que aumentó la denuncia política y la movilización popular por la presentación de los detenidos desaparecidos y con la denuncia política en el plano nacional e internacional, se obligó a la institucionalidad a registrar los saldos de la violencia de Estado que conforman la memoria histórica del pueblo.

De 1940 a mediados de los años 60 la DFP aún tenía un carácter tosco, no disimulaba su proceder, los agentes del Estado y todo el aparato represivo actuaron con plena impunidad, su actuar criminal no lo disimularon, simplemente

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

procedieron a ejercer la violencia de Estado, asumían que por ser funcionarios o agentes del Estado podían actuar sin ningún límite moral, político o jurídico.

De 1940 a 1968 la DFP se ejerció contra el sujeto político que ejercía crítica política, contra el disidente del régimen. La represión contra el movimiento ferrocarrilero, de electricistas, médico, magisterial y estudiantil incluyó entre otras prácticas aberrantes la desaparición forzada, el secuestro y el asesinato político.

De finales de los 60 a mediados de los 80 del siglo pasado la DFP fundamentalmente se ejerció contra el sujeto revolucionario, adquiere un carácter contrainsurgente. El movimiento revolucionario enfrentó de manera dispersa y atomizada la violencia que emanó del Estado, fincada en la estrategia de seguridad nacional y en la doctrina de la contrainsurgencia se planteó el aislamiento político de los revolucionarios y posteriormente su aniquilamiento político-organizativo, es el período que registra un incremento ininterrumpido del crimen de lesa humanidad, la DFP.

A partir del año 2000 a la fecha la DFP adquiere otra connotación, es parte de la política de gobierno fincada en el terrorismo de Estado, eso le da consistencia a su nueva especificidad, es generalizada y sistemática, dirigida contra el sujeto despolitizado, el sujeto crítico, el sujeto político, el sujeto revolucionario, por tanto, es contra todo el pueblo, en específico contra el organizado.

El contexto histórico bajo el cual se comete la desaparición forzada de personas es el proceso del desarrollo del capitalismo en México y sus contradicciones inherentes, éstas se agudizaron y la desigualdad económica, política y social dieron pie al crecimiento de la inconformidad política, de ésta se pasó a la protesta popular que conlleva la crítica política del pueblo organizado.

La represión fue una constante para contener y desarticular la inconformidad y la protesta popular; la violencia de clase adquirió formas diferentes y escaló a tal magnitud que se cerraron los canales legales para la transformación pacífica del país.

En ese marco de violencia de Estado la crítica política de las masas adquirió nuevas formas de expresión y desarrollo, emergió la crítica de las armas como evolución lógica de la lucha de clases, es decir, ante un régimen que reproduce la iniquidad y un Estado que administra la violencia de clase para contener y destruir toda expresión de la voluntad popular de combatir, emerge la organización

revolucionaria y el planteamiento de la transformación de la sociedad bajo el proyecto emancipador del socialismo, formalmente a partir de 1965.

En ese contexto y lógica de desarrollo, el pueblo se organiza para enfrentar la violencia que emana del régimen y del Estado, éste es el que ejerce constitucionalmente la violencia contra el pueblo, es el que tiene el monopolio de ella; la autodefensa y la organización revolucionaria políticamente emergió como respuesta organizada ante el grado de explotación y opresión, como necesidad de organizar la autodefensa de las masas ante la violencia de Estado.

La política del gobierno históricamente ha sido represiva, no hay variante en su esencia, sólo las formas de cómo ejercerla cambian. A partir de mediados-finales de los sesenta del siglo pasado el Estado adoptó la doctrina de la contrainsurgencia promovida por el imperialismo norteamericano, consistió en la armazón teórica para crear el enemigo interno a combatir; en la creación de estructuras legales y clandestinas para objetivar la violencia de clase; y se recurrió al cometido de la desaparición forzada de personas como expresión especializada de la represión contra el movimiento popular y el revolucionario a través de la GBI.

La doctrina de la contrainsurgencia tiene por objetivo, a) el control absoluto de la sociedad por parte del aparato represivo, control a través de la violencia que emana del régimen, instituciones y los hombres que las hacen funcionar, y b) la destrucción de toda expresión de organización independiente del pueblo y la voluntad popular de combatir.

El medio para lograrlo es la administración de la violencia contra los explotados y los oprimidos, el objetivo inmediato es el aniquilamiento político-organizado de toda expresión de lucha y organización del pueblo, en específico la de los revolucionarios.

La desaparición forzada en México adquiere connotación en la medida que es cometida por todo el aparato represivo, por consiguiente, históricamente es el Estado mexicano a través del aparato represivo y sus agentes quien la comete, sin importar si se sobrevive a ella después de tal o cual tiempo, se ha configurado como delito de lesa humanidad, deja de ser hasta que se conoce condición y paradero de la víctima de desaparición forzada.

Los testimonios de las víctimas de desaparición forzada indican el modus operandi de los cuerpos policíacos en el cometido del crimen de lesa humanidad,

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

en dicho período histórico, desde el momento que se era detenido por los cuerpos policiaco militares de objetivar la contrainsurgencia, se es *detenido-desaparecido*, la víctima se encuentra en manos del Estado, en total indefensión; es sometida a un proceso de deshumanización a través de tratos crueles y degradantes, convertido en piltrafa humana, su destino está en manos de los desaparecedores, es decir, de los agentes del Estado que mantienen la máquina represiva en funcionamiento.

La desaparición forzada de personas es una forma específica de *violencia de Estado*, constituye crimen de lesa humanidad y a la vez de Estado, tiene por objetivo no dejar “rastro” del detenido, éste es sustraído de su ser social, de su contexto sociopolítico, de su condición humana, transmutado a base de violencia sistemática en objeto, en número, en expresión coloquial del argot policiaco militar, en estadística macabra.

Desde el Estado se pretendió sepultar en el olvido la existencia de desaparecidos por motivos políticos, de su condición revolucionaria y que estaban en manos del Estado; pretendió cobijar con el manto de la impunidad a los perpetradores con más violencia institucional, no obstante, con base a la política y movilización popular se forjó la memoria histórica para no olvidar, para no perdonar; de la exigencia de la presentación con vida de los detenidos desaparecidos emerge una nueva expresión de la voluntad popular de combatir.

La violencia de Estado no sólo se constreñía a los detenidos desaparecidos en las décadas de los 60-80 del siglo pasado, abarcó también al entorno familiar y social de la víctima, las cifras aún son incalculables porque como parte de dicha política represiva, desde el gobierno en turno se negó la existencia de la DFP, con ello se pretendió garantizar impunidad a los perpetradores.

Desde los años 30 del siglo XX han pasado décadas de violencia de Estado donde la desaparición forzada es práctica común en los cuerpos policiaco militares; fenómeno que compone y explica la política represiva del gobierno, la lógica de la violencia de Estado y la estructura contrainsurgente que la implementó; basta señalar los principales episodios de represión para dejar testimonio del carácter criminal del PRI-gobierno y su política contrainsurgente:

- 1931, San Luis Potosí, el gobierno de Saturnino Cedillo reprime al movimiento magisterial que demandaba alto al hostigamiento en contra de los profesores, fueron detenidos-desaparecidos 150 maestros, algunos de

ellos fueron llevados al rancho personal del gobernador a realizar trabajos forzados.

- En el marco de las elecciones presidenciales de 1940, se reprimió a los almanistas que denunciaban fraude electoral, se impuso como presidente de la república al General Ávila Camacho, la detención desaparición de seguidores del general Almazán fue parte del repertorio represivo, fueron conducidos al cuartel militar de San José en Tenancingo, Estado de México, sacados de ahí para no volver a saber de ellos. El motivo es político, contradicción en el seno de la “familia revolucionaria”, es decir, interburguesa. En la represión participaron el Ejército mexicano, policía municipal, presidentes municipales, comandantes de policía, diputados locales y el presidente electo.
- En la década del 50 el movimiento henriquista y la Federación de Partidos del Pueblo Mexicano (FPPM) fueron reprimidos. La desaparición y asesinato de sus dirigentes locales o encarcelamiento fue una constante.
- En la persecución política contra los jaramillistas el ejército detenía-desaparecía a seguidores de Rubén Jaramillo, muchos de ellos en 1952 fueron asesinados, se configuró la detención desaparición que culminaba en la ejecución extrajudicial, el responsable material: el Ejército mexicano.
- La persecución y represión a los militantes del Partido Comunista Mexicano (PCM) a mediados-finales de la década del 40, la desaparición forzada, en la figura de “estar incomunicados” fue parte de las prácticas del gobierno de Miguel Alemán, éste asumió la política anticomunista del imperialismo norteamericano y de esta política se creó la Dirección Federal de Seguridad (DFS), que para 1947 ya estaba en funciones y desaparecía personas, su actuar obedecía directamente las órdenes del presidente de la república.
- Los sinarquistas también fueron objeto de la represión, vivieron la desaparición forzada de sus integrantes en 1952, bajo la figura de “secuestro político” se mantenía en calidad de desaparecidos a los detenidos.

Los indicios históricos revelan que la práctica de la desaparición forzada de personas es de larga data, por lo menos desde 1930, los perpetradores siempre han sido los agentes del Estado y todo el aparato represivo, el PRI-gobierno se

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

especializó en esa materia.

El PRI heredó del Partido de la Revolución Mexicana (PRM) la política represiva que se implementó en cada gobierno que emanó de sus filas, el asesinato político y la desaparición forzada fue una práctica deletable que daba materialidad a dicha política. La desaparición forzada es una práctica histórica del Estado mexicano, reafirmamos, revela su condición criminal.

Podemos concluir que en este ciclo de violencia de Estado que va de 1930 a 1950 la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial era práctica común en todo el aparato represivo del Estado mexicano, éste reprimió a quienes ejercían la crítica política desde las masas, a quienes emergieron como opositores al régimen, a quienes se organizaron de manera independiente, a quienes se opusieron en los procesos electorales al PRM, a los que disintieron al interior de la “familia revolucionaria”, a los comunistas, a los sinarquistas. Es la expresión concreta de la consolidación de la burguesía en el poder y la consolidación del Estado mexicano como instrumento para imponer los intereses de la clase que detenta el poder por medio de la administración de la violencia de clase, es decir, de los burgueses.

En la década del 60 se da un proceso de transición para arribar a la década del 70 donde la desaparición forzada emerge como práctica del aparato represivo más sistematizada y adquiere nuevas características el aparato represivo. Se criminaliza al sujeto crítico, al político y al revolucionario con el objetivo de “despolitizarlo”, es decir, no reconocer su condición política ni los motivos de su lucha.

La desaparición forzada de personas en la historia de México emerge como una práctica aborrecible que al paso de los años se perfeccionó, los cuerpos policiaco militares se capacitaron para cometerla de manera más sistemática, se vuelve como parte indispensable del andamiaje represivo.

En los medios de comunicación de la época (1940-1960) se le denomina ya como desaparición o como secuestro político, la desaparición/secuestro es parte de la represión política e ideológica, es ya una práctica del Estado que adquiere sistematicidad y está centralizada por la cúpula policiaco militar.

Insistimos, en la década del 40 del siglo pasado la crítica política de las masas fue ejercida por trabajadores de la educación, campesinos y obreros; expresa la inconformidad producto de la injusticia, ésta está fundada en el desarrollo capitalista que engendra iniquidad, en cada demanda y exigencia del pueblo inconforme está

la condena a la lógica depredadora del capitalismo.

La violencia de Estado se fundamentó en la concepción anticomunista para justificar el aniquilamiento de la oposición al régimen y a los comunistas, la *limpieza política* se implementó al interior de las instituciones del Estado y de las organizaciones de trabajadores corporativizadas.

La corporativización del movimiento obrero, campesino y magisterial fue resultado de la violencia de Estado, así, la “reorganización” de los sindicatos fue a través de las intervenciones policiaco militares.

De 1958 a 1968 la represión alcanzó el movimiento ferrocarrilero, el magisterial, el de médicos y el de electricistas; entre 1959 y 1963 a la Asociación Cívica Guerrerense y la Unión Cívica Potosina; entre 1960 y 1965 a movimientos campesinos en Chihuahua y Morelos. Se aniquilaron con la represión proyectos organizativos sindicales y populares que desde el Estado se les consideró enemigos de clase, la cima de todo el ciclo represivo es contra el movimiento estudiantil popular que va de 1968 a 1971.

En conjunto estos hechos violentos evidenciaron el carácter represivo del gobierno, la condición autoritaria del régimen político, la existencia de la desigualdad económica, política y social que condena a millones de mexicanos a vivir en la pobreza, sometidos a explotación y opresión.

El arsenal de la represión pasó por la cooptación de líderes, cooptación o imposición de dirigencias sindicales, asesinatos de dirigentes, masacres, y desde luego la desaparición forzada, práctica común entre los cuerpos policiacos y militares, asimismo los políticos de oficio.

Para contener el descontento y la organización popular se crearon cuerpos especiales para ahogar en sangre y fuego la protesta popular, ésta evolucionó como necesidad política a la crítica de las armas como expresión de autodefensa ante la violencia de Estado.

En el marco de una situación revolucionaria en el país el Estado implementó la estrategia de contrainsurgencia, doctrina fincada en la concepción reaccionaria que impuso el imperialismo norteamericano a los gobiernos de América Latina con la Guerra de Baja Intensidad (GBI).

Los cuerpos policiaco militares que se crearon para combatir al movimiento

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

revolucionario fueron diseñados bajo dicha doctrina que tiene por fundamento el anticomunismo y deriva en el cometido sistemático de crímenes de lesa humanidad.

El período denominado “guerra sucia” para delimitar la violencia que se vivió en el país entre mediados de los años sesenta hasta mediados de los ochenta del siglo pasado, en realidad corresponde a una larga campaña de contrainsurgencia que pretendía como objetivo aislar a los revolucionarios de su base política para poder aniquilarlos política, organizativa y militarmente.

El concepto de “guerra sucia” carece de objetividad, permite que el Estado se deslinde de los crímenes de lesa humanidad que cometió, no hay guerras limpias, ni sucias; en México lo que se vivió en dicho período es la violencia de Estado contra el pueblo que luchaba por la transformación de la sociedad en beneficio de los desposeídos, violencia administrada y ejercida de manera sistemática que toma cuerpo conceptual en la política de gobierno fincada en la GBI.

Desde dicha doctrina contrainsurgente se criminaliza al combatiente por la transformación social, es presentado como enemigo interno a combatir, no se combate insurgentes sino delincuentes; al revolucionario se les despolitiza, es decir, se le despoja de todo ideario político e ideológico, los medios de comunicación, instituciones, hombres del régimen y el aparato represivo lo presentaron como agente del extranjero para subvertir el orden público, como el terrorista que actúa bajo la férula de potencias extranjeras; desde esa perspectiva el comunista no es el combatiente que lucha por la justicia social, se le presenta como bandido, como gavillero, asesino y portador de toda la descomposición social.

El fortalecimiento de la burguesía como clase que detenta el poder y el proceso de industrialización del país se fincó con la represión, en esa ruta están el aniquilamiento de la disidencia dentro de la “familia revolucionaria” que enarbolaba primero el PRM y posteriormente el PRI; la imposición violenta del charrismo sindical, la represión masiva a obreros y trabajadores de la educación, la persecución a los comunistas y la ilegalización del PCM e incluso la persecución contra sinarquistas. El gobierno de Miguel Alemán se fincó en la concepción anticomunista, por consiguiente, desencadenó un nuevo ciclo de violencia institucional contra el pueblo.

El Ejército mexicano y la DFS son los instrumentos de la represión en este nuevo ciclo de violencia, de su coordinación para objetivar la represión emergió

la cúpula policíaco militar que planeó, estructuró y ejecutó la violencia de Estado bajo la concepción contrainsurgente, estructura de la represión que ha tenido homogeneidad teórica, continuidad operativa y mando estratégico y táctico único a través de los años y de los sexenios gubernamentales. Ambas instituciones constituyen parte del mismo instrumento opresor, se convierten en el puntal principal del régimen, sobre todo el ejército se convierte en la columna vertebral del Estado mexicano.

La condición apolítica del ejército y cuerpos especiales policíacos que proyectan mediáticamente desde los diferentes gobiernos es una mera apariencia, su apoliticidad en realidad es la afinidad política e ideológica de los opresores, del gobierno antipopular, del Estado autoritario, de los políticos de oficio profascistas.

El ejército ha tenido en nuestra historia reciente poder político, lugar privilegiado en la estructura del Estado mexicano. En la década del 60 del siglo XX en la cúpula del ejército se dio un giro a partir de la concepción contrainsurgente, desde entonces su papel principal ha consistido en combatir al enemigo interno, comprendiendo a éste al pueblo organizado fuera de las estructuras corporativizantes, es decir, al pueblo organizado a través del principio de la organización independiente que plantea la emancipación popular, al pueblo que abraza la crítica de las armas como táctica de lucha.

La formación de grupos antiguerrilleros, la preparación teórica-táctica contraguerrillera en el ejército, la elaboración de manuales antiguerrilla y guerra irregular anunciaron con antelación la guerra contra el pueblo que se avecinaba, ésta pronto cobró cientos, miles, decenas de miles de víctimas, todas del pueblo trabajador, de las masas inconformes, del pueblo organizado.

Entre 1964 y 1974 la oficialidad del ejército se instruyó en la guerra irregular, en la lucha antiguerrillera, se asumió la concepción contrainsurgente norteamericana fincada en la (GBI) en plenitud, se envió a oficiales a que se prepararan en ese campo, se graduaron como asesinos de Estado y asumieron el mando de la contrainsurgencia en el país.

Es en este contexto que emerge la cúpula contrainsurgente en el Ejército mexicano responsable de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron de 1965 a 1985, así como los acontecidos de mediados de los noventa del siglo pasado a la fecha en el contexto del terrorismo de Estado.

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

Misma ruta siguieron los cuerpos policíacos, destinaron personal para su preparación por el FBI y la Escuela Internacional de Policía, de donde emergieron también criminales de Estado como Miguel Nazar Haro en 1965.

Al amparo de la lucha contra el comunismo la DFS coordinó y encabezó la represión contra comunistas, sindicalistas e intelectuales progresistas, fue durante la década del 50 y el 60 la punta de lanza de la represión contra el sujeto crítico y progresista, el sujeto político que generaba crítica al régimen estuvo bajo el asecho tanto del ejército como de la DFS, ambos cometieron infinidad de crímenes de Estado.

A finales de 1965 la DFS formó un grupo especial de espionaje y contraespionaje para combatir al movimiento revolucionario, grupo especial denominado C-047 bajo el mando de Nazar Haro; sólo rendían parte a la DFS que comandaba el capitán Fernando Gutiérrez Barrios. La DFS se abocó de lleno a la contrainsurgencia.

Los batallones militares contrainsurgentes, los cuerpos policíaco militares y paramilitares de carácter contrainsurgente se especializaron en “investigación e interrogación”; la tortura, la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial se convirtieron en método y en sistema represivo. Entre dichos cuerpos policíacos y militares y/o policíaco militares están la Brigada de Fusileros Paracaidistas, la Brigada de Fusileros, el Batallón de Policía Militar y el Segundo Batallón de Policía Militar, y la Brigada Especial, es decir, la Brigada Blanca.

A partir de 1969-1970 el ciclo de violencia alcanzó dimensiones no conocidas hasta ese momento, implicó la coordinación de las instituciones encargadas de ejecutar la contrainsurgencia, respaldadas por todo el Estado, instituciones, hombres del régimen, empresarios recalcitrantes, monopolios de la comunicación, todo lo que representaba el sistema de opresión cerraron filas en torno a la política de gobierno fincada en la represión.

Los políticos de oficio secundaron las exigencias del mundo empresarial, avalaron la violencia con la modificación de la ley; los funcionarios y los hombres del régimen hicieron funcionar las instituciones como parte del engranaje represivo; el aparato represivo desató la violencia contra el pueblo; la desaparición forzada de personas fue parte sistemática del terror de Estado.

La coordinación y unificación del mando del aparato policíaco militar se tradujo en operativos de la larga campaña contrainsurgente contra el movimiento

revolucionario y el movimiento popular fuera de los marcos corporativizantes, los ejemplos son ilustrativos de la magnitud de la violencia que emergió desde el Estado mexicano: 1) La primera campaña contrainsurgente en Guerrero entre junio y septiembre de 1970, llamada *Operación Amistad*; 2) Las detenciones de militantes de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria (ACNR), del Movimiento de Acción Revolucionaria (MAR), y del Frente Urbano Zapatista (FUZ), entre 1971 y 1972; 3) El *Plan de Operaciones Silenciador* (POS) que tenía por objetivo aniquilar a la organización revolucionaria UNIÓN DEL PUEBLO (UP).

Operativos que se tradujeron en detenidos, torturados, encarcelados, en ejecuciones extrajudiciales, en detenciones desapariciones; en cada uno de ellos el signo de la operatividad de los cuerpos policiaco militares fue la violencia desenfundada contra el sujeto revolucionario.

La DFS, por orden superior, se convirtió en un instrumento policiaco para cazar guerrilleros; el Ejército mexicano se perfeccionó con unidades especializadas en la lucha contraguerrillera que buscaban localizar y fijar en el terreno a la ACNR y el PDLP para su aniquilamiento.

La coordinación operativa y la coordinación administrativa hicieron más efectiva la detención-desaparición forzada, las víctimas incrementaron incontablemente, la violencia de Estado es más sistemática: la DFS investiga, detiene-desaparece, tortura, sistematiza la información. Ésta, así como detenidos son enviados al Campo Militar N° 1, ahí se define su presente y futuro, se entrega a las autoridades civiles para su encarcelamiento o liberación, o se le elimina físicamente o se es desaparecido.

Normalmente se indica que el responsable de la violencia contrainsurgente es obra exclusiva del Ejército mexicano y la DFS, no obstante, la burguesía asentada en Nuevo León tiene mucha responsabilidad, son los grandes empresarios de esta región los que la exigieron y la financiaron, no es fortuito que en el estado de Nuevo León se instalara el Cuartel General Contra la Subversión (CGCS) dirigido por connotados agentes del Estado anticomunistas como Ricardo Condelle Gómez, responsable directo de los crímenes de Estado cometidos contra el movimiento obrero, el popular, campesino, estudiantil y el revolucionario.

Connotados empresarios pusieron a disposición del CGCS recursos financieros para la creación de grupos paramilitares e infraestructura donde se montaron

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

cárceles clandestinas, centros de detención y de tortura de la misma condición, lugares donde se condujeron a los revolucionarios detenidos desaparecidos o del movimiento popular, de donde ya no se supo de ellos.

La cadena de mando quedó establecida: comandantes de los cuerpos contraguerrilleros reportan a la DFS, ésta al Ejército mexicano, información y mando centralizado en la Secretaría de Gobernación, la SEDENA y el Presidente de la República. Todo el aparato represivo estaba coordinado por el Ejército mexicano, entre policías municipales, estatales, federal, grupos especiales contraguerrilleros, todos subordinados a la estrategia contrainsurgente.

La estructura y el Estado Mayor de la Brigada Especial o Brigada Blanca nos ilustra su composición militar, carácter contrainsurgente, concepción anticomunista y el proceder criminal ante los revolucionarios y el pueblo inconforme.

Todos sus integrantes recibieron entrenamiento especial, es decir, contrainsurgente, la mayoría de sus componentes los aportó el ejército mexicano. El entrenamiento consistió en: conocimiento sobre el movimiento revolucionario, técnicas de seguridad, comunicaciones y codificación, fabricación de explosivos, neutralización de artefactos explosivos, técnicas de aprehensión y registro, técnicas de interrogatorio y “conducción de detenidos”.

El *Plan de Operaciones Silenciador* (POS), es la ofensiva policiaco militar contrainsurgente contra la Unión del Pueblo (UP) que perseguía como objetivos: *“impedir que el grupo revolucionario continuara con la acción revolucionaria y desarticular definitivamente a la UP como organización revolucionaria clandestina”*. Es decir, se trataba de aniquilar política y militarmente a la UP, raíz histórica de nuestro partido.

Para concretar el plan se crearon cuatro grupos de acción conjunta y uno de respaldo. Cada grupo tenía diez agentes de la DFS, cinco de la policía militar y diez militares de la zona militar de Oaxaca, Distrito Federal y Jalisco. Todos se lanzaron a la caza de los militantes de la Unión del Pueblo.

Los lineamientos operativos se definieron desde la concepción contrainsurgente, se pretendió localizar, detener y encarcelar a los militantes de la UP en Jalisco, Oaxaca y el DF, la prioridad era su detención con vida para efectuar “interrogatorios” y continuar con el plan contrainsurgente a partir de dichos resultados.

La esencia del POS es contrainsurgente, tuvo por técnica especializada

la detención desaparición de militantes de la UP, acto seguido proceder a ser “interrogados”, es decir, ser sometidos a tortura para obtener información y lograr nuevas detenciones-desapariciones que permitiera su aniquilamiento como organización revolucionaria.

Surge la incógnita, ¿por qué no prosperó el plan contrainsurgente contra la UP? Por los métodos de organización revolucionaria, las medidas de la clandestinidad y la ideología de los militantes, CLANDESTINIDAD, NORMAS DE SEGURIDAD Y FORTALEZA IDEOLÓGICA es lo que hizo la diferencia para evitar golpes estratégicos del enemigo, en ese marco de violencia contra nuestros militantes murió en el potro de la tortura en manos de Nazar Haro el camarada Joel Silva Aréstegui, “*El panterita*” que ante la exigencia del torturador de que “cantara”, entonaba nuestro himno de combate *La Joven Guardia* como expresión de combatividad y la certeza de que era el último combate a librar.

Los interrogatorios buscaban tener información sobre la composición organizativa, de la dirigencia nacional, el entrenamiento y capacidad operativa de los militantes, si éstos recibieron entrenamiento en el extranjero, redes de apoyo y financiamiento. Es obvio que la cúpula que organizaba y dirigía la campaña contrainsurgente necesitaba crear una lista de militantes de la UP para pasar a un nuevo ciclo de persecución y aniquilamiento.

La campaña contrainsurgente en el país cobró muchas víctimas, los responsables del cometido de crímenes de lesa humanidad tienen rostro y nombre, éstos emergen en el momento y al paso de los años, son los responsables y operativos de la estrategia de contrainsurgencia: el General Mario Acosta Chaparro, Capitán Fernando Gutiérrez Barrios, Miguel Nazar Haro, Tomás Morlet, Eliseo Jiménez Ruiz, Carlos Ulises Acosta Vázquez, Wilfrido Castro Contreras, el general Francisco Quiroz Hermosillo, Arturo Durazo Moreno, Francisco Sahagún Baca, Sosé Salomón Tanús, Rafael Rocha Cordero, Jesús Miyazawa Álvarez, Obregón Lima, Joaquín Solano Chagoy..., no son los únicos, pero sí los más conocidos por su condición criminal.

Todos gozaron de protección jurídica y política, actuaron con total impunidad, cometieron infinidad de crímenes de Estado; ejecutaron la guerra contrainsurgente que cobró miles de víctimas y desataron la violencia sistemática contra el pueblo. Permanecieron en completa impunidad, a la historia pasan como los asesinos del pueblo.

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

En el sistema de represión contrainsurgente jueces, Ministerios Públicos, directores de reclusorios, abogados de oficio participaron como soporte de la contrainsurgencia, avalaron con su actuar la detención-desaparición forzada de personas.

El discurso de la contrainsurgencia también es criminal, es el dedo inquisidor que indica quién será la próxima víctima; pensamiento y acción que criminaliza y decide el final de las víctimas de la contrainsurgencia. Es la parte que comprende la guerra psicológica contra el pueblo para ganar “mentes y corazones”, para quitar simpatía por los revolucionarios y se tome como un “mal necesario” su exterminio.

En la estrategia contrainsurgente se plantea el *combate al enemigo interno*, es decir, al pueblo organizado, todo el aparato represivo es organizado y estructurado para hacer *la guerra contra el pueblo*, se plantea el objetivo de destruir la voluntad popular de combatir, aniquilar toda expresión organizativa de la crítica de las armas, aniquilar físicamente al sujeto revolucionario.

La contrainsurgencia comprende acciones económicas, políticas, sociales y psicológicas que preceden al golpe militar, la acción militar es la cúspide de la acción contrainsurgente. La *Guerra contra el pueblo* se hace con la *acción social* que comprende las labores de salud pública, de odontología, de belleza, tienen un propósito: levantar información del “enemigo interno” para preparar la ofensiva policiaco militar.

La acción psicológica está diseñada para deslegitimizar al sujeto político, a éste no se le presenta como un combatiente por el cambio social, ante la opinión pública se le proyecta como delincuente, se le criminaliza y se le despoja de todo contenido político, ideológico y moral, a él se le atribuyen la expresión de toda la descomposición de la sociedad.

Bajo este componente de la GBI, al sujeto revolucionario desde los voceros del gobierno y los medios de comunicación se le presentó como el portador de todos los males sociales de la época y de la concepción reaccionaria: alcoholismo, homosexualidad, resentimiento social, drogadicción, vagancia, entre otras. Con tal discurso se promovió la aceptación y deseo público de la aniquilación de los revolucionarios.

La narrativa del Estado consistió en proyectar públicamente que combatía delinquentes comunes y no guerrilleros, éstos no existían; el Ejército mexicano y la

DFS no combatían a revolucionarios sino a sujetos portadores de la descomposición que sólo se dedicaban a la “comisión de delitos”. Discurso oficial que permitió en cierta medida ocultar la guerra contra el pueblo, presentar a la violencia contrainsurgente como necesaria y deseable socialmente, justificar el cometido de crímenes de lesa humanidad, diluir la responsabilidad del Estado y borrar la huella de la violencia de éste.

Desde las autoridades, el funcionario de todos los niveles, así como todos los integrantes del aparato represivo, con ayuda de los medios masivos de comunicación persiguen un objetivo común, envenenar a la opinión pública, ganar su aprobación que les permita el cometido de crímenes de lesa humanidad. Por ejemplo, el gobernador en Oaxaca sostenía sin empacho que en “En Oaxaca, ni hay persecución de presos políticos, ni existen presos políticos. Nadie ha sido detenido por profesar ideologías contrarias a las del país. Todas las personas que fueron detenidas durante el movimiento universitario pasado, fueron procesadas por delitos del fuero común”. Típico ejemplo del discurso gubernamental, en su negativa está la aceptación tácita de la política represiva, en este caso, del cometido de crímenes de lesa humanidad.

LA REPRESIÓN Y LA DESAPARICIÓN FORZADA FUNDADA EN LA DOCTRINA CONTRAINSURGENTE DE LA GBI Y EL TERRORISMO DE ESTADO

En los años de 2006-2007, en el país como en el estado de Oaxaca, se vivía un contexto de violencia de Estado, ésta era generalizada y sistemática, es decir, el terrorismo de Estado; violencia que destaca por tener un marcado carácter contrainsurgente.

Los costos de esta política se expresaron en infinidad de crímenes de lesa humanidad, despuntan por su cantidad la desaparición forzada de personas y la ejecución extrajudicial, van acompañados de la prisión por motivos políticos, la prisión injusta y el desplazamiento forzado producto de la violencia.

El combate al narcotráfico y a la delincuencia organizada fue la cortina de humo para ocultar la guerra contra el pueblo fincada en la GBI; la declaración de la guerra contra dichos fenómenos propios del capitalismo se tradujo en crímenes de lesa humanidad, el país se sumió en una ola de terror, de violencia que emana de la sociedad y las instituciones.

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

El combate al narcotráfico es un componente de la GBI, se finca en tácticas especiales de combate donde figura la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, en el gobierno de Felipe Calderón figuró como el enemigo interno a combatir, sin embargo, los acontecimientos evidenciaron que se trataba de una nueva ofensiva y campaña contrainsurgente para anular toda expresión de voluntad popular de combatir, sembrar el terror para que ésta no evolucionara a formas superiores de lucha por parte del pueblo.

Felipe Calderón llegó a los Pinos producto del fraude electoral, un fuerte rechazo popular se dio por todo el país; se instaló en Palacio Nacional con el puntal del aparato represivo, en específico, del Ejército mexicano reforzado por la Marina. Se expresó su condición ilegítima y sólo podía ejercer su mandato presidencial a base de violencia de clase.

En este contexto de ilegitimidad y rechazo popular, la política de gobierno fincada en el terror de Estado generó un baño de sangre por todo el país, de manera sistemática se cometieron desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales; emergieron las fosas clandestinas como expresión macabra del cometido de crímenes de lesa humanidad; se configuró la estadística del terror que daba cuenta de los crímenes de Estado.

La violencia de Estado es más nítida en el marco de los acontecimientos en Oaxaca durante los años de 2006 y 2007 en torno al movimiento magisterial-popular que exigía como demanda principal la renuncia del gobernador, Ulises Ruiz Ortiz, éste de origen priista y una concepción que coincidía con la política de gobierno enarbolada por el gobierno federal de militancia panista, la del terrorismo de Estado.

La política de gobierno de Ulises Ruiz coincidió plenamente con la del gobierno federal encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, fincada en el terrorismo de Estado, es decir, en la violencia de clase sistemática y generalizada contra el pueblo oprimido; el resultado, la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos; miles de ciudadanos fueron víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, la estadística registra cientos de miles de víctimas, sin embargo, desde el gobierno siempre se ha reconocido una mínima expresión de la violencia de Estado, a pesar de dicha actitud, de reconocer decenas de miles en un principio, hoy se acepta oficialmente la existencia de más 110 mil víctimas de desaparición forzada.

La magnitud de la violencia desencadenada contra el pueblo organizado quedó registrada en el informe de la Comisión de la Verdad de Oaxaca, presentado en marzo de 2016, constituye un testimonio desgarrador de la violencia que enfrentó el pueblo que exigía justicia, y a través de él se confirma que el gobierno de Ulises Ruiz fincó su política en la doctrina contrainsurgente de la GBI, así queda de manifiesto cuando la procuradora de ese gobierno sentenciaba que enfrentaban a la guerrilla urbana para justificar la represión contra las masas trabajadoras que protestaban y exigían la renuncia del tirano.

La verdad es objetiva y concreta, desde el gobierno se decidió ejercer la violencia de Estado contra el pueblo que protestaba, contra el pueblo que exigía justicia; los cuerpos policiaco militares nunca se enfrentaron con la “guerrilla urbana” como vociferaban los funcionarios, por el contrario, asesinaron a un pueblo a mansalva, al pueblo que estaba desarmado y que por las voces que llamaban a la conciliación lo imposibilitaron a que recurriera a la autodefensa, esos fueron los jilgueros políticos que sembraron el desorden y facilitaron la acción contrainsurgente.

Con justeza se puede preguntar, ¿por qué en México existe y se comete la desaparición forzada? ¿Por qué acontecieron hechos violentos contra el pueblo que protestaba en Oaxaca en el 2006 y 2007? La respuesta la encontramos en la historia moderna de nuestro país, en la política interna y externa que ha sustentado el gobierno mexicano.

México tiene una política de doble racero, hacia el exterior se presenta como un país que respeta los derechos humanos, en esa lógica ha suscrito a nivel internacional acuerdos en materia de derechos humanos; y, a nivel interno, tiene un estado de derecho que no permite aplicar dichos tratados, en lugar de ser protector de los derechos humanos los viola sistemáticamente producto de la política de gobierno que pondera “seguridad para garantizar desarrollo económico”. En pocas palabras hacia el exterior se proyecta como un gobierno democrático y hacia el interior se es un gobierno que reprime al pueblo.

La política de gobierno se ha mantenido invariable a través de los años, adquiere carácter transexenal en la medida que cada gobierno que arriba a la administración federal retoma en general la misma política contra los desposeídos, fincada en la violencia de clase, ésta en los últimos sexenios adquirió condición generalizada y sistemática que se expresa en la existencia de cientos de miles de víctimas de la violencia de Estado.

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

La violencia de Estado contra el pueblo ha sido recurrente, es y sigue siendo una constante; se expresa en el sistema político donde los gobiernos que emanaron del PRI, del PAN y de nuevo del PRI que se presentó como “nuevo”, todos sin salvedad desarrollaron la concepción contrainsurgente para ponderar seguridad para garantizar supuestamente desarrollo económico.

La política del gobierno se finca en la represión, ésta en la concepción de la GBI; el componente activo para garantizarlas es la posición cínica y desvergonzada que reconoce formalmente los derechos humanos y a la vez el estado de derecho los pulveriza, permite su violación sistemática y garantiza impunidad a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad.

Así la demagogia es parte de la política de gobierno, permite que todo el andamiaje represivo esté activo sin el temor a ser enjuiciados y castigados por la violencia que se ejerce contra el pueblo porque hay un estado de derecho que no garantiza justicia. En ese contexto, desde el Estado las víctimas están perenemente condenados a la incriminación, criminalización, judicialización y revictimización.

Una política criminal kafkiana donde la víctima emerge como el victimario, éste investido con el manto de la impunidad es presentado públicamente como la víctima que tuvo que defenderse de la “agresión” popular. De ahí la pretensión de la actual administración de poner a víctimas y victimarios juntos, en igualdad de condiciones históricas, lo cual constituye revictimización de las víctimas.

Los crímenes de lesa humanidad como la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada de personas son una realidad que lacera al pueblo porque hay jueces y ministros que son reaccionarios, que odian al pueblo organizado, que ponderan los intereses mezquinos de una minoría oligárquica, porque en su concepción profascista desprecian los derechos humanos, odian a quienes luchan de manera organizada por la transformación del país en beneficio de los millones de mexicanos explotados y oprimidos.

La historia reciente del país es muy ilustrativa, en el año 2000 el PAN arribó a la presidencia nacional, es un punto de inflexión en la política de gobierno que, en nombre de la democracia, el desarrollo y la seguridad asumió una política de gobierno que generó de manera desenfadada violencia de clase contra los desposeídos; las graves violaciones a los derechos humanos fueron una constante, crecieron de manera desmedida, alcanzaron cifras que no tienen paragón con la

historia en el país y en América Latina.

La violencia de Estado ha estado presente en toda la historia del régimen, desde los años 30 del siglo pasado hasta el presente, el Estado mexicano ha sido responsable de la represión contra los oprimidos, éstos han enfrentado la violencia organizada de clase a través del Estado ciclo tras ciclo, en la actualidad se expresa en los cientos de miles de víctimas de la violencia gubernamental que se plasma en los crímenes de lesa humanidad.

La CVO en su investigación constató dicha violencia contra el pueblo organizado y no organizado. El gobierno de Ulises Ruiz organizó, sistematizó y generalizó la represión, ésta se transfiguró en terrorismo de Estado; a través de los testimonios de las víctimas corroboró que las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, los tratos crueles e inhumanos y la prisión injusta en Oaxaca fue producto de la política represiva del gobierno que emanó del PRI, es la expresión concreta del dominio del PRI-gobierno por más de 70 años en el estado.

Los testimonios de las víctimas confirman cómo operaron los cuerpos policiacos para reprimir al pueblo, éstos vestían de civil, se ocultaban el rostro con pasamontañas tácticos y se desplazaban en vehículos particulares o de las corporaciones policiacas para cometer los crímenes de lesa humanidad.

Así fue como cometieron las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias y el asedio permanente contra el movimiento popular magisterial. Así se ejerció la represión, la violencia de clase, y en específico, el terrorismo de Estado.

En esa condición la policía, sin importar la corporación, sobre todo, la que estaba agrupada en la Fuerza Policial de Alto Rendimiento (FPAR), operaba de manera criminal; realizaban sus operativos policiacos sin uniforme y vehículos oficiales para ocultar sus crímenes; se ocultaban el rostro para pasar de incógnitos y diseminar el terror.

Dicho proceder es el que se señala en los manuales de la Guerra de Baja Intensidad (GBI), porque la FPAR estaba organizada, estructurada y actuaba bajo los cánones de dicha doctrina contrainsurgente; fue estructurada, organizada y dirigida por mandos militares y de la marina.

Creada en 1997 con un solo propósito contrainsurgente, capturar militantes de nuestro partido y ejército con el firme propósito de destruirnos militarmente.

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

Con ese propósito desataron la violencia de Estado en la región de los Loxichas; la FPAR es responsable material de los cientos de crímenes de lesa humanidad que se cometieron en dicha región.

Un año de asedio policiaco militar en dicha región que se tradujo en detenciones arbitrarias, encarcelamientos injustos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, en violaciones sexuales de mujeres, todas en manos de la FPAR que actuaba en coordinación con el Ejército mexicano.

El organismo contrainsurgente fue concebido para desatar el terrorismo de Estado, bajo el amparo de ésta, sea como elemento activo y posteriormente como comandante de él, Pedro Hernández Hernández destaca como criminal de Estado, fue el encargado de ejercer la violencia contra el pueblo, él es uno de los responsables materiales del cometido de crímenes de lesa humanidad, se tomó en serio de ser un “policía cabrón”, claro con el pueblo indefenso, así es fácil emerger como grande en el campo de la contrainsurgencia, por ejemplo, ejecutar de manera extrajudicial a militantes de organizaciones populares como el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT) y la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ).

Es necesario señalar que los convoys contrainsurgentes de policías de la FPAR y militares, la acción criminal desde las Bases de Operaciones Mixtas (BOM) nunca se enfrentaron con unidades guerrilleras de nuestro ejército, a quienes “combatieron” fue al pueblo desarmado e indefenso, a ciudadanos que participaban y se movilizaban en un organismo legal que exigía demandas para mejorar la existencia de los habitantes de los Loxichas.

Un dato que confirma su naturaleza contrainsurgente de la FPAR, es el hecho de que Manuel Moreno Rivas, el que fuera director de la policía ministerial de Oaxaca, tiene una formación de Kaibil, graduado en la escuela de guerra irregular y contrainsurgencia en Guatemala. Es el vínculo directo del carácter contrainsurgente de la FPAR y las *caravanas de la muerte*.

Investigaciones periodísticas, las actuaciones de investigación de la propia autoridad, testimonios de las víctimas de la violencia, sobrevivientes de la represión, la denuncia de las víctimas del secuestro por parte de la policía, denuncias de organismos defensores de derechos humanos y confesiones de policías involucrados confirman y acusan que la policía Ministerial de Oaxaca era la que generó la violencia desenfrenada contra el pueblo que protestaba; que la FPAR

eran los que secuestraban ciudadanos con fines de rescate económico, un medio ilícito de enriquecimiento para policías y funcionarios en turno; que dicho grupo era el que cometía las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de opositores del gobierno priista, de integrantes del movimiento magisterial popular e incluso de sus propios compinches.

La CVO documentó que funcionarios del gobierno de Ulises Ruiz y mandos de diferente nivel de las corporaciones policíacas locales son los responsables materiales e intelectuales de la ola de violencia que azotó a las masas que protestaban.

Con el actuar de la Policía Ministerial de Oaxaca se confirma que la delincuencia organizada *tiene origen en las estructuras de gobierno; que la delincuencia organizada es un fenómeno para y desde el Estado*, es decir, tiene origen y se debe a las estructuras de gobierno.

En Oaxaca, integrantes de la Policía Ministerial eran la principal expresión de la delincuencia organizada, ésta estructurada y dirigida por funcionarios del gobierno estatal y puesta en operatividad por los principales mandos de la Policía Ministerial y del grupo contrainsurgente denominado FPAR. Es inocultable el vínculo de la Policía Ministerial de Oaxaca (PMO) con la actividad de tráfico de estupefacientes, emergió como grupo generador de descomposición social y la violencia de Estado bajo la mítica letra del abecedario, los “Z”.

Es inocultable que la policía es quien detiene y desaparece a integrantes de la APPO; es quien da vida y recrea a los grupos criminales con dichas denominaciones que revelan la mano gubernamental; es la que difumina la violencia en torno al negocio de las drogas.

El proceder de los cuerpos policíacos para contener la protesta magisterial popular en Oaxaca, revela su condición criminal y represora: acoso y hostigamiento policíaco permanente contra el pueblo organizado y en protesta, es el proceder típico para generar terror en las víctimas y su entorno.

En esa ola de violencia desenfrenada contra el pueblo, lo que era la PGR engendra con su proceder impunidad, desencadena la violencia contra las masas inconformes, es la responsable de la creación de los falsos culpables, de los falsos guerrilleros, de los falsos comandantes del EPR.

En ese contexto de violencia de Estado, las víctimas se transforman en victimarios, y los victimarios en víctimas que deben ser protegidos por el Estado,

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

emerge la impunidad como parte de la política de gobierno. Así es como evoluciona la carrera de Pedro Hernández Hernández, de agente policiaco “eficaz” para combatir el crimen a elemento activo de la contrainsurgencia hasta ser comandante de la FPAR; hoy prófugo de la justicia y protegido por su exjefe Evencio Nicolás, también prófugo, ambos, responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Oaxaca cuando ocuparon puestos claves en el aparato represivo.

Toda la política del gobierno federal y el de Oaxaca gira en torno a la criminalización de la protesta y la judicialización de la inconformidad popular, expresada en la lucha política de masas que plantea como exigencia principal: la renuncia del gobernador Ulises Ruiz por represor.

En ese contexto la ex procuradora Lizbeth Caña, es el rostro y la figura institucional de la impunidad, en ella encarna la tiranía del PRI-GOBIERNO, cuando cínica y mentirosamente dice combatir guerrilleros urbanos.

El gobierno de Ulises Ruiz contribuyó activamente en el incremento de la cifra de las víctimas del terror del Estado en el país, que al fin del gobierno de Calderón se dispararon a más de 150 mil, aunque desde el gobierno conservadoramente se reconocieron no más de dos decenas de miles, aun así, la estadística oficial revela el genocidio cometido contra nuestro pueblo.

La esencia de la represión en Oaxaca como en el país consistió en preservar el régimen oprobioso, el poder de una minoría que se abroga el derecho de explotar y que para ello oprime al pueblo, para lo cual se cometieron crímenes de lesa humanidad, es decir, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, violaciones graves a los derechos humanos.

En la estrategia represiva contempló la creación y participación de *grupos armados ilegales*, su creación fue bajo el auspicio de la seguridad pública estatal, el Ejército y la Marina. En realidad, es un eufemismo utilizado en los medios de comunicación o en investigaciones académicas que diluye la responsabilidad del Estado en ejercer la violencia de clase contra las masas inconformes, los grupos armados ilegales o los grupos de civiles armados son en concreto *grupos paramilitares* que realizan el trabajo sucio del Ejército y la Marina.

En su conformación, estructura, financiamiento, mando, entrenamiento y operatividad se encuentran elementos policiacos militares, funcionarios públicos y/o exmilitares o expolicías con entrenamiento contrainsurgente, en el caso de

Oaxaca, incluso exkaibiles.

Los grupos paramilitares, independientemente de su denominación nominal, fueron responsables materiales de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y de graves violaciones de derechos humanos, las víctimas fueron pueblo organizado, inconforme y desarmado. Tales grupos criminales fueron los encargados de sembrar el terror de Estado en las calles de la Cd. de Oaxaca y en algunas regiones del Estado.

Entre los responsables de la conformación y operatividad de los grupos paramilitares están: el primer secretario de gobierno de Ulises Ruiz, Jorge Franco Vegas, su sucesor, Heliodoro Díaz, y el coordinador de Seguridad Pública del Municipio de Oaxaca, Aristeo López Martínez y Manuel Moreno Rivas.

Los sujetos de “civil” que disparaban a los manifestantes no eran ciudadanos “inconformes” contra los manifestantes o trabajadores de la educación en paro, eran elementos policiacos o parapoliciacos que actuaban bajo la orden o aquiescencia de las autoridades estatales y éstas actuaban con la venia del gobierno federal.

La acción de los grupos paramilitares era en coordinación operativa con las diferentes corporaciones policiacas de seguridad pública del estado, es la clásica operación de contrainsurgencia que cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones ilegales y arbitrarias, tratos crueles e inhumanos y tortura.

Desde el gobierno, los organismos empresariales y los medios masivos de comunicación se criminalizó el ser profesor y el ser luchador social; con esa cobertura mediática los grupos paramilitares se dedicaron a la caza de trabajadores de la educación o a cualquier ciudadano inconforme, quienes caían en sus manos eran detenidos arbitrariamente, conducidos a cárceles clandestinas donde fueron sometidos a tratos crueles e inhumanos y tortura; unos fueron encarcelados injustamente en malas condiciones físicas en cárceles estatales o federales, otros fueron desaparecidos de manera forzada, unos más fueron ejecutados de manera extrajudicial.

La política del gobierno estatal de criminalizar la protesta popular fue su signo, en ese marco se desencadenó la violencia contra todo ciudadano que protestara, contra todos aquellos que fueran parte de una organización popular, que fuera parte de la APPO, que simpatizara con el movimiento popular que exigía la renuncia del

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

tirano que estaba en la casa de gobierno.

Ese proceder de los mal llamados grupos civiles armados los delataba como parte del aparato represivo, como policías disfrazados de civiles para diluir la responsabilidad de los cuerpos policíacos.

Por su proceder, por su lenguaje, por las técnicas en la tortura, por las preguntas específicas en el interrogatorio, por los vehículos y forma en que se trasladan, todo indica que dichos “civiles armados” fueron entrenados como policías, actúan como tales, al encuentro de uniformados formales se comportan con naturaleza, es decir, se conocen, son parte del aparato represivo.

Agosto de 2006 fue el mes donde la operatividad de los grupos paramilitares en coordinación con las diferentes corporaciones destacó, su desplazamiento coordinado en columna y en posición ofensiva se dedicó a la caza de inconformes, de profesores, de pueblo organizado, todo ciudadano que transitara por la vía pública era considerada como “sospechoso”. El pueblo los denominó *caravanas de la muerte* porque a eso se dedicaban, andaban de cacería, asesinaban al pueblo desarmado, cometieron crímenes de lesa humanidad que aún permanecen en plena impunidad.

El proceder operativo de las *caravanas de la muerte* es netamente contrainsurgente, es el típico proceder de los grupos especiales desde la contrainsurgencia para ejercer la violencia de Estado, en Centro y Sudamérica se les conoció como escuadrones de la muerte, en esa referencia histórica su composición y operatividad es la misma.

Las *caravanas de la muerte* es un indicativo de la agudización de la represión, el escalamiento de ésta según los manuales de la contrainsurgencia, la prueba de la conexión entre este instrumento para esparcir el terror de Estado está en su composición y disposición ofensiva, 10, 15, 20 hasta 30 vehículos se desplazan en columna, entre ellos hay vehículos particulares y oficiales de la policía municipal, la ministerial, la policía auxiliar; entre los “civiles armados” hay funcionarios públicos, reconocidos porros de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), golpeadores charros de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), así como charros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), policías uniformados y sin uniforme, jefes policíacos de civil que dan órdenes y dirigen el operativo; y, a las víctimas que capturan las

entregan a los policías, éstos continúan con la tortura hasta definir la suerte que correrán.

La procuradora de Justicia de Oaxaca en el gobierno de Ulises reconoció cínicamente que diferentes corporaciones policíacas realizaban operativos limpieza de vialidades, es la aceptación pública de que las *caravanas de la muerte* estaban bajo el mando directo de Manuel Moreno Rivas, quien fuera director de la policía ministerial de Oaxaca, en coordinación con Aristeo López Martínez, entonces coordinador de Seguridad Pública, Vialidad y Tránsito Municipal. En consecuencia, la susodicha también es responsable del cometido de crímenes de lesa humanidad.

En conclusión, 1) los grupos paramilitares funcionaron bajo la creación y protección del gobierno de Ulises Ruiz; los funcionarios de éste y de gobiernos municipales, emergen como responsables de la violencia que desataron contra el pueblo, a parte de los ya citados, destaca Lino Celaya Luria; 2) la política del gobierno de Ulises Ruiz coincide plenamente con la del gobierno federal encabezado primero por Vicente Fox y luego por Felipe Calderon, se finca en el terror de Estado; 3) la “sociedad oaxaqueña” que exigió la represión contra el movimiento magisterial popular en los medios de comunicación, en realidad fue la exigencia de reprimir por parte de la burguesía, de los políticos de oficio en torno al PRI-PAN, funcionarios profascistas y el aparato policíaco militar que desencadenó la represión.

LA DF DE GABRIEL ALBERTO CRUZ SÁNCHEZ Y EDMUNDO REYES AMAYA, CRIMEN DE LESA HUMANIDAD Y CONTRAINSURGENCIA

Como hemos señalado, la detención desaparición de nuestros compañeros se da en un contexto de violencia generalizada y sistemática en el país, es decir, de terrorismo de Estado, esa es la política de gobierno de Felipe Calderón Hinojosa que se tradujo en incontables crímenes de lesa humanidad.

La declaración de la “guerra contra el narcotráfico” en realidad fue la guerra contra el pueblo; la represión se fundó teóricamente en la doctrina de contrainsurgencia promovida por el imperialismo norteamericano, aceptada con fervor por el gobierno mexicano.

Bajo dicha cortina de humo se creó y recreó con ayuda de los monopolios de la comunicación al enemigo interno, éste en apariencia era el narcotráfico,

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

en realidad toda la violencia que se desencadenó fue contra todo el pueblo, en específico con el organizado.

De esta manera el luchador social, el activista político, el defensor de los derechos humanos, el luchador por el socialismo, científicos progresistas, los comunistas, los revolucionarios pasaron a ser criminales, es decir, constituyeron de manera concreta el enemigo interno y por tanto constituían dianas para el tiro al blanco para todo el aparato represivo.

La detención desaparición de nuestros compañeros es ilustrativa respecto a la política criminal del gobierno de Oaxaca, fincada también en el terrorismo de Estado y en la concepción de la GBI para contener el descontento popular y aniquilar por la violencia la voluntad popular de combatir.

Por las denuncias hechas por familiares y organizaciones populares se deduce que fueron decenas de desapariciones forzadas cometidas en el gobierno que “no toleraría marchas” porque afeaban a la ciudad, con ello se expresa la concepción reaccionaria donde se sustentó la política de gobierno a exigencia de la burguesía local y políticos de oficio de concepción profascista.

Cometido el crimen de lesa humanidad contra nuestros camaradas, desde el aparato represivo y el gobierno estatal procedieron a negar el hecho, a deslindarse cínicamente, a borrar huellas..., en ese proceder se cometieron ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada de elementos policíacos, como la del comandante Jonás Corro, es obvio que se estaban eliminando los cabos sueltos para que el crimen fuera casi perfecto.

La detención desaparición de nuestros militantes Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya se da en el marco de la ofensiva contrainsurgente que el gobierno de Ulises Ruiz implementa desde el inicio de su mandato, su política de seguridad le dio continuidad a la política que estableció Diódoro Carrasco, es la esencia de los gobiernos priistas: reprimir y cometer crímenes de lesa humanidad.

Nuestros camaradas llevaban su agenda de trabajo según las tareas en conjunto y por separado; su estancia en Oaxaca se debía a la necesidad de concretar tareas en torno al descontento magisterial popular, la estructura clandestina y la organización de los militantes.

A pesar de los años transcurridos y de la intención de los perpetradores de su detención desaparición, los hechos son claros y la información emitida por nuestro

partido en torno a ella es puntual, se confirma que es una desaparición forzada por motivos políticos cometida por el aparato represivo.

En resumen, el contexto nacional y estatal sobre el cual se da la detención desaparición forzada de nuestros militantes era:

- Un clima generalizado de violencia que emana de las instituciones gubernamentales, hombres del régimen y todo el aparato represivo; violencia de clase que azota al pueblo organizado y que protesta contra el gobierno autoritario.
- La guerra declarada contra el narcotráfico se trocó en una cortina de humo que ocultó una oleada interminable de violencia traducida en desapariciones forzadas de personas, ejecuciones extrajudiciales, encarcelamiento injusto y desplazamiento forzado.
- En Oaxaca a través del movimiento magisterial popular se exigía la renuncia del gobernador Ulises Ruiz, de extracción priista, por su condición represora. A nivel nacional gobierna el PAN, Felipe Calderón Hinojosa es el presidente de la república y “gobierna con mano dura” que se traduce en violencia gubernamental generalizada.
- Nuestro partido ya había denunciado públicamente desde el sexenio de Vicente Fox la existencia de la desaparición forzada de personas, que esta práctica era retomada como política de gobierno; meses previos a la desaparición de nuestros camaradas pusimos en evidencia la existencia de dicha práctica de terrorismo de Estado.

Por el proceder de las instituciones y hombres del régimen, se confirma y no se puede negar que a nuestros militantes los desaparecen de manera forzada por militar en el PDPR-EPR.

A Edmundo y Gabriel los mantienen en condición de desaparición forzada porque: a) son comunistas; b) emergen en su trayectoria revolucionaria como constructores de conciencia proletaria; c) son organizadores y constructores de organismos de combate popular; d) organizadores y constructores de las formas estratégicas y tácticas de organización clandestina.

El crimen de lesa humanidad cometido en la persona de nuestros camaradas adquiere dimensión política porque ambos son revolucionarios que dedican su

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

vida a la construcción, desarrollo, fortalecimiento y consolidación del partido revolucionario, el PDPR-EPR; por ser impulsores de la unidad revolucionaria desde muy temprana edad de la unidad entre los grupos y organizaciones revolucionarias en los años 60-80.

Su desaparición forzada es por motivos políticos al revelarse como constructores, organizadores y semilleros de revolucionarios; su labor siempre consistió en organizar, estructurar y dirigir la voluntad popular de combatir en torno a la lucha por el socialismo, al ser éste faro de la humanidad y proyecto emancipador de ésta.

La detención desaparición de nuestros militantes como se ha señalado en reiteradas ocasiones, se dio en un contexto de violencia y represión generalizada en el gobierno federal y estatal, dicho contexto queda expresado en los diferentes actos de violencia ejecutados desde el gobierno de Ulises Ruiz, sin embargo, esto no podía actuar por la libre, su proceder obedece al respaldo del gobierno federal, encabezado por Calderón, ambos gobiernos son parte del andamiaje del Estado burgués mexicano, no hay supuesta autonomía que valga para eludir la responsabilidad.

En su detención desaparición tienen responsabilidad el ex procurador Evencio Nicolás Martínez Ramírez; Miguel Ángel Quezada Colombo, coordinador regional de la PFP en Oaxaca; Francisco Garduño Juárez, coordinador de la AFI; Pedro Hernández Hernández, comandante de la FPAR, Daniel Camarena, agente de la contrainsurgencia, todos actuaron bajo el gobierno y política represiva del gobernador Ulises Ruiz.

La posición del gobierno federal y estatal en torno a detención desaparición de nuestros militantes fue clara, cínicamente negaron su cometido, tendieron el manto de la impunidad y criminalizaron a quienes denunciaban la existencia de la desaparición forzada como práctica contrainsurgente y terrorismo de Estado. Proceder que revela acción y maniobra contrainsurgente.

Dicho proceder delata autoría del crimen, *llama la atención una respuesta de esta naturaleza por el gobierno estatal, tal prontitud sólo indica autoría del crimen de lesa humanidad.* Lo mismo sucede con el gobierno federal, en boca de Francisco Ramírez Acuña, procurador general de la república al negar enfáticamente tener detenidos a los camaradas.

Desde un principio, no se investiga la desaparición forzada de Gabriel y Edmundo, las actuaciones de la autoridad judicial son para dar con el paradero de quienes exigen la presentación de los desaparecidos, tener indicios que puedan incriminar a ciudadanos con el PDPR-EPR y poder incriminarlos, criminalizarlos y judicializarlos.

A la vez, tratar por todos los medios de diluir la esencia política del problema, es decir, no reconocer como revolucionarios a nuestros camaradas, por el contrario, buscar por todos los medios la forma de vincularlos a grupos delictivos de fama mediática en el momento, es el indicativo de que su detención desaparición es producto de la acción contrainsurgente.

Vincular a los revolucionarios al mundo de la delincuencia organizada, al del negocio de las drogas, al del secuestro es perverso, tiene un propósito bien definido, negar la existencia del fenómeno de la desaparición forzada de personas, sobre todo, negar la participación en éstas del Ejército mexicano y al mismo tiempo, deslegitimar a los revolucionarios, quitar todo contenido político e ideológico de la praxis de los militantes del PDPR-EPR.

Siempre se ha tratado de reducir el acto como un problema estatal, donde la policía ministerial era un ente generador de violencia y descomposición, en cuyo marco detienen y desaparecen a nuestros militantes.

A los responsables materiales desde el gobierno estatal se les defiende como lo que son, agentes del Estado que cometen crímenes de lesa humanidad, a los cuales hay que defender porque en esencia son los perros de caza del Estado mexicano, por ejemplo, Pedro Hernández tuvo todas las garantías de ley para su defensa; por el contrario, a nuestros compañeros les fueron violados sus derechos como ciudadanos, no tuvieron la oportunidad de un juicio porque fueron sustraídos de la sociedad, de su tiempo, de la realidad nacional al ser detenidos desaparecidos por agentes del Estado.

El vínculo y responsabilidad en el cometido de la desaparición forzada de nuestros militantes entre el gobierno estatal y federal se da y se confirma con el asesinato de José Nemesio Lugo Félix, asesinado el 14 de mayo de 2007 en el DF, era subdirector del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia, Calderón ordenó una investigación especial.

El Ejército mexicano por orden presidencial se abocó a buscar sus asesinos

VI. La desaparición forzada en México y la contrainsurgencia

en el EPR. Es la confirmación del contenido contrainsurgente y como siempre la maniobra mediática para justificar el crimen de Estado.

Una vez más decimos enfáticamente que nuestro partido no tuvo nada que ver en dichos acontecimientos; en nuestras filas hay combatientes por el ideal comunista, no asesinos, éstos están albergados en el aparato represivo.

Por la trascendencia política y jurídica es necesario señalar que dicho agente del Estado trabajó en el CISEN durante 17 años, en el 2006 coordinó la entrada de las fuerzas federales en Oaxaca contra la APPO. Su ejecución operativamente se parece mucho a cómo se concretan las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las corporaciones policíacas: un vehículo tapó su paso y una motocicleta con dos individuos le disparan con una pistola 9 milímetros.

La Procuraduría General de la República (PGR) en lugar de investigar en torno a la detención desaparición de nuestros compañeros, se avocó a buscar a militantes del PDPR-EPR para castigarlos por exigir la presentación con vida de los militantes; se incriminó y criminalizó a los familiares de las víctimas en lugar de otorgar garantías para hacer efectivos sus derechos.

De primera intención, pretendió vincular a nuestro partido con la delincuencia organizada, de manera mal intencionada se buscaba denigrar y desvirtuar la condición revolucionaria de nuestros compañeros y partido. En el fondo se trataba de “argumentar” y “comprobar” la tesis de la narcoguerrilla sostenida por el gobierno de Calderón y los cuerpos policíaco militares.

El mecanismo de la “denuncia anónima” fue socorrido, por medio de él se incriminó a los familiares, por supuesta denuncia anónima se armó una carpeta de investigación, cuyo propósito era encontrar elementos de vínculo con nuestro partido. Es la revictimización.

Del intento por vincular a los revolucionarios con la delincuencia sólo resultó un fracaso, lo que sí confirmó que la delincuencia tiene origen en las estructuras de gobierno, sirven a éste para justificar la violencia y la represión contra los desposeídos; se confirma, los grupos delincuenciales están constituidos por elementos policíacos, por funcionarios. Son parte del poder económico, se incorporan a él con capital producto del despojo.

EXIGENCIA: PRESENTACIÓN CON VIDA, CONOCER LA VERDAD, CONDICIÓN Y PARADERO ACTUAL DE EDMUNDO Y GABRIEL

La exigencia de nuestro partido, el PDPR-EPR, es la misma desde el momento que se dio a conocer la detención desaparición de nuestros militantes, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, ¡PRESENTACIÓN CON VIDA! Exigencia que hacemos extensiva: ¡PRESENTACIÓN CON VIDA DE TODOS LOS DETENIDOS DESAPARECIDOS DEL PAÍS!

El fenómeno de la desaparición forzada de personas tiene en México un carácter incommensurable, se puso de manifiesto con la detención desaparición de nuestros militantes y a partir de ahí es agenda nacional, por consiguiente, nuestra demanda es muy puntual: se necesita conocer la verdad de cómo sucedió el crimen de lesa humanidad, quiénes fueron los autores materiales, sobre todo, conocer con certeza condiciones y paradero de ellos.

A la distancia de 16 años del cometido del crimen de lesa humanidad, la lucha por su presentación aún no termina porque junto a quienes viven el dolor de perder a un ser querido, se ha roto el silencio a fuerza de crítica política de las masas; el dolor de los familiares, amigos y compañeros se transformó en voluntad de combatir de la cual emergieron formas y expresiones concretas de organización y combate popular.

Como militantes y combatientes del PDPR-EPR, de frente al pueblo y con sinceridad expresamos que no desistiremos de luchar al lado de nuestro pueblo, éste nos protege, somos parte de él, por consiguiente, el combatiente por el ideal comunista lucha con y para la defensa de los intereses populares.

Hicimos un compromiso con la Comisión de Mediación, a nuestro juicio lo hemos cumplido a cabalidad, sin embargo, el gobierno aún no, se refleja en la existencia de la desaparición forzada de personas por todo el país, dicho crimen se expresa como práctica de terrorismo.

Si el crimen de lesa humanidad, la desaparición forzada, aún existe en el país como parte de la violencia que emana del régimen, es la confirmación de que mientras no se desmantele la estructura policiaco militar que las comete será un flagelo en la vida política, será violencia de clase que afecta fundamentalmente a los desposeídos.

VII. LA GUERRA DE BAJA INTENSIDAD (GBI)*

***Publicado en *El insurgente* (Año 28 / No. 231 / Enero de 2024)**

Contexto de origen y marco general

El imperialismo es el enemigo principal de la humanidad. Las atrocidades cometidas sobre los pueblos del mundo por la violencia de las grandes potencias capitalistas en beneficio de intereses monopolistas y grupos oligarcas demuestran con creces la hostilidad imperialista hacia la humanidad, con ello, la vigencia de la teoría de la revolución socialista en la época del imperialismo.

En su larga crisis de agonía el imperialismo se ha virado más y más violento contra las masas populares y los pueblos del mundo, al grado que en la actualidad su política raya en el neofascismo y neocolonialismo.

La postura imperialista contra las luchas de emancipación popular enarboladas por los pueblos del mundo es en extremo reaccionaria. A través de los años y a medida que enfrenta en una u otra latitud del orbe a la violencia revolucionaria de las masas, el imperialismo se esfuerza por perfeccionar su doctrina, métodos, medios e instrumentos para sofocar la voluntad popular de combatir de los pueblos por su emancipación.

El imperialismo en su larga crisis y a modo de expresión de la lucha de clases se ha enfrentado de forma reiterada a dos fuerzas contrarias a sus intereses. La primera como expresión del ulterior desarrollo capitalista, las guerras de liberación nacional o aquellas encabezadas por los pueblos que no quieren estar bajo la férula imperialista; y, la segunda, de carácter antitética, las revoluciones comunistas.

En respuesta a esta lucha antagónica, antitética, progresista y emancipadora el imperialismo ha cosificado lo más reaccionario de sus teorías y experiencia opresora en una doctrina denominada Guerra de Baja Intensidad (GBI). El propósito que persigue el imperialismo con ese arsenal criminal es mantener su dominio sobre los pueblos del mundo, exterminar a los comunistas para sostener con métodos terroristas la dictadura del capital sobre la humanidad.

Como se observa, se confirma el planteamiento de Engels respecto al fenómeno de la violencia que dice *en vez de dominar la situación económica, el poder y la violencia quedaron, pues, constreñidos al servicio de la situación económica*. En ese sentido la GBI es poder y violencia imperialista en defensa de los intereses de los monopolios y oligarcas, la exportación de la contrarrevolución a los pueblos del mundo, máxime, en un contexto de crisis del régimen burgués.

Esta forma de ejecutar la violencia burguesa contra los pueblos del mundo y las fuerzas populares que luchan por su emancipación surge en un contexto de crisis general del capitalismo, escenario internacional marcado por el cuestionamiento de los pueblos del mundo al dominio imperialista y por la reducción de la férula imperialista contrarrestada por las fuerzas comunistas.

Por los intereses de clase que defiende la GBI es la doctrina imperialista para hacer la guerra a los comunistas, en consecuencia, es netamente contrarrevolucionaria y contrainsurgente, se trata de una readecuación de la política injerencista y anticomunista inmanentes al imperialismo.

Esa concepción retrógrada sobre la guerra contra el pueblo tiene sus antecedentes en la experiencia de la Alemania nazi, francesa, inglesa y estadounidense en la guerra contrarrevolucionaria o terrorismo burgués. En esa medida la GBI es la sistematización y especialización de las prácticas y métodos más aviesos del terrorismo burgués para contener y destruir a la voluntad popular de combatir.

En la GBI el imperialismo toma su experiencia criminal contrarrevolucionaria desarrollada contra las guerras de liberación nacional y revoluciones populares en Asia, África y América Latina. El objetivo, tener una doctrina y a su vez política exterior más integral que permita el resguardo de los intereses imperialistas y derrotar al comunismo.

Fue hasta el último cuarto del siglo XX cuando el imperialismo logró sistematizar y en adelante especializar la GBI como doctrina de la guerra imperialista contra los pueblos del mundo, específicamente, contra los comunistas y revolucionarios en Centro y Sudamérica. Es a partir de la administración de Ronald Reagan que adquiere signo de política del imperialismo yanqui contra los pueblos de América, en particular, ahí donde emergen y se desarrollan revoluciones populares, por eso también, se le conoce como política Reagan.

A partir de entonces, los pueblos de América se encuentran subsumidos en una despiadada violencia sistemática proveniente del imperialismo y ejecutada por los Estados burgueses de cada nación alineada al imperialismo norteamericano. En ese contexto, México es uno de los pueblos donde el sello de la GBI adquiere sistematicidad y viveza, gobierno tras gobierno desarrollan la doctrina imperialista como canon de su política, a la fecha, no existe junta administrativa que no desarrolle el terrorismo burgués en su forma contrainsurgente contra el pueblo.

En relación a su definición

Construyendo a la GBI a una definición técnica, sujeta a la amplitud de un conflicto bélico, se puede afirmar que es una guerra no convencional, la cual se desarrolla en determinada área geográfica del mundo o Estado nación, donde se utilizan técnicas de la guerra irregular y medios no convencionales.

Por sus ejes y componentes constituye política injerencista del imperialismo en los países sojuzgados catalogados como del Tercer Mundo; estrategia para derrocar gobiernos revolucionarios o destruir revoluciones triunfantes; y, política de seguridad nacional del imperialismo norteamericano.

En América es la violencia del imperialismo norteamericano para garantizar su dominio en el continente. Estados Unidos considera al continente americano a partir de México como su traspatio, en esa medida, la contrainsurgencia y terrorismo de Estado constituyen instrumentos para salvaguardar su dictadura so pretexto de la seguridad nacional.

En términos del carácter de clase y las motivaciones de su implementación, la GBI es una forma específica de la violencia imperialista contra los insurgentes y revolucionarios, es decir, contra los oprimidos. En síntesis, es contrarrevolución comandada por el imperialismo.

Por tanto, es una doctrina anticomunista; estrategia que el imperialismo antepone a la revolución socialista; guerra imperialista contra los pueblos del mundo que luchan por su emancipación; y, el terror burgués disfrazado de combate al terrorismo.

La literatura sobre el tema la cataloga como doctrina, estrategia y política; conflicto de baja intensidad, guerra moderna, guerra irregular e incluso guerra integral o total; en la descripción de su andamiaje coinciden palabras más o menos en sus componentes multidisciplinarios en actuación conjunta, estos son de carácter económico, político, cultural, psicológico y militar.

Por ejemplo:

- Trinquier en su obra *La Guerra Moderna* apela a que “la guerra de hoy es el choque de una serie de sistemas –político, económico, psicológico y militar- que tiende a derrocar el gobierno en un país para sustituirlo por

otro.” Y esgrime que de la misma forma los patriotas deben responder a quienes hacen ese tipo de guerra, según él los terroristas.

- Waghelstein dice que este tipo de conflicto involucra “una guerra política, económica y psicológica, con los militares ubicados en un distante cuarto lugar en muchos casos”.
- La política de Ronald Reagan se centró en la combinación de dichos factores para proporcionar y apoyar la oposición política y militar contra los gobiernos revolucionarios del Tercer Mundo (de manera abierta y encubierta); intervenir en situaciones potencialmente revolucionarias, para conducir de manera controlada los cambios que se generen, de forma que se salvable la esencia del régimen en el poder; emprender una campaña anti-terrorista; y reservar, para revoluciones eminentes o consumadas, pero altamente vulnerables, el poder de la intervención directa y masiva de las fuerzas estadounidenses.
- Otros definen a la GBI como la combinación de medidas políticas, económicas, psicológicas y militares.
- Lilia Bermúdez en su obra titulada *GUERRA DE BAJA INTENSIDAD/ Reagan contra Centroamérica* define a la GBI como guerra contrarrevolucionaria prolongada que se maneja sobre tres ejes sustanciales: la contrainsurgencia en aquellos países en donde exista una amenaza evidente al orden establecido, o una amenaza potencial aunque sea incipiente o hipotéticamente potencial; la reversión de procesos populares y revolucionarios triunfantes (Nicaragua, Angola, Mozambique, Afganistán); y el anti o contraterrorismo, no porque el terrorismo sea revolucionario sino porque a los movimientos populares o a los gobiernos “enemigos” se les ubica como patrocinadores del mismo de una manera maniquea (su definición descansa en la concepción de George Schultz).

También dice que frente a las insurgencias populares y los gobiernos “enemigos” se plantea una guerra de desgaste prolongada que incorpore elementos económicos, políticos, sociales, psicológicos y, por supuesto militares.

Los ejemplos referidos confirman que la GBI es doctrina imperialista anticomunista donde se cosifica lo más reaccionario, extremista, criminal y el

odio burgués en métodos y prácticas terroristas o fascistas contra los explotados y oprimidos que luchan por liberarse del yugo capitalista.

Podemos afirmar que la GBI respecto a su carácter de clase es anticomunista, reaccionaria y fascista; como estrategia imperialista para dominar a los pueblos del mundo tiende a ser multifacética, por ello, tiene como ejes la contrainsurgencia, la contrarrevolución en revoluciones triunfantes y el antiterrorismo, en todo momento el opresor combina medidas políticas, económicas, tecnológicas, culturales, psicológicas y militares; y, ateniéndonos al tipo de violencia, la GBI es terrorismo burgués en época del imperialismo marcado por su larga agonía.

Respecto a su papel contrainsurgente y contrarrevolucionario

La contrainsurgencia y la contrarrevolución son la esencia de la GBI. Su objeto es la población, puesto que, tiene como propósito fundamental aislar a los revolucionarios de las masas populares con el fin de destruir con la fuerza militar a las fuerzas revolucionarias.

El objetivo principal es en esencia político, consiste en deslegitimar, socavar y aislar a los revolucionarios hasta que dejen de ser alternativa de cambio y transformación, en otras palabras, ganar las “mentes y corazones” del pueblo. De forma yuxtapuesta o consecutiva se desarrollan campañas de búsqueda y aniquilación contrarrevolucionarias con la intención de eliminar las fuerzas vivas de la revolución.

Para ganar “mentes y corazones” la contrainsurgencia se vale de medidas económicas, políticas, culturales y psicológicas. Destacan principalmente las de carácter económico y políticas materializadas en programas de control social, ayuda humanitaria y el asistencialismo; son reforzadas con medidas político culturales cuyo objetivo particular es la exacerbación del chovinismo y el localismo para evitar la unidad popular; y, se combinan con profusas medidas de propaganda gobiernistas y dictadura de opinión con el propósito de imponer la visión de Estado sobre la realidad, para con ello, influir de manera activa en la conciencia de las masas.

La premisa fundamental en la contrainsurgencia es la adjetivación del conjunto de explotados y oprimidos como enemigo interno, es decir, la población es a la vez objeto y enemigo. En esa medida la labor contrainsurgente tiende en dos paralelos

generales: por un lado, la mediatización de la voluntad popular, por el otro, el terror burgués como instrumento de coerción y dominio.

La contrainsurgencia tiene como puntal nombrar a las cosas por su contrario para desvirtuar la realidad, justificar su actuar terrorista y criminal. Campañas y medidas contrainsurgentes son enmascaradas con adjetivaciones imperialistas que distorsionan la realidad, tales como guerra contra el terrorismo, guerra o lucha contra el narcotráfico, guerra o combate contra la delincuencia organizada, combate contra el crimen organizado, resguardo de la seguridad pública o seguridad nacional.

El imperialismo en su doctrina contrainsurgente distorsiona la realidad. Nombra o pone adjetivos contrarios a la naturaleza de las fuerzas populares, por ejemplo, en todos sus manuales contrainsurgentes denomina a los comunistas como terroristas, cuando quien patrocina y objetiva el terrorismo como tal, es la burguesía por medio de su Estado.

Otra premisa de la contrainsurgencia es el carácter político de toda guerra, en los hechos reconoce a la revolución social como portadora de cambio o transformación del régimen social, por eso, contrapone la contrarrevolución a la revolución.

Partidaria de la reacción, la contrainsurgencia tiene identificada la naturaleza política y de transformación social de toda fuerza revolucionaria, al mismo tiempo, tiene claridad de la estrategia que utilizan los comunistas en la lucha contra la tiranía capitalista, y, sabe que la fuente inagotable de recursos para la guerra popular es el pueblo o población, en ese sentido, el principal esfuerzo de la contrainsurgencia es disociar a las fuerzas revolucionarias del pueblo, es decir, aislar a los revolucionarios de las masas populares.

La burguesía y su Estado saben bien que las causas que dan origen a las luchas del pueblo por su emancipación son de carácter socioeconómicas y políticas. De esa manera su estrategia contrainsurgente es en suma perversa y criminal, ya que, con ella tratan de mediatizar el descontento popular con quimeras asistencialistas o reformistas, disuadir la voluntad popular de combatir con el terrorismo de Estado y crímenes de toda laya.

Podemos afirmar que contrainsurgencia significa terror burgués contra el pueblo y manipulación de las masas, así mismo, indica la estructuración de una fuerza reaccionaria contra los revolucionarios, la cual es dirigida por fuerzas del Estado o potencias extranjeras.

Medios, recursos e instrumentos de la contrainsurgencia

El conjunto de medios, recursos e instrumento de la contrainsurgencia descansan en el poder económico y político del Estado, la burguesía y el imperialismo. Por eso, en toda la literatura sobre la GBI se refiere a ella como la combinación de factores económicos, políticos, culturales, tecnológicos, psicológicos y militares.

No podría ser de otra forma, ya lo dijo Engels, *-La victoria del poder o violencia se basa en la producción de armas, y ésta a su vez en la producción en general, es decir: en el “poder económico”, en la “situación económica”, en los medios materiales a disposición de la violencia-* es por ello que todo cuanto tiene a su alcance la burguesía y su Estado lo usan como arma contra el pueblo sublevado.

Así, las medidas económicas, políticas, culturales, psicológicas y militares promovidas en la guerra contrainsurgente son armas de la burguesía, su Estado y la reacción en época del imperialismo para oprimir al pueblo. En esencia, son violencia de la burguesía para proteger sus intereses, aún aquellas prácticas disfrazadas de ayuda humanitaria y asistencialismo social son violentas, ya que, tienen como fin la dominación de la burguesía sobre el pueblo.

Las medidas económicas tienen como propósito fundamental mediatizar, cooptar, desmovilizar y alinear la voluntad popular de combatir a la política de gobierno e intereses de los capitalistas y el imperialismo. Una medida económica en apariencia ajena al Estado, a los intereses burgueses y a la contrainsurgencia es el narcotráfico, este fenómeno se enmarca en las medidas económicas políticas de carácter contrainsurgente comandadas por el imperialismo y los Estados burgueses de cada país donde existe.

Las medidas culturales adquieren significado político en cuanto persiguen atar a las masas a la alienación burguesa, al atraso y la reacción por medio de la exacerbación del chovinismo y la cultura vulgar burguesa, el propósito es evitar la unidad popular.

Las medidas políticas son reformistas y punitivas, ambas tienden al final del camino a justificar la existencia de un Estado burocrático militar apologista al terrorismo. De manera gradual o de forma súbita se impone un sistema político que anula garantías constitucionales, derechos humanos y un sistema jurídico que legaliza las prácticas terroristas y fascistas a modo de ley, en síntesis, esas medidas

políticas convergen en un estado de derecho oligárquico y un Estado policíaco militar.

Las medidas psicológicas se circunscriben en técnicas de interrogación en base a la tortura, tratos crueles y degradantes; al terrorismo psicológico; a la propaganda política e ideológica; al espionaje e inteligencia; y, a la manipulación de masas.

Las medidas militares adquieren expresión concreta del terrorismo burgués en terrorismo de Estado, crímenes de lesa humanidad, represión generalizada o sistemática, prácticas fascistas, control coercitivo de la población, el paramilitarismo, la militarización de la sociedad y la vida pública. En palabras de Engels, *la violencia se llama hoy ejército y escuadra de guerra, el ejército se ha convertido en finalidad principal de Estado, ha llegado a ser fin en sí mismo*, en nuestras palabras, en el caso de México, un Estado policíaco militar con especificidad contrainsurgente.

Es el imperialismo, el Estados burgués y grupos oligarcas quienes organizan, estructuran y desarrollan la contrainsurgencia, estos mismos actores son quienes la dotan de medios y recursos.

La organización contrainsurgente que se le antepone a la organización del pueblo y a las fuerzas revolucionarias no puede subsistir sin el apoyo del Estado, el imperialismo o un grupo oligarca; toda estructura contrainsurgente es inmanente del Estado burgués, no puede operar, permanecer y desarrollarse sin ser parte de la política de gobierno; la contrainsurgencia no puede subsistir sin el financiamiento de actividades ilícitas, el botín, de fondos del Estado y la subvención oligarca.

En la contrainsurgencia no sólo se combinan aspectos multidisciplinarios con el fin de abortar o destruir el proceso revolucionario, también se coordinan las instituciones que dan forma al Estado y aquellas propias del imperialismo. Quien tiene el comando de esa coordinación, planes y estructura contrainsurgente es una élite del ejército, tras ellos, el poder económico burgués y el imperialismo.

Contrainsurgencia en el gobierno de López Obrador

Con el arribo de Morena a la junta administrativa, la figura de López Obrador proyectada como hombre de izquierda y el eslogan publicitario de un gobierno del cambio autodefinido como la cuarta transformación, muchos mordieron el anzuelo de la falacia reformista y otorgaron el beneficio de la duda al actual gobierno sin saber que eran víctimas de la propaganda política e ideológica de la

contrainsurgencia en el país.

El gobierno en turno en todo momento pregona ser del cambio y de los pobres, incautos y blandengues política e ideológicamente se alinearon al eslogan publicitario gubernamental y juntos pregonan que en el presente “ya no se reprime”, “ya no se espía a nadie”, “no hay presos políticos ni se persigue a nadie por sus ideas”, “no es el mismo ejército”, “se respetan los derechos humanos”, “no existe militarización del país”, en fin, se hace alusión a una transformación del aparato represor y a la política de gobierno.

El conjunto de acontecimientos derivados de la política gubernamental y resultados de la administración en turno demuestran que, el aparato represor y la política de gobierno no han sufrido cambio en su carácter de clase, su función de opresión, esencia reaccionaria e inclinación imperialista.

Tan es así que, la contrainsurgencia como política de gobierno y doctrina de Estado no ha sufrido modificación sustancial ni es cosa del pasado, es parte de los mecanismos de opresión con los que el Estado mexicano sostiene a la dictadura del capital sobre el pueblo.

En México la contrainsurgencia es intrínseca al Estado, inherente a toda junta administrativa e inseparable de la política burguesa. El gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador no difiere de otras juntas administrativas anteriores a la de su administración respecto a la doctrina contrainsurgente y el terrorismo burgués, su política de gobierno da continuidad a planes, programas y estructuras contrainsurgentes que desde antaño se operan como proyecto de Estado y dominio imperialista.

La contrainsurgencia es intrínseca al Estado mexicano por ser el país una nación dependiente y funcional al imperialismo, en esa medida, el Estado mexicano subordina su política de Seguridad Interior a la Seguridad Nacional del imperialismo yanqui y a los intereses extranjeros. El gobierno que se autodefine como cuarta transformación es abyecto a esta postura proimperialista y enemiga del pueblo mexicano.

Una vez consolidada la actual burguesía en el poder después de la revolución de 1910-17, el Estado mexicano se ha conducido hasta la fecha como un adicto a las políticas del imperialismo, en particular, a partir de 1942 con la creación de la Escuela Superior de Guerra, instrumento por medio del cual las Fuerzas Armadas

adoptaron la doctrina militar de Estados Unidos (EU), con suma prioridad, abrazaron su carácter contrainsurgente.

Es de conocimiento común que apegado a la política imperialista y por su carácter reaccionario el Estado mexicano desde antaño desarrolla la contrainsurgencia contra el pueblo. El período vulgarmente conocido como “guerra sucia” no fue otra cosa que campañas contrainsurgentes sustentadas en el terrorismo de Estado y prácticas fascistas, también es de conocimiento general que, la mano imperialista estuvo siempre presente en ese período fatídico para las masas populares y mece la cuna del niño en el presente.

Política económica, de seguridad nacional e interior, doctrina militar, adiestramiento policiaco, estructura de inteligencia y desarrollo tecnológico descansan en la dependencia respecto al imperialismo, son hijas de las doctrinas y teorías económicas burguesas en épocas del imperialismo.

La contrainsurgencia es intrínseca al Estado mexicano por su vena criminal con la que fue erigido, ese signo no ha desaparecido, se acentúa y vuelca en rúbrica principal. Los intereses burgueses que defiende y administra conllevan a esa máquina represora a su forma burocrático militar, cuyo cuño es en el presente, un Estado policiaco militar, un estado de derecho oligárquico y un gobierno falsamente popular disfrazado de amigo del pueblo.

Un Estado de ese carácter y trayectoria criminal nunca renunciará a la contrainsurgencia por ser ella parte de su génesis. El ejército de hoy es el ejército criminal de los constitucionalistas que con el terror de la violencia impusieron los intereses de la burguesía nortea como intereses generales de todo el pueblo, en la actualidad, las prácticas criminales de ese ejército son materializadas en el terrorismo de Estado; los burgueses que explotan al pueblo son la estirpe de los burgueses que se apoderaron de la revolución gestada por los Hermanos Flores Magón y encabezada por Zapata y Villa; y, los políticos de oficio que hacen el papel de servidumbre de la burguesía y tiranos del pueblo son los vástagos de la servidumbre de la burguesía que se apropió de la lucha del pueblo por su emancipación en la revolución de 1910-17.

La contrainsurgencia es inherente a toda junta administrativa porque todo gobierno capitalista en independencia del partido burgués del que provenga se constriñe a la defensa de los intereses oligarcas e imperialistas que imperan en

VII. La Guerra de Baja Intensidad (GBI)

el país; su papel es velar por los intereses de la clase en el poder, es por ello, que los gobiernos mexicanos sexenio tras sexenio desarrollan proyecto de Estado por medio de políticas burguesas que emanan del imperialismo, entre ellas la contrainsurgencia, en esa medida la junta administrativa en funciones no escapa a dicha lógica.

Parte indisoluble del carácter reaccionario de toda junta administrativa de los capitalistas es la violencia burguesa contra el pueblo, el terror de Estado como medio e instrumento de opresión. La actual junta administrativa es capitalista, en consecuencia, la contrainsurgencia intrínseca a su política de gobierno es expresión del terror de Estado, violencia burguesa contra las masas organizadas y los desposeídos, reflejo del odio de clase y medida fascista aplicada de manera sistemática cada vez más aguda en relación a la putrefacción del régimen capitalista que los tiranos sostienen con la violencia de Estado.

El Estado burgués mexicano fue instituido por criminales, cimentado con masacres, así como toda laya de crímenes emanados del terror burgués y sostenido a la fecha con la violencia institucional contra sus críticos y las masas populares. El gobierno de López Obrador y él mismo no son parteros de cambio alguno, son vástagos del sistema capitalista, criaturas paridas en la época del imperialismo que hacen reverencia a su padre el capital y su madre la democracia burguesa, son a su vez, prisioneros y amantes de un régimen oprobioso que se alimenta de la explotación y opresión de millones de desposeídos, son pues, personificaciones apologistas de la dictadura capitalista, en consecuencia, de la contrarrevolución.

En México la GBI adquiere rostro y dimensión como doctrina imperialista adoptada por el Estado mexicano y ejecutada por cuerpos policiaco militares; es política de Seguridad Interior en función de la Seguridad Nacional del imperialismo norteamericano; estrategia para combatir al pueblo organizado y a los revolucionarios; terrorismo de Estado con el fin de inhibir la voluntad popular de combatir; la guerra que el Estado mexicano desarrolla de forma velada y abierta contra el pueblo, en síntesis, es la contrarrevolución.

El Estado mexicano y su amo imperialista han orquestado la contrainsurgencia por medio de campañas de corto, mediano y largo plazo. Cada campaña se encuentra constituida por ofensivas y éstas a su vez por operativos sean disuasivos, de búsqueda, persecución y/o aniquilamiento.

El actual gobierno da continuidad a esta forma de objetivar la contrainsurgencia, la alimenta, genera condiciones para que se catapulte al éxito y enclaustra al pueblo como enemigo interno por medio del fortalecimiento del estado de derecho oligárquico y el Estado policíaco militar.

Es evidente e irrefutable que la junta administrativa encabezada por López Obrador no rompió con la sumisión de la Seguridad Interior respecto a la Seguridad Nacional de EU, al contrario, la subsumió más a la férula del dominio imperialista que representa EU, prueba de ello, son los acuerdos en materia de migración, el TMEC y el despliegue militar en la frontera sur del país como garantía de resguardo a la Seguridad Nacional norteamericana.

La concepción de Seguridad Nacional e Interior no viraron rumbo con la actual junta administrativa, todo el andamiaje del Estado sostiene e imprime energía al principio contrainsurgente y criminal en el que se sustentan dichas políticas, a saber, el pueblo como enemigo interno y el extranjero como socio idolatrado. Como en otros sexenios, al pueblo se le criminaliza, hostiga, reprime, vigila, espía y embauca, en suma, es visto y tratado como enemigo en todo momento.

La concepción de Seguridad Interna que moldea a las Fuerzas Armadas es contrainsurgente y terrorista, tiene como premisa combatir al pueblo inconforme, organizado y sublevado que ejerce el derecho a la rebelión contra un gobierno tirano. Para justificar su proceder contrainsurgente, en los manuales de guerra irregular con los que se adoctrina a los cuerpos represivos se tipifica al pueblo organizado como subversión o terroristas; a la acción política de las masas disturbios civiles; a las acciones políticas militares de los revolucionarios acciones armadas de rebeldes; a las masas populares organizadas que desarrollan crítica política y a los revolucionarios transgresores de la ley, movimientos antisociales; y al espionaje junto a la persecución política se le adorna con el eufemismo de inteligencia y seguimiento.

La Seguridad Interior en México no es más que la prevalencia de los intereses de la burguesía por medio del Estado burgués, es el ejercicio de la violencia del Estado contra el conjunto de explotados y oprimidos, se traduce en coerción y violencia contra las masas para someterlas con el yugo de la opresión a la dictadura capitalista. Tal es la raíz del por qué la doctrina castrense sobre la Seguridad Interior y pública se constriñe a evitar, impedir y a eliminar las acciones subversivas, léanse, amenazas revolucionarias o insurgentes.

VII. La Guerra de Baja Intensidad (GBI)

He ahí por qué la estrategia en seguridad pública y seguridad nacional que impone el actual gobierno se reduce a la defensa de los intereses capitalistas, sumado a esa condición de clase, se encuentra la condición concreta del régimen, su situación de crisis empuja a que la junta administrativa se apoye en el pilar fundamental con el que se sostiene la dictadura capitalista, el ejército, baluarte para la burguesía por su médula criminal y contrainsurgente.

La militarización de la vida pública del país con la que procede el gobierno de López Obrador descansa en las concepciones reaccionarias de seguridad interior que ponderan el uso de las Fuerzas Armadas de manera permanente para la supuesta garantía de la paz social, la cual en el actual régimen es la paz burguesa, es decir, el derecho del burgués de explotar, abusar y expoliar al pueblo.

Como se puede constatar, el gobierno de López Obrador en apego a la doctrina de seguridad nacional, interior y pública que el Estado mexicano profesa desde antaño, pondera a la militarización de la vida pública como su principal prioridad y producto de su administración. El resultado, se sintetiza en que el poder conferido por el actual gobierno a los militares coloca a la militarización de la vida pública como una de las principales aristas de la contrainsurgencia en el presente.

Con un partido burgués que se promociona como de izquierda, un gobierno falsamente popular y a la cabeza de ambos un hombre del régimen con careta de amigo del pueblo, la burguesía consumó un añejo plan de Estado, asentar en la Constitución Política la militarización de la vida pública del país, así como desplegar en apego a derecho en líneas y puntos a inmensa cantidad de hombres armas. Ahora, en los anales de la máxima ley burguesa se justifica la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado que emana del poder militar.

En el país con el respaldo y poder otorgado a los militares se configura de manera gradual lo que en los manuales de contrainsurgencia se estipula: el control de la vida pública y poder civil por parte de los militares.

En el actual gobierno, en los hechos el poder civil se encuentra subordinado al poder militar, ochenta funciones civiles se han transferido al ejército, la mayoría son en materia de seguridad pública, el resto son de índole económico, migratorio, comercial, servicios, construcción, salud e incluso políticas; así mismo, la presente administración destaca por ser la que más iniciativas legislativas ha elaborado para empoderar a los militares. El resultado de esta inclinación fascista es el uso de

las Fuerzas Armadas como instrumento político para el control de la población, coerción para las masas y de hostilidad contra las fuerzas revolucionarias.

La profesionalización de los cuerpos represivos, en particular de la SEDENA y SEMAR son otro indicador que muestran la especificidad contrainsurgente de la militarización que el actual gobierno impulsa a modo de ley. Hombres del régimen nombran profesionalización del ejército a la dependencia doctrinaria respecto al imperialismo a partir de 1942 con la creación de la Escuela Superior de Guerra; la profesionalización aludida reside en aplicar la doctrina contrainsurgente y de seguridad interior en función de la garantía de los intereses capitalistas.

En esa medida, división de trabajo, cursos de capacitación o adiestramiento de los cuales son objeto las Fuerzas Armadas tienen como propósito dentar a la máquina represiva contra el pueblo organizado. En promedio, ochenta años de constante capacitación e instrucción contrainsurgente del ejército mexicano en la escuela imperialista ha forjado una doctrina terrorista y criminal en las entrañas de las Fuerzas Armadas, con ello, el Estado mexicano brilla por su vocación contrainsurgente y represora instrumentada principalmente por el ejército, hoy, institución incólume para los testaferros de la dictadura capitalista.

Con la especialización de las Fuerzas Armadas, lo enmarcado en el plan DNII –Contra amenazas a la paz social y el despliegue de fenómenos que atentan la seguridad nacional- y DNIII –apoyos a la población civil en casos de desastre- la estructura castrense adquiere mayor carácter contrainsurgente, recordemos que el plan DNII es el que define naturaleza, estructura y labor del Ejército mexicano, y el plan DNIII tiene como esencia mediatizar y husmear a la población, ambos tienen en su vena el combatir el enemigo interno, ese aspecto es lo que lo hace criminal y contrainsurgente al aparato represor desde su origen y concepción estructural.

Un ejército burgués que tiene como objetivo de guerra a la población de su país es en esencia contrainsurgente y en sus entrañas yace la vena fascista que en la medida de la agudización de las contradicciones del régimen burgués brota como característica principal de su práctica represora. Las fuerzas especiales o de élite son expresión concreta de la vena contrainsurgente y fascista del Ejército mexicano, los cuerpos de élite en el país tienen origen y vocación contrainsurgente, a la fecha, el número, subespecialización y división de estas fuerzas criminales se han multiplicado y cada vez más son empleadas contra la población.

VII. La Guerra de Baja Intensidad (GBI)

Al igual que en los operativos contrainsurgentes del pasado, la actual administración se apoya en las fuerzas de élite o especiales para perpetrar crímenes atroces contra la población y desarrollar la guerra contra el pueblo.

La estructura contrainsurgente que el Estado mexicano ha instituido en décadas de terror contra el pueblo, en el presente, cobra fortaleza con la militarización, las reformas al estado de derecho y la reforma militar efectuadas en el gobierno morenista. Los recursos principales dotados por la junta administrativa al aparato represor son: el mayor presupuesto en su historia; la discrecionalidad como criterio central de la erogación del presupuesto; leyes que otorgan mayor impunidad e inmunidad; centralización y monopolio en el mando de los cuerpos represivos; y, aprobación institucional para ocupar la vida pública del país hasta el 2028.

El componente militar de la contrainsurgencia se encuentra afilado, desplegado y empoderado a tal grado de tener el monopolio de la seguridad pública, los cuerpos civiles subordinados al mando militar, mando operativo y estratégico de la Guardia Nacional en militares, su presencia en calles e instituciones es regla, en resumen, se ha aceitado y tensado la fuerza militar para golpear al pueblo.

Muestra clara del poder militar tras la mascarada de un gobierno civil es la función del Consejo de Seguridad Nacional, por medio de este mecanismo los militares imponen y se avala por el poder civil las prácticas de terrorismo de Estado y la contrainsurgencia. Se trata de un formalismo protocolar, puesto que, quien lleva la batuta es la cúpula militar y de la marina.

Otro de los aspectos principales de la contrainsurgencia impulsados por comisión, omisión y aquiescencia en el gobierno de López Obrador es el paramilitarismo, así mismo, la promoción de la descomposición social desde el engranaje del Estado y cúpulas empresariales.

Paramilitarismo, descomposición social y militarización se yuxtaponen por ser parte de la contrainsurgencia en el país. En el actual sexenio estructuras y grupos paramilitares de antaño toman fuerza; nuevos grupos se crean e impulsan; y, bajo el velo de la delincuencia organizada o narcotráfico en connivencia con el Estado se acrecienta la presencia del paramilitarismo en el campo y en la ciudad.

El papel de las antiguas autodefensas o guardias rurales lo ocupan desclasados organizados y estructurados por fuerzas del Estado en grupos paramilitares. Hostigan a toda fuerza del pueblo organizado, esparcen violencia y descomposición

en el entorno local; su papel es netamente contrarrevolucionario, progobiernista y criminal.

El paramilitarismo con careta de delincuencia organizada o narcotráfico asola a las regiones del país que sobresalen por ser ricas en minerales; por su importancia en el comercio y circulación mercantil; con antecedentes revolucionarios o mote de base política de la guerrilla; ahí donde yacen organizaciones del pueblo; y, aquellas preconcebidas para proyectos empresariales o de Estado. La función de este tipo de paramilitarismo es introducir el terror en el pueblo por medio de prácticas fascistas y crímenes de lesa humanidad; materializar el despojo y podrir el entorno social, así mismo, custodiar intereses oligarcas y de Estado.

Los grupos de seguridad privada, los enmascarados de autodefensa y organizaciones político militares de ultraderecha, todos financiados por oligarcas y empresarios, cubiertos del manto de la impunidad que otorga el poder del dinero y la colusión política con el Estado, actúan contra el pueblo y en defensa de intereses de grupos oligarcas.

En conjunto, el paramilitarismo hostiga con violencia armada a fuerzas del pueblo; asola con el terror y descomposición social a población que habita en zonas de la nación ambicionadas por oscuros intereses oligarcas y de Estado; perpetra crímenes atroces contra el pueblo y realiza la gleba en el siglo XXI; extorsiona al pequeño comerciante, pequeño propietario y a la clase trabajadora, asimismo, envenena el entorno social con la apología al comercio y consumo de drogas, se apoya en la cultura del servilismo al poder del dinero y hace culto a la lumpenización.

Como antaño, el papel que el Estado mexicano otorga al paramilitarismo es el trabajo sucio orquestado contra el pueblo en planes contrainsurgentes, el propósito es doble, por un lado, disociar fuerzas revolucionarias y masas populares, por el otro, quebrar la voluntad popular de combatir por medio de métodos terroristas.

Medios, recursos, instrumentos, capacitación y línea son proporcionados por el Estado a los paramilitares, los canales conducentes son múltiples, van desde la connivencia en todo tipo de actividades ilícitas, la financiación por medio de programas sociales, fondeos empresariales y mecanismos directos encubiertos por la clandestinidad e ilegalidad.

Por ejemplo, quien se encuentra detrás de las mafias criminales, cárteles y supuestas autodefensas es la estructura contrainsurgente comandada por militares,

VII. La Guerra de Baja Intensidad (GBI)

marinos y cuerpos policiacos. En esta componenda sobresale el ejército por su control y comando de los engendros que esparcen el terror en el país a nombre de la supuesta delincuencia organizada, se trata de descomponer y podrir el entorno social que posibilita la transformación radical del régimen, es decir, envenenar el agua del pez.

El paramilitarismo y militarización del país son parte del conjunto del aparato represor, del Estado policiaco militar con especificidad contrainsurgente, su fortalecimiento e impulso por el gobierno de López Obrador ha generado violencia contra el pueblo, un conjunto de atrocidades como:

- La desaparición forzada. El fenómeno registra continuidad y crecimiento exponencial, en la presente administración se exagera el crimen de lesa humanidad, a diferencia de gobiernos anteriores, en el presente se niega de manera absurda y cínica la responsabilidad del Estado en su cometido, el principal vocero de esta postura criminal es el representante del Ejecutivo federal.

Una de las características perenes en materia de desaparición forzada en el país es su cometido en torno a un marco contrainsurgente enmascarado con subterfugios y tipificaciones a modo, ejemplo son: las campañas contrainsurgentes en el período conocido como guerra sucia, las campañas de control y prevención social con Fox, las campañas en el marco de terrorismo de Estado con Calderón y Peña, y, en el presente, la continuidad de las desapariciones forzadas como prácticas de terrorismo de Estado y violencia capitalista en pretexto de garantizar la seguridad pública, la paz social y devolver la tranquilidad a los mexicanos.

- Ejecuciones extrajudiciales, masacres, genocidios y desplazamiento forzado. Crímenes perpetrados por cuerpos represivos, estructuras criminales o paramilitares ligadas al Estado y al poder económico de los burgueses, botón de muestra son la inmensa cantidad de fosas clandestinas sembradas en todo el territorio nacional.

Bajo la mascarada de la delincuencia organizada se perpetran múltiples actos de terror contra la población, ya sea para desplazarla, cometer el despojo o perpetrar la sevicia de crímenes atroces, el propósito, el control de la población con métodos terroristas y contrainsurgentes que tienen

como único beneficiario al régimen y sus personificaciones.

- Las detenciones arbitrarias son otro flagelo con el que el Estado mexicano atormenta al pueblo, lo amedrenta y aterroriza, es el ejército el principal perpetrador de este crimen de lesa humanidad.

Militares, marinos, GN, policías y paramilitares en apego a criterios instruidos en academia militar y policíacas determinan arbitrariamente qué ciudadano es sospechoso, lo detienen, es ultrajado, vejado, torturado, desaparecido y ejecutado extrajudicialmente. A las víctimas se las llevan con vida y en el mejor de los casos aparecen botadas sin vida en x o y paraje.

- Múltiples actos de represión contra el movimiento popular, masas y sectores populares inconformes. Esta forma concreta de la violencia de Estado adquiere mayor frecuencia y sevicia a medida que el sexenio se acerca a su final, en relación a la impunidad e inmunidad otorgado a los cuerpos represivos con el estado de derecho, y, la agudización de las contradicciones del régimen, en esa espiral de violencia burguesa el número de víctimas de la represión crecen sin cesar.
- Tratos crueles, inhumanos, degradantes y tortura perpetrados contra la población que se quiere incriminar, asimismo, hacia militantes de organizaciones populares y revolucionarias; en ambos casos la tortura es utilizada como método de obtener información que posibilite dar golpes tanto al movimiento popular como al movimiento revolucionario.
- Violaciones sistemáticas de derechos humanos. Multitud de quejas y testimonios acusan al ejército, la Marina, GN y cuerpos policíacos como los principales perpetradores de la violación de derechos humanos a lo largo y ancho del país.
- Prisión por motivos políticos. En franca medida represora y contrainsurgente el gobierno encarcela a luchadores sociales, críticos al régimen y militantes de organizaciones populares, los cuales se encuentran en esta situación de criminalización y judicialización de la organización y protesta popular.
- Espionaje político. Una labor contrainsurgente y terrorista comandada por militares, ellos son quienes tienen el control del aparato de inteligencia,

VII. La Guerra de Baja Intensidad (GBI)

el cual es utilizado para perpetrar persecución política, ejecuciones extrajudiciales, deshacerse de contrincantes políticos, montar expedientes incriminatorios y campañas contraguerrilleras.

De los flagelos y atrocidades mencionadas es irrefutable que:

- El gobierno actual bajo el argumento para devolver la paz y tranquilidad a los mexicanos, en alusión al supuesto de la “batalla a la delincuencia” y “pacificar el país” perpetra crímenes contra el pueblo, militariza aún más a la nación y avanza en los planes contrainsurgentes del Estado mexicano;
- La creación de la GN confirmó la conexión contrainsurgente y reaccionaria del gobierno de López Obrador con sus antecesores, ambos, anteponen la militarización de la vida pública como premisa de seguridad nacional e interior, de esa manera, la militarización de la seguridad pública deviene en mayor militarización del país y el fortalecimiento policiaco militar con especificidad contrainsurgente, esa concepción reaccionaria alimenta el cometido de crímenes de lesa humanidad como forma singular de control social y terror sobre el pueblo;
- La continuidad en el cometido de prácticas de terrorismo de Estado como lo son la detención desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales y tortura constituye muestra de la existencia de una misma política de Estado que criminaliza al pueblo; cientos de quejas contra las fuerzas armadas y la GN en materia de violación de derechos humanos testifican la perpetración del terrorismo de Estado y la contrainsurgencia por parte del aparato policiaco militar;
- Los patrones con los que los cuerpos represivos perpetraron crímenes contra el pueblo se repiten con el actual gobierno. Detenciones arbitrarias en retenes o volantas, ejecuciones extrajudiciales en puestos de control o en movimiento; desapariciones forzadas a nombre de la delincuencia organizada; tortura en retenes, cuarteles y centros penitenciarios a nombre de interrogatorio; desplazamiento forzado tras el velo del crimen organizado y el narcotráfico; y, represión so pretexto de la paz social y hacer valer el estado de derecho;
- La masacre, tratos crueles e inhumanos, tortura, detención arbitraria, detención desaparición forzada, ejecución extrajudicial y la retención

ilegal en mazmorras, ocupación de pueblos y desplazamiento forzado, son intrínsecas a la doctrina de las Fuerzas Armadas, son la concreción del plan DNII y el rostro concreto de la contrainsurgencia;

- Las prácticas criminales y el papel contrainsurgente de la DFS y Secretaría de Gobernación que en el siglo pasado se ensañaron contra el pueblo, en la actualidad las ha perfeccionado y especializado el aparato represor, siguen vivas y objetivadas por la estructura contrainsurgente que yace en entrañas del aparato represor en particular en el ejército; y,
- El Ejército mexicano se encuentra empapado de sangre del pueblo, lacrado por las detenciones desapariciones forzadas, marcado por la tortura contra el pueblo, sucio por las violaciones perpetradas contra población inerme, es un instrumento criminal adicto a la violencia y terrorismo de Estado contra el pueblo. Ese conjunto de aristas del terror burgués confirma su natura contrainsurgente y esencia criminal, en consecuencia, el actual gobierno se reviste del mismo carácter por ser el principal promotor y defensor de este instrumento represor.

Aspecto relevante en la política contrainsurgente que el actual gobierno reproduce fiel a la GBI es la coordinación interinstitucional que dan cuerpo al Estado mexicano. La coordinación entre las diferentes instituciones del Estado para ejecutar la represión y operativos contrainsurgentes son parte del método opresor con el que desde antaño procede la máquina represora contra el pueblo, el gobierno en turno, se ha caracterizado por ejecutar este engranaje bajo mando único, ejemplo concreto son los operativos interinstitucionales encabezados por el ejército o la GN contra el pueblo inconforme y organizado.

El engranaje de máquina represiva en todo momento ha actuado de forma conjunta contra las fuerzas revolucionarias y las masas populares. La historia del Estado burgués en México es de terror, violencia, crueldad y criminalidad, es el terror materializado en política de gobierno e intrínseco a la democracia burguesa mexicana.

En ese historial de terror y represión ocupa importante lugar la contrainsurgencia, escuela y doctrina que desde 1953 a la fecha es aplicada, constantemente sistematizada e instruida por el imperialismo y vasallos mexicanos. Que los expresidentes Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría hayan

VII. La Guerra de Baja Intensidad (GBI)

sido agentes de la CIA y a la vez presidentes de la república demuestra no sólo la subyugación al imperialismo norteamericano, el odio al pueblo y lo hondo de la contrainsurgencia en el país como esencia del Estado, también, refleja que en el seno del Estado en colusión con el imperialismo se reproducen hombres del régimen con vocación contrainsurgente y criminal, como es el caso del Fiscal General de la República, Gertz Manero, quien desde esa institución en coordinación con el resto de la estructura contrainsurgente da continuidad a los obcecados planes contrainsurgentes del último cuarto del siglo pasado.

Al igual que en el pasado, en el presente la contrainsurgencia es instrumentada por medio de todas las instituciones del Estado y el régimen social, incluidas las que emanan de la religión, en particular sus expresiones sectarias o aquellas que el imperialismo promueve.

El componente social de la GBI toma notabilidad en el gobierno de la autonombraada cuarta transformación por el odio obcecado contra la organización del pueblo. En la postura gubernamental de “nada con los Zapata y los Villa” se refleja la vena contrainsurgente que inspira a las personificaciones de este gobierno, es por ello, que presupuesto público y programas sociales son utilizados como medios para ganar mentes y corazones con el propósito de aislar a revolucionarios y movimiento popular de las masas trabajadoras.

El presupuesto millonario y los 63 programas sociales son el andamiaje principal del componente social de la GBI en el actual sexenio. De cuyo universo de programas asistencialistas destacan ocho como prioritarios, los cuales son la punta de lanza para evitar la unidad popular, la toma de conciencia de clase de sí y para sí de los desposeídos y concretar la mediatización de la voluntad popular de combatir.

Como en la época del florecimiento de programas sociales de marcado carácter contrainsurgente, en particular lo que se nombró Campaña Nacional de Subsistencias Populares (CONASUPO), en el presente, el gobierno despliega esa misma forma de contrainsurgencia con otros adjetivos y más recursos.

Programas asistencialistas como *Sembrando Vida* dividen al pueblo, confrontan a hermanos de clase, desarticulan organizaciones del pueblo, con el criterio de nada con intermediarios niegan el derecho a la organización, cooptan y mediatizan la voluntad popular de combatir. A la fecha 63 programas sociales conforman el

andamiaje de control social y contrainsurgente.

El gobierno en turno comparte con el de Zedillo en la contrainsurgencia la derrama presupuestal para proyectos regionales o locales ahí donde se encuentra el paramilitarismo, es decir, por medio de programas sociales financian al paramilitarismo y fortalecen sus estructuras criminales.

El financiamiento de la contrarrevolución por medio de programas sociales no es el único ejemplo del carácter contrainsurgente de la política social de la junta administrativa en turno, la sectorialización y población objetivo que albergan los programas sociales tienen propósitos de segregación del universo de explotados y oprimidos por criterios contrainsurgentes y reaccionarios, ejemplo, concreto es uso faccioso del programa denominado *Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Sembrando Vida*.

Parte de las medidas sociales en estrecho vínculo con la militarización y el componente psicológico de GBI que el gobierno instrumenta en la actualidad por medio de los militares son: participación de programas sociales como *sembrando vida* y *jóvenes construyendo el futuro*; la instalación y administración de viveros; la distribución de equipos e insumos médicos, elaboración de trajes para el personal médico y la aplicación de vacunas; combate al robo de combustible; construcción y control de obras públicas; y, distribución de libros gratuitos. El objetivo oculto es el espionaje político y el control de la población, en resumen, la objetivación del plan DNII.

En estrecha conexión el gobierno desarrolla campaña permanente de operaciones psicológicas por medio de la dictadura de opinión. El terrorismo psicológico instrumentado con el Covid-19 es muestra palpable del componente psicológico de la GBI en el actual gobierno. Con el velo de la pandemia el Estado mexicano impuso medidas de control social, avanzó en la militarización, construyó base de datos con las que no contaba e instauró medidas fascistas como parte de cotidianidad que a la fecha persisten.

Las campañas mediáticas y propaganda gubernamental en torno al discurso de lucha contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, la corrupción, y en materia de seguridad nacional, pública e interior constituyen parte del componente de las medidas psicológicas contra el pueblo que la administración en turno estimula.

Con la dictadura de opinión se aterroriza a la población, al mismo tiempo,

VII. La Guerra de Baja Intensidad (GBI)

se le manipula y mediatiza. Los monopolios de la comunicación alineados al gobierno bombardean a las masas con la versión del Estado sobre la realidad y enmascaran al gobierno como amigo del pueblo; otros monopolios inconformes con la distribución de las cuotas de poder y afines a otros grupos oligarcas, revisten la opinión de ultraderecha y hombres del régimen con disfraz de críticos como postulados demócratas; y, ambas expresiones de los monopolios de la comunicación cierran filas en la postura contrarrevolucionaria, la voz del pueblo organizado y de los revolucionarios es ignorada y combatida.

En estrecha liga con las medidas contrainsurgentes en materia militar, social, política y psicológica el gobierno de la autodenominada cuarta transformación da continuidad a viejos proyectos económicos contrainsurgentes en franco beneficio al capital monopolista e intereses de la seguridad nacional del imperialismo norteamericano, en particular de EUA.

Entre cuyos proyectos destaca el impulso del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Viejo proyecto que divide al país en dos, instaure un muro de contención migratoria y de facto se erige una franja de control militar en el interior del país.

El hecho de subordinar al control de militares y marinos actividades económicas de carácter estratégico indica la magnitud de los planes contrainsurgentes a corto o mediano plazo que impulsa como proyecto de Estado el actual gobierno y revela las medidas fascistas que fortalecen de manera gradual a un Estado policiaco militar con especificidad contrainsurgente.

Ejemplos de esta maniobra de Estado promovida por el gobierno en turno son los encargos y funciones económicas a militares, marinos y GN, que van desde la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Santa Lucía y su administración; lo mismo sucede con el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec; la edificación y custodia de sucursales del Banco Bienestar; construcción de cuarteles de la Guardia Nacional; la vigilancia de aeropuertos y carreteras; el control de puertos y aduanas, comercio marítimo y de las comunicaciones y transporte; y, la construcción de la Refinería Dos Bocas.

La máquina represora de los burgueses administrada por la actual junta administrativa busca información que dé con estructura y ubicación de las fuerzas revolucionarias; acosa, reprime y descalifica al movimiento popular; despliega

más militares en líneas y puntos con dos propósitos yuxtapuestos: disuadir y buscar; en el medio social que considera fértil para la revolución introduce como antaño el paramilitarismo en sus diferentes modalidades, una de ellas, la susodicha delincuencia organizada, su lógica es introducir en el agua del pez un pez “más bravo o depredador”; propala como medida de control social prácticas de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad; intenta ganar mentes y corazones con dispendio del presupuesto público por medio de programas asistencialistas; y manipula a la población con dictadura de opinión y propaganda gobiernista.

En conclusión

- Como en el pasado la contrainsurgencia en México descansa en el postulado reaccionario del enemigo interno;
- La GBI encubre y da vida con el nombre de acciones gubernamentales en los campos político, económico, social y militar;
- La Estrategia Nacional y de Seguridad Pública redundante en poder inaudito a militares, prevalencia de crímenes contra el pueblo y continuidad de la contrainsurgencia;
- La seguridad pública e interior se encuentra militarizada, lo que denota, la existencia de medidas contrainsurgentes; y,
- Las reformas constitucionales al Estado de derecho oligárquico tienen como fondo la institucionalización de la militarización, la criminalización y judicialización de la protesta popular, lo que trae como consecuencia inmediata la represión y crímenes de Estado a manera de norma;

En general, la estructura contrainsurgente que opera desde antaño en el país no fue desmantelada, al contrario, con la política del actual gobierno se robustece, adquiere mayor poder, impunidad e inmunidad.

La particularidad o sello distintivo de la contrainsurgencia en el país se observa en la violencia o terror obcecado del Estado mexicano contra los revolucionarios. Suman en promedio 75 años de guerra contrainsurgente contra el pueblo, período de tiempo marcado por prácticas de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad derivados de la contrainsurgencia sistemática cristalizada en la actualidad en GBI.

VIII. TERRORISMO DE ESTADO Y LA CONTRAINSURGENCIA EN EL SIGLO XXI*

***Publicado en *El insurgente* (Año 29 / No. 243 / Enero de 2025)**

VIII. Terrorismo de Estado y la contrainsurgencia en el Siglo XXI

La política del imperialismo norteamericano es el terrorismo de Estado, para su objetivación cuenta con organismos criminales como la CIA y se observa en las guerras de rapiña, su política de gobierno la impone, al igual que gobiernos títeres que asumen como política el terrorismo de Estado para garantizar los intereses del imperialismo.

Ahí donde algunos ven un terrorismo global de Estado, en realidad lo que acontece y a lo que se enfrentan los pueblos del mundo es el terrorismo imperialista, signo característico de la época al igual que los gobiernos policíaco militares, el remozamiento y fortalecimiento del neofascismo.

El fascismo y el terrorismo de Estado como política se retroalimentan, se complementan y desencadenan la violencia reaccionaria sobre las masas trabajadoras y pueblos del mundo que no marchan sobre la lógica de la dictadura del capital.

El terrorismo de Estado institucionaliza la violencia contra las masas, lo vuelve ley y a través de ésta se ejerce contra las masas inconformes y organizadas para desmovilizarlas a punta de violencia, y ante las masas no organizadas para paralizarlas a golpe de terror; es terrorismo de Estado en tanto que la violencia reaccionaria es sistemática y generalizada; desde el aparato represivo, todo el andamiaje de éste es utilizado para reprimir a los inconformes, definidos como enemigos internos.

El terrorismo de Estado lleva implícito el cometido de crímenes de lesa humanidad de manera sistemática y generalizada, es el resultado de la violencia que emerge de todo el aparato represivo, de las instituciones que componen el Estado y los agentes de Estado que le dan vida a instituciones e instrumentos difusores de la violencia de clase.

El terrorismo imperialista está fincado en el combate al terrorismo en el plano mundial, de donde emerge el imperialismo norteamericano como el gendarme mundial, siempre lo ha hecho, hoy lo justifica bajo dichas banderas.

Las guerras neocoloniales de Irak y Afganistán están fincadas en el terrorismo imperialista, éstas implicaron la adecuación de la doctrina de la contrainsurgencia sin modificar su esencia, ésta se mantiene y se perfecciona en busca de destruir toda expresión de resistencia antiimperialista.

La doctrina de la contrainsurgencia fue elaborada en el marco de la guerra fría, partió del planteamiento de la *contención* al comunismo, política del imperialismo norteamericano y de la OTAN, en esencia tiene un contenido ideológico anticomunista. En consecuencia, la formularon y la aplicaron las potencias colonialistas.

El objetivo de la contrainsurgencia era contener la “invasión soviética a Europa”; en tal marco histórico sucedieron las guerrillas comunistas griegas en los años 45-50; en Asia, la revolución China; en América Latina Guatemala, Brasil y Argentina a finales de los años 50; en África con Patricio Lumumba en el Congo Belga en 1961, las guerrillas de Nyobe en Camerún entre 1954-1964. Un período de vientos anticolonialistas que van de 1945-1964.

La contrainsurgencia como doctrina cobra importancia para el combate de los movimientos de liberación nacional y las revoluciones anticapitalistas; con la derrota de Francia en Indochina, ésta elaboró la contrainsurgencia donde destaca el factor militar, el control territorial, familiar; la elaboración de censos para tender un cerco a la guerrilla. La escuela francesa legitimó y sistematizó la tortura como medio de desarticulación de la insurgencia, como medio de obtención de información y para difundir el terrorismo de Estado, en este caso imperialista o colonialista.

La doctrina de la contrainsurgencia, como se señala, surge en el ámbito de la lucha anticolonial, en tal proceso los colonialistas franceses elaboraron una estrategia y táctica para sofocar la insurrección a mano armada, es decir, con violencia. El marco histórico es la dominación colonial francesa e inglesa a inicios de la guerra fría.

Dos procesos revolucionarios marcan el punto de inflexión, la guerra de liberación en Vietnam y Argelia, los franceses, ingleses y norteamericanos toman nota de tales procesos revolucionarios para elaborar la doctrina de contrainsurgencia.

Los franceses elaboran la *Doctrina de Guerra Revolucionaria* (DGR) a partir de 1952. Bajo la contrainsurgencia elaborada por la escuela francesa se ganaron batallas: la Batalla de Argel, la de Tucumán y la de Saigón con el Plan Phenix. Se agrega el Plan Cóndor en Sudamérica.

Dentro de las derrotas bajo dicha estrategia están la guerra en Mozambique y Angola, entre las derrotas están Argelia en 1962, la derrota de Estados Unidos en

VIII. Terrorismo de Estado y la contrainsurgencia en el Siglo XXI

Vietnam, y Ruanda entre 1990 y 1994. Ambas son importantes, dan luz tanto para ambos bandos fortalezas y debilidades, aciertos o desaciertos en el campo de la contrainsurgencia y la estrategia y táctica que se le opuso.

La estrategia y táctica contrainsurgente francesa plantea como objetivo fundamental el exterminio de la fuerza revolucionaria o guerrillera; principio que define la utilización de la violencia sistemática contra el enemigo.

La escuela contrainsurgente francesa fue codificada en manuales en el marco de la guerra de Indochina Argelia y Camerún. Llegó a Argentina, Brasil y Estados Unidos por medio de intercambios de la experiencia contrainsurgente en el marco de la Guerra Fría.

Los ingleses tienen su propia doctrina de contrainsurgencia basada en su experiencia en Irlanda, Grecia, Malasia, Kenya, entre otros, su exponente es el oficial británico Frank Kitson.

Los norteamericanos acuñaron su doctrina de contrainsurgencia con el nombre de Guerra de Baja Intensidad (GBI), bajo esta estrategia lograron éxitos en Centroamérica en los años 80, fincadas en el control de la información, violencia desmedida contra la población ejercida por el paramilitarismo o escuadrones de la muerte.

Tanto la doctrina francesa, la inglesa y la norteamericana fundan su doctrina en la utilización de la violencia sistemática y generalizada, es decir, recurren al terrorismo de Estado, violencia desenfadada para imponer el terror. Entendiendo el terrorismo de Estado como un método de organizar la violencia contra las masas oprimidas. En este aspecto se funden entre sí.

El planteamiento contrainsurgente norteamericano, a diferencia del francés, retoma y combina el carácter político y militar para la guerra contrainsurgente, que se traduce en “ganar mentes y corazones”.

De Irak a Afganistán la doctrina de contrainsurgencia adquirió nuevas connotaciones, se perfeccionó y se puso nuevamente a prueba en la gestión de Barak Obama. La táctica “*la guerra preventiva*” se sigue utilizando en otra dimensión, ahora adquiere la modalidad de *ataques preventivos* contra los insurgentes.

La guerra de contrainsurgencia toma connotación en la *guerra contra el terrorismo*, contempla una estrategia y táctica militar para sostener la hegemonía

del imperialismo norteamericano y para fortalecer su dominación sobre los pueblos del mundo.

La doctrina de contrainsurgencia norteamericana en el S XXI retoma y fundamenta el proceder de las tropas y agentes contrainsurgentes a partir de la antropología, lo que algunos la han definido como antropología mercenaria. Por citar un ejemplo, desde ésta definen que un “árabe” sometido a vejaciones sexuales se convierte en un diligente colaborador.

La guerra de Irak y Afganistán se desarrollaron bajo la doctrina de la “conmoción y pavor” para un triunfo rápido, no obstante, la resistencia antiimperialista floreció por todo el territorio a pesar de las pugnas interétnicas atizadas por la contrainsurgencia.

La doctrina contrainsurgente del imperialismo norteamericano queda plasmada en el *Manual de campo de contrainsurgencia No. 3-24*, contenido coordinado por el general David H. Petraeus que estuvo a cargo de las tropas norteamericanas en la invasión a Irak; el citado manual establece la política, la técnica y el método para la persecución, tortura y asesinato sistemático de seres humanos que se oponen organizadamente a las guerras de rapiña y neocoloniales, al sometimiento imperialista, a la ocupación neocolonialista, a los gobiernos policíaco militares que tienen por política el terrorismo de Estado, a los que luchan por la transformación revolucionaria de la sociedad.

La doctrina Petraeus elaborada en el marco de las guerras de ocupación neocolonial en Irak y Afganistán consiste en; a) concentrarse en proteger a los civiles por encima de matar al enemigo; b) Asumir mayores riesgos; c) usar fuerza mínima, no máxima. ¿En qué se traduce? En control de población, “ganar mentes y corazones”; en la utilización de fuerzas especiales para aniquilar al enemigo. Lo de la fuerza “mínima”, está en función del objetivo político, en el caso de Irak, conciliar y negociar con quienes no se oponen a la ocupación; y, aniquilar a los que se oponen.

La contrainsurgencia aplicada en Afganistán tiene por principio, mezclarse en el pueblo, vivir entre la población por períodos relativamente largos, se traduce en camuflajearse dentro de la población para reducir riesgos militares. La misión de las tropas imperialistas en Afganistán era “estabilizar el país” consistente en crear una fuerza policíaco militar y un gobierno títere.

VIII. Terrorismo de Estado y la contrainsurgencia en el Siglo XXI

La doctrina Petraeus establece como táctica de la contrainsurgencia la persuasión y coerción, con la primera se agrupan los elementos reconciliables, la segunda se aplica a los irreconciliables, a éstos se les debe identificar, perseguir, capturarlos y matarlos.

El planteamiento contrainsurgente para Irak y posteriormente para Afganistán consistía en la utilización de medidas políticas y militares “flexibles” para que el guerrero contrainsurgente, es decir, las tropas intervencionistas sean “constructores de naciones y a la vez guerreros” que ayuden a “restablecer instituciones y fuerzas locales de seguridad”, así como “facilitar el establecimiento de la gobernabilidad local y el imperio de la ley”, se traduce en un gobierno títere que asume como política el terrorismo de Estado y la doctrina contrainsurgente para combatir al “enemigo interno,” es decir, a quienes luchan contra la ocupación.

La doctrina de la contrainsurgencia norteamericana para este siglo define principios, tácticas y procedimientos de la guerra contrainsurgente aplicable a todo el mundo, diseñado para preparar a los jefes del Ejército y del Cuerpo de Marines para conducir la contrainsurgencia mundial.

Una vieja táctica que se mantiene en la contrainsurgencia consiste en “enfrentar a nativos con nativos”, Irak, Afganistán, Libia y Siria son los ejemplos donde se aplicó para derrocar gobiernos no afines al imperialismo norteamericano. Una táctica para hacer añicos la unidad nacional y despertar los bajos instintos tribales, nacionalistas, racistas, o interétnicos.

En torno a la definición, la contrainsurgencia contempla un conjunto de acciones militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas empleadas por un gobierno para aplastar y aniquilar fuerzas revolucionarias que luchan por la transformación de la sociedad, o que sostienen una lucha antiimperialista.

La contrainsurgencia la fincan en la labor de inteligencia, como en el viejo manual de contraguerrilla en Filipinas, parte del principio de “conocer al enemigo”, al igual que antes dicho conocimiento lo fincan en la tortura y el asesinato sistemático.

El objetivo de la labor de inteligencia es *conocer al enemigo interno* a combatir: objetivos de los insurgentes o revolucionarios, motivaciones políticas, apoyo de la población, capacidades y limitaciones políticas, militares y logísticas, formas de organización, dirigentes y personalidades en torno a ellos, capacidad

de movimiento, financiera y de inteligencia, formas y métodos de reclutamiento, armamento y capacidad táctica, redes de abastecimiento, etc. Destaca o pone énfasis en las formas y principios organizativos, capacidad para establecer alianzas, definir qué es lo que le da más peso, si lo militar o lo político, para determinar vulnerabilidades.

Cada elemento conocido o capturado es sometido a un estudio psicológico minucioso para determinar los puntos del quiebre ideológico. La labor de inteligencia se realiza con el respaldo del desarrollo tecnológico, la técnica y la tecnología, están al servicio del guerrero contrainsurgente.

La contrainsurgencia norteamericana plantea como punto nodal de ésta “ganar a la población”, es el principio sustancial de la contrainsurgencia de “ganar mentes y corazones” para sostener la dictadura del capital.

El propósito político de la contrainsurgencia imperialista es sostener y apuntalar gobiernos policíaco militares proimperialistas, sostener contra viento y marea los intereses del imperialismo norteamericano y mantener vigente al modo de producción capitalista.

Las operaciones militares contrainsurgentes descansan en la táctica de “cazar-matar”, una técnica para ubicar y aniquilar “enemigos”, aquí es donde descansa la explicación de las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales como prácticas de contrainsurgencia.

El principio general de la contrainsurgencia descansa en la relación del imperialismo como gendarme mundial por designación divina y la de la “nación huésped”, es decir, encabezada por un gobierno títere o proimperialista. El primero patrocina la guerra y el terror de Estado, el segundo pone los hombres y las víctimas para derrotar la insurgencia de la “nación huésped”.

Las operaciones psicológicas están enfiladas a moldear la opinión pública en función de los intereses del imperialismo y los promotores de la guerra contrainsurgente; tienen por objetivo ganar las “mentes” de la población y así quitar base política del “enemigo interno”. Se traduce en la dictadura de opinión, en la existencia de mercenarios de la comunicación, en la construcción de “expertos de opinión” que refuerzan la dictadura de opinión el cerco y el terrorismo mediático.

El otro principio es la “flexibilidad” en el combate para adaptarse a cualquier

VIII. Terrorismo de Estado y la contrainsurgencia en el Siglo XXI

circunstancia, en cualquier momento y en cualquier lugar “oscuro” del mundo; el imperialismo norteamericano lo logra a partir de la creación de más de 1000 bases militares en 150 países, pequeñas y disimuladas (nenúfares) que le permiten ejercer su hegemonía unipolar.

El combate al narcotráfico entra dentro del espectro de la GBI, constituye una cortina de humo para encubriarla, de esa manera el terrorismo de Estado pasa disimulado y desapercibido, diluido en la violencia que se deriva del enfrentamiento entre cárteles. En realidad, los grupos denominados cárteles de la droga operan en torno a la contrainsurgencia, operan como una expresión paramilitar, piezas desechables de la violencia de Estado cuando dejan de ser útiles.

El combate al narcotráfico es una mascarada para encubrir la guerra contra el pueblo, como fenómeno desde y para el Estado genera profundas consecuencias, entre ellas la descomposición del tejido social y la lumpenización de la sociedad. La guerra contra las drogas es el parapeto ideal para militarizar el país y la sociedad, para dispersar la violencia de clase, para disimular el terrorismo de Estado.

El fenómeno del narcotráfico pudre el tejido social, agudiza el fenómeno de la violencia que brota de la descomposición de la sociedad, en ese marco se facilita la contrainsurgencia para someter a la sociedad por medio del terror Estatal en donde es parte sustancial el paramilitarismo.

Los grupos paramilitares descomponen el tejido social, incrementan la descomposición y el parasitismo social; los programas asistencialistas también contribuyen a la descomposición del tejido y engendran el parasitismo social; paramilitarismo y programas asistencialistas son parte sustancial de la contrainsurgencia.

La doctrina de la contrainsurgencia norteamericana la vemos con nitidez en Colombia en la lucha contra las FARC, el Estado colombiano es el “gobierno huésped” y el imperialismo norteamericano el asesor en contrainsurgencia, la táctica nodal utilizada es el paramilitarismo y la desinformación a través de la guerra psicológica para deslegitimar a las FARC como *narcoguerrilla*.

A la estrategia y táctica contrainsurgente promovida por el imperialismo norteamericano se le opone la *estrategia y táctica de la resistencia popular*, ésta ha demostrado su eficacia en el campo de la lucha de clases y ha permitido enfrentar y derrotar burguesías locales y al mismo tiempo al imperialismo.

**IX. ANEXOS:
ARTÍCULOS
PUBLICADOS EN *EL*
INSURGENTE
(2021 A LA FECHA)**

El insurgente

Año 25 / No. 213 / Diciembre de 2021

EL PODER JUDICIAL Y LA CONTRAINSURGENCIA

La doctrina contrainsurgente se aplica aún como parte de la política de gobierno, en su forma, desarrollo y ejecución adquiere ciertos matices. En cada junta administrativa sin perder su objetivo, el de destruir fuerzas organizadas del pueblo y evitar en lo posterior su resurgimiento.

El poder judicial siempre ha sido un medio físico para hacer efectiva la doctrina de la contrainsurgencia, a través de él se procura un estado de derecho que criminaliza la condición de ser pobre y judicializa tanto la organización y la lucha del pueblo que transita fuera de los marcos de la corporativización.

Cada carpeta de investigación que elabora la fiscalía general o las fiscalías estatales; el expediente jurídico que se arma contra organizaciones populares y luchadores sociales sostienen como característica jurídica la vinculación de la lucha de las masas con supuestos delitos del fuero común, además establecen de manera burda la conexidad de organizaciones del pueblo con la delincuencia organizada.

Cuando se judicializa tanto la organización como la protesta popular tiene un fin, el cometido de crímenes de Estado, ejemplos están al por mayor en todo el país, un botón de muestra es Guerrero y Oaxaca, organizaciones populares han sido criminalizadas, judicializadas, perseguidas y víctimas de la violencia de Estado durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña.

En ese contexto muchos luchadores sociales han sido víctimas de desaparición forzada y ejecución extrajudicial, otros tantos fueron encarcelados por motivos políticos; pueblos enteros fueron desplazados de su entorno, en conjunto, concreción de la violencia contrainsurgente que se avaló desde las instituciones del poder Judicial.

En dichos sexenios la violencia contra el pueblo no tuvo límites, se fincó en el terrorismo de Estado como política de gobierno; la Procuraduría General de la República (PGR) destacó en la elaboración de carpetas y expedientes inculpativos para crear falsos culpables al por mayor, con el propósito de allanar el camino para la ejecución de planes contrainsurgentes.

Hombres del régimen como Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino en aquel tiempo fueron los responsables de instrumentar dicha política, fueron quienes promovieron la creación de carpetas y expedientes contra el pueblo organizado, sobre la base de éstas se justificó la violencia de Estado que se cebó en organizaciones populares y luchadores sociales.

Irónicamente las mismas carpetas y expedientes fincadas en la injusticia y la calumnia son utilizadas por la actual Fiscalía General de la República y las fiscalías de los estados como punta de lanza contra organizaciones populares y luchadores sociales, el resultado es la existencia de presos políticos en la actual junta administrativa.

El carácter contrainsurgente se revela en la motivación política en cada una de las carpetas y expedientes que son utilizados como punta de lanza de la represión; a la organización popular se equipara como organismo criminal y entorno de la delincuencia organizada; y, al poner al pueblo organizado en vínculo con el “terrorismo y el narcotráfico”, en eso consiste la conexidad.

A través del expediente jurídico se desarrolla ofensiva política contra los que realizan crítica política al régimen y se organizan por la transformación radical de la sociedad, a éstos se les proyecta como criminales, como delincuentes y si eso no funciona, como terroristas, como narcotraficantes. Subyace la política que sostuvieron Calderón y Peña, el estado de derecho no ha sido modificado, por el contrario, adquiere un carácter más oligárquico.

En ambos gobiernos, la Unidad Especializada Contra el Terrorismo, Explosivos y Acopio de Armas, el testigo protegido y la falsificación de pruebas fueron el medio concreto para materializar la contrainsurgencia desde lo jurídico.

Una herencia bendita a la que la actual junta administrativa no ha renunciado, por el contrario, se da manga ancha y carta blanca para que todo el andamiaje contrainsurgente opere en lo judicial y lo policiaco militar.

Lo acontecido en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Hidalgo y Guanajuato son el ejemplo que ilustra la aplicación de la doctrina contrainsurgente, la violencia que azota a dichas entidades tiene ese carácter.

El estado de derecho es de esencia burgués, con la aplicación de viejas y nuevas leyes se ejerce la opresión política y se justifica la represión, sea masiva o selectiva, no deja de ser violencia de clase.

La esencia del estado de derecho legaliza la injusticia e iniquidad, asimismo,

avala el autoritarismo; instituciones y hombres del poder Judicial en esencia son tribunales inquisitorios y verdugos del pueblo, éstos se alimentan de él a través de sueldos onerosos.

En tal situación el pueblo tiene que luchar contra dicho poder y voluntad de los burgueses, sin omitir que las leyes son expresión de intereses de clase. El funcionamiento del poder Judicial expresa su papel en el engranaje de la opresión política.



El insurgente

Año 26 / No. 217 / Junio de 2022

MASACRAR AL PUEBLO: PRÁCTICA CONTRAINSURGENTE

La masacre contra el pueblo organizado es parte del terror que el Estado burgués mexicano tiene como práctica de su política contrainsurgente. El crimen por su natura es atroz, pero adquiere rostro fascista cuando el Estado lo utiliza como mecanismo de opresión y sevicia contra las masas organizadas que desarrollan crítica contra el régimen.

Por décadas la máquina burocrática militar reproduce un patrón criminal para perpetrar masacres contra el pueblo. Como punto de partida identifica al conjunto de sujetos políticos organizados como presas asechadas; acto seguido, desarrolla una campaña de criminalización, calumnia y tergiversación contra la futura víctima, es decir, ablanda el terreno con desinformación y propaganda; el opresor planifica el operativo y perpetra el crimen; a continuación, el conjunto de instituciones opera en pro de la impunidad de los criminales de Estado, yuxtapuesta a la impunidad emerge la revictimización de las víctimas, el hostigamiento punitivo contra familiares y compañeros de organización; y, de nueva cuenta opera la campaña de deslegitimación y criminalización con el propósito de ablandar el terreno en aras de hacer presos políticos, perpetrar ejecuciones extrajudiciales y con ello obligar a que desistan quienes exigen justicia. Una tras otra, se reproduce la injusticia acompañada con nuevas víctimas de la violencia del Estado contra el sujeto político

y organización del pueblo.

Es connatural al Estado la impunidad, la sevicia y el cinismo a tal grado que, por medio de personificaciones e instituciones materializadas en políticos de oficio, funcionarios públicos de toda laya y sus guardianes desclasados reproducen la injusticia, la violencia institucional, la violación de derechos humanos y nuevos crímenes sobre las víctimas cual si se reprodujera un espiral ascendente sin fin de terror de Estado. El propósito de ese engranaje criminal que ejerce la voluntad de los opresores, es exterminar de la arena política a las víctimas, por ello, el opresor después de la masacre continúa con la sevicia sobre el ente político reprimido.

Son los cuerpos represivos los perpetradores de las masacres contra el pueblo organizado. En la historia del actual régimen capitalista no hay masacre contra organizaciones populares, sujetos políticos críticos, organizaciones revolucionarias y manifestantes en donde no hayan participado los cuerpos represivos, instituciones gubernamentales y políticos de oficio con funciones de Estado.

El Ejército mexicano es la fuerza represiva que se ha especializado en dicha práctica terrorista y criminal. Es él, quien a la fecha comanda la estructura contrainsurgente que opera en el país como artífice de los crímenes contra el pueblo; son los políticos de oficio en representación del poder burgués quienes legitiman, consienten y estimulan dicha política de Estado con la promoción del Estado policiaco militar.

Es el poder Judicial quien perpetua la injusticia y blinda de impunidad a quienes masacran al pueblo. Con el monopolio de la ley burguesa persigue, hostiga, incrimina e impone escarmiento a quienes exigen justicia; actúa con odio de clase y por consigna contra las organizaciones del pueblo víctimas del terror de Estado; y, con el entramado burocrático judicial cobija con la impunidad a los criminales de Estado.

Poder local y central, diferentes órdenes de gobierno y aviesos grupos de poder económico actúan juntos para que prive como norma la injusticia, con el propósito que las masacres contra el pueblo organizado queden impunes y funjan como escarmiento contra el pueblo para que no se atreva a organizar por mejorar sus condiciones de existencia y liberarse de la dictadura burguesa.

No es el Estado el único responsable del crimen, cargan con responsabilidad sus aliados naturales que vilipendian o señalan a la organización independiente como violenta, criminal, terrorista, comunista, pro guerrillera, entre otros

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

adjetivos hinchados de dolo e intenciones represoras. Ruin papel es el que juegan los enemigos del pueblo parapetados en la religión, supuestos defensores de los derechos humanos, epígonos del postmodernismo con traje de humanista, los señores promotores del pacifismo burgués y corrientes anti proletarias.

También son promotores y responsables de las masacres contra el pueblo organizado asociaciones monopolistas transfiguradas en distintos organismos empresariales y sociedades político mafiosas con careta de “sociedad civil”. Quienes obran desde dichos parapetos del poder burgués, exigen, promueven, legitiman y financian la violencia del Estado contra las masas organizadas, en todas las masacres contra ellas yace su mano criminal o su postura que justifica la perpetración del crimen.

Parte de los adictos al régimen y personeros acólitos de la dictadura criminal que oprime al pueblo mexicano, exclaman que eso de las masacres, la represión y crímenes de lesa humanidad ya no existen y es cosa del pasado. Postura rancia y cínica, la actual administración es parte del mismo Estado criminal responsable de las masacres contra el pueblo, son las mismas instituciones con la misma natura las que operan, es la misma maquinaria burocrática militar la que oprime hoy al pueblo, los criminales de Estado aún ejercen funciones públicas o se encuentran cobijados con el manto de la impunidad que les otorga la institucionalidad burguesa.

Como antaño la injusticia se reproduce sin cesar. En ningún caso de tantas masacres que enlutan por décadas al país se ha hecho justicia, ni existen visos que las acciones gubernamentales objetiven el clamor popular de justicia a las víctimas y castigo a los culpables.

Ejemplo de la ignominia contra el pueblo es el hecho horripilante que cada junio se cumple un año más de impunidad e injusticia en el cometido de tres masacres perpetradas en el mismo mes, pero en diferentes años por las mismas estructuras del poder burgués. La masacre del 10 de junio de 1971 lleva 51 años; la de Aguas Blancas, Guerrero, el 28 del mismo mes cumple 27 años; y, el 7 de junio se cumplieron 24 años de la masacre del Charco.

Los tres crímenes de Estado en mención tienen en común lo siguiente: se encuentran en el limbo de la injusticia e impunidad; los cuerpos represivos fueron los perpetradores materiales; son el resultado concreto de un plan contrainsurgente; se encuentran involucrados los diferentes niveles de gobierno; el poder judicial se ha encargado de revictimizar a las víctimas, perseguir e incriminar a los familiares

y compañeros de lucha de los masacrados; todos los gobiernos, incluido el presente, otorgan impunidad e inmunidad a los responsables; y, las tres masacres se han perpetrado con descaro y lujo de impunidad por el Estado mexicano.

En el presente al igual que en el pasado, prevalece la lógica opresora que da origen y consuma la masacre como expresión de la política contrainsurgente que ejerce el Estado mexicano; opera el engranaje institucional que reproduce e impone la injusticia al igual que la impunidad; y, es constante el riesgo de nuevas masacres en cuanto que la maquinaria burocrática militar tiende más y más al polo de la militarización de toda la vida pública del país. La pequeña diferencia en la perpetración de las masacres contra el pueblo respecto al pasado es de forma, ahora el opresor utiliza la careta de crimen organizado y se apoya más en el paramilitarismo para objetivar sus crímenes.

La enseñanza es concreta, masacrar al pueblo organizado es una forma concreta del terror de Estado con la que los gobernantes imponen la voluntad burguesa. La contramedida radica en que la violencia de la clase gobernante debe ser combatida con la violencia de las masas organizadas, inobjetable es que el mecanismo principal para la protección del pueblo y la obtención de justicia es la autodefensa popular de las masas organizadas, indudable resulta si no llega la justicia por los cauces de la institucionalidad burguesa, las masas agraviadas por la sevicia del opresor tienen el legítimo e inalienable derecho de hacer justicia con sus propias formas y medios.



El insurgente

Año 26 / No. 220 / Octubre de 2022

EMPRESARIOS Y CONTRAINSURGENCIA

La contrainsurgencia es un conjunto de medidas económicas, políticas, sociales, psicológicas y militares para contener sobre la base de violencia de clase el descontento popular; para quitar base política al movimiento revolucionario y aniquilarlo militarmente; para “ganar mentes y corazones” que no es otra cosa que doblegar conciencias con el terrorismo psicológico; y para “sacar el agua a los peces” lo cual se traduce aislar a los revolucionarios del pueblo

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

para aniquilarlos físicamente con la política de gobierno fincada en la violencia de Estado.

La táctica consiste en aplicar un conjunto de medidas diseñadas para confundir y confrontar a la base política que sustenta a los revolucionarios; el objetivo es concreto, quebrar la voluntad popular de combatir con el terrorismo de Estado, en general, antes de los golpes militares antecede el “ablandamiento del terreno”, es decir, se implementan medidas que desacreditan a los revolucionarios y la lucha que enarbolan, ubicados son aniquilados físicamente y presentados como delincuentes o infractores de la ley, se les presenta como el enemigo interno que no es considerado sujeto de derecho.

En México desde mediados de los años 60's del siglo pasado los gobiernos priistas instrumentaron la política de seguridad interna fincada en la Guerra de Baja Intensidad, de ahí se desprende la política de contrainsurgencia que cobró miles de víctimas.

Desde hace muchos años se había denunciado desde la trinchera de las armas que la política de contrainsurgencia había sido exigida por los oligarcas, denuncia que siempre fue desestimada por el mundo de la política burguesa, no obstante, en tiempos modernos investigaciones periodísticas confirman lo que tanto se negó: los empresarios mexicanos, en específico los oligarcas crearon su propio ejército contrainsurgente.

La verdad sale a flote, el PAN y empresarios mexicanos crearon en la década de los 70 del siglo pasado un grupo militar armado de ideología reaccionaria que hasta 1996 seguía activo. El Ejército Azul fincaba su financiamiento en los empresarios y la actividad del narcotráfico; tenía vínculos con la Agencia Central de Inteligencia (CIA); recibió entrenamiento en los Estados Unidos, Alemania e Israel.

Estos datos revelan con claridad que bajo la política de contrainsurgencia que asumió el Estado mexicano estaba fincada en la política contrarrevolucionaria del imperialismo y el sionismo. Ambos han entrenado y capacitado al aparato represivo mexicano, eso es del dominio público, lo que se confirma es la participación directa del imperialismo en la implementación de la contrainsurgencia y el financiamiento de ésta por la oligarquía mexicana a través del PAN, éste como partido burgués se revela en su esencia criminal y reaccionaria.

El Ejército Azul es en esencia un grupo paramilitar reaccionario tolerado por el Estado mexicano, su actuar consiste en ser el instrumento para el trabajo sucio del

aparato represivo; creado con fines contrainsurgentes para combatir al movimiento revolucionario en México y Latinoamérica, su participación en la contra en Nicaragua explica con creces su condición criminal.

Las denuncias políticas que se hicieron por el conjunto del movimiento popular y sostenidas por el movimiento revolucionario hoy adquieren dimensión, se elevan a verdad, porque el Ejército Azul reclutaba en organizaciones ultraderechistas como el Movimiento Universitario de Renovadora Orientación (MURO), en los porros de Los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), el Instituto Francés de la Laguna en Durango y Coahuila y el Instituto Tecnológico de Chihuahua, es decir, ésta era la base política de la reacción, de aquí surgieron los criminales de Estado que hoy operan el aparato represivo.

Tanto el Yunque y el Ejército Azul son organizaciones criminales reaccionarias, organismos paramilitares auspiciados por la oligarquía mexicana y alimentados políticamente por los políticos de oficio ultrarreaccionarios, he ahí el origen del señor Calderón, ahí está la fuente ideológica de donde argumentó su política reaccionaria fincada en el fetiche de la seguridad para garantizar desarrollo económico.

Su condición ultrarreaccionaria se encuentra en la fuente ideológica de donde se nutren, en el anticomunismo, si éste es su ideario, es fácil comprobar por qué los panistas son proclives a la concepción fascista.

En su concepción ideológica encontramos la defensa y difusión del racismo, ideas ultrarreaccionarias y la promoción de la subordinación a los intereses del imperialismo norteamericano.

Su concepción reaccionaria toma cuerpo en el odio manifiesto a los homosexuales, las madres solteras, al indígena, a los trabajadores, a los profesionistas progresistas, y sobre todo a los comunistas.

Pareciera que los datos fueron del pasado y que hoy no existe tal situación, no obstante, parte de la violencia que enfrenta el pueblo organizado o el que protesta es la que emana del mundo empresarial a través de sus organismos militares clandestinos, su actuar está en defensa de los intereses de las empresas mineras y madereras en el norte y el Sur-Sureste del país.

La violencia reaccionaria adquirió legalidad en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, el primero desde sus rasgos cantinflescicos dio carta blanca para que la cúpula policíaco militar reiniciara oficialmente una nueva oleada de contrainsurgencia expresada en una política de seguridad que ponderaba

la militarización del país; Felipe Calderón, con su política de “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia” instituyó formalmente la política de gobierno fincada en el terrorismo de Estado.

El resultado está a la vista, la política de gobierno que finca el desarrollo económico en el fetiche de la seguridad ha cobrado en dos décadas cientos de miles de víctimas, constituyen el universo de los crímenes de lesa humanidad que son a la vez crímenes de Estado.

El reconocimiento oficial de más de 105 mil desapariciones forzadas de personas nos indica la magnitud de la violencia de clase que se le dio curso legal en los gobiernos señalados, nos habla del carácter reaccionario y criminal de la oligarquía y su partido político que los representa: el PAN.

GUERRA SUCIA Y CONTRAINSURGENCIA

La guerra sucia, en realidad fue una larga campaña de contrainsurgencia elaborada y puesta en práctica por el Estado mexicano, supervisada por el imperialismo norteamericano; constituyó una política de gobierno para ahogar a sangre y fuego la inconformidad popular, así como la lucha revolucionaria que era producto de la primera.

Fue violencia de Estado desatada contra pueblos, comunidades y ciudadanos de diferentes sectores sociales que eran considerados base política de los revolucionarios, conocidos éstos con el nombre genérico de guerrilleros.

El movimiento guerrillero o los grupos armados en realidad constituyeron la organización de la inconformidad popular, es la expresión cualitativa de las formas de organización y lucha de nuestro pueblo en la trinchera del movimiento revolucionario.

La concepción de seguridad interior se trocó en un período de violencia de Estado que cobró miles de víctimas, más de mil detenidos desaparecidos documentados, miles de asesinados por los policías y militares que en esencia son ejecuciones extrajudiciales, miles de detenidos injustamente.

La acción criminal de los agentes del Estado se realizó con el respaldo de los tres poderes de la nación; el instrumento para su objetivación lo fue el aparato represivo bajo la supervisión del Ejército mexicano; en específico dicha tarea de masacrar al

pueblo organizado recayó en las unidades especiales de contrainsurgencia, como se les conocía en ese tiempo, contraaguerrilleros.

Hoy se recogen testimonios verídicos sobre fusilamientos “en caliente”, asesinatos a mansalva, desapariciones masivas, detenciones masivas de habitantes de comunidades campesinas en Guerrero, innumerables masacres que en su momento no se denunciaron pero que con el tiempo emergen como mudo testigo de la violencia de clase contra el campesino que solicitaba tierra, “el indio” que defendía la suya, el estudiante que pedía educación gratuita, el profesor que exigía derechos laborales, el colono que solicitaba vivienda.

En cada expresión de violencia denunciada en su momento o que hoy emerge encontramos la mano criminal del ejército y las diferentes corporaciones policíacas, así como de los grupos paramilitares que se expresaban en los grupos de gavilleros de ese tiempo, como también en los grupos de “mariguaneros” que operaban bajo la tutela del Ejército mexicano.

La violencia de Estado fundada en la Guerra de Baja Intensidad (GBI) la encontramos en “el indio” torturado y “escarmentado” públicamente o colgado a la orilla del camino, en el representante comunal o ejidal asesinado por las balas certeras del francotirador del batallón de paracaidistas, en los vuelos de la muerte donde fueron arrojados al vacío a quienes constituían pueblo organizado.

Los crímenes que se cometieron en el período de la mal llamada guerra sucia fueron cometidos por el Ejército mexicano, la policía judicial y la policía política, todo reglamentado bajo el principio de la guerra contrainsurgente.

Y en efecto, el pueblo organizado, las víctimas de la violencia de clase, los sobrevivientes de la campaña de contrainsurgencia, el movimiento revolucionario, el sujeto político consciente y el sujeto revolucionario conocemos con exactitud quién es la víctima y quién es el victimario, éste siempre ha sido el agente del Estado.

Querer elevar al victimario a héroe nacional o que sea reconocido en la memoria colectiva es una maniobra política que atenta contra la dignidad de las víctimas, las revictimiza; es una pretensión ruin que ensucia el recuerdo de las víctimas de la contrainsurgencia, los militares o agentes policíacos que cayeron en dicha cruzada contrainsurgente no son héroes, son criminales de Estado y así se les debe recordar.

Todo militar que aún no ha perdido su origen de clase, que preserva dignidad y que aún no ha sido ideológicamente desclasado debe tener claro que en el acto de

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

fusilar o asesinar a campesinos, indígenas, estudiantes, trabajadores de la salud, a obreros no tiene nada de heroico, en ello no hay decoro, no hay dignidad del guerrero.

En cada crimen cometido contra el pueblo organizado no hay promoción en el escalafón que hable de valentía, por el contrario, constituye un acto ruin y cobarde porque se asesina a mansalva a un pueblo desarmado que protesta sea por hambre o desigualdad, que exige justicia social.

Miles de víctimas se registraron en este período de violencia, reclaman justicia, ésta debe darse sin regateo, de otra manera, resultará nuevamente una simulación, un ardid político, una expresión mediática.

Que hoy se diga por parte de los victimarios que no hay pruebas materiales que confirmen que el Ejército sea el responsable de fusilamientos, de ejecuciones extrajudiciales, de toda la violencia que azotó las regiones donde había base política del movimiento revolucionario, que nieguen su participación constituye en sí la confirmación.

El contexto histórico que vivió el país en ese período consistió en que el ejército por ser la columna vertebral del Estado mexicano actuó tal cual es, un instrumento organizado y armado para esparcir la violencia de los explotadores, lo que no es otra cosa que la violencia de Estado.

Ese actuar devela su condición y origen histórico, el Ejército mexicano es por naturaleza criminal, su actuar está fincado en la política de seguridad interior, por consiguiente, su actuar está orientado contra el pueblo organizado por considerar que quien protesta “afecta al alto mando”, es decir, atenta contra el interés burgués.

Los miles de testimonios de las víctimas que se han acumulado al paso de los años hoy se deben transformar en miles de acusaciones legales contra el Estado y el aparato represivo; las miles de hojas que recogen el sentir de las víctimas se deben transformar en miles de pruebas que permitan el enjuiciamiento de los criminales que actuaron bajo la aquiescencia del Estado mexicano.

¡JUSTICIA, JUSTICIA! Es lo que exige el pueblo organizado; es el grito de protesta de las miles de víctimas de la violencia que emana de toda la estructura del Estado; es el clamor de los familiares de las víctimas que en esencia también son víctimas revictimizadas.

El insurgente

Año 27 / No. 222 / Enero de 2023

ESPIONAJE COMO HERRAMIENTA CONTRAINSURGENTE

En México se aplica la contrainsurgencia, es parte de la política del Estado burgués que responde al interés imperialista. Se materializa en la aplicación de medidas que trascienden sexenios y partidos electorales en la administración del poder burgués.

La contrainsurgencia se enfoca en eliminar la voluntad popular de combatir, la lucha de los explotados y oprimidos por su emancipación. Por medio de dispositivos de control territorial, familiar, censos, control de carreteras, registros de identidad, biométricos, telecomunicaciones se busca aislar a las fuerzas revolucionarias de las masas inconformes. Es la guerra burguesa contra el pueblo para que se someta a la lógica capitalista.

Medidas económicas, políticas y sociales que se aplican como política de gobierno, como el desarrollo de los programas asistenciales, que no resuelven sus condiciones de vida, sino que lo someten a la dependencia burocrática y la descomposición social.

Institucionalizadas por diferentes estructuras del Estado, tiene como principal operador las fuerzas policíaco militares, que la desarrollan por medio de “ganar corazones” y exterminar a las fuerzas revolucionarias que avivan la inconformidad popular y la trasforman en crítica política. Por medio de las fuerzas especiales del ejército y la marina, las instituciones policíacas municipales, estatales y federales, la Guardia Nacional, los grupos paramilitares, los cuerpos ministeriales se aplica y extiende la violencia burguesa, el control demográfico y la descomposición social.

El espionaje es una herramienta común dentro de los Estados burgueses como medida contrainsurgente. Es obtener información de manera secreta de las fuerzas políticas contrarias a los intereses del poder burgués. Por medio de la intervención de telecomunicaciones, la infiltración policíaca, agentes encubiertos como periodistas o de asociaciones civiles o gubernamentales.

Se aplica desde las instituciones burguesas, un ejemplo es el Centro de Estudios Gubernamentales (CEG) en tiempos de Diódoro Carrasco en Oaxaca, avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

Práctica que se continúa aplicando en la presente administración, a pesar de los dichos del representante del Ejecutivo federal de que “el gobierno ya no espía”; son diversas las evidencias del espionaje político contra organizaciones populares, fuerzas opositoras y periodistas.

Fenómeno que evidencia el carácter del actual gobierno y la continuidad que representa en el aseguramiento de los intereses burgueses y el combate a la voluntad popular de combatir. Devela el papel que ocupa el Ejército mexicano en esta actividad y el poder que cada vez más acapara en la vida económica, política y social. Se desenmascara el carácter demagógico del actual gobierno y del partido electoral en el poder, porque su actuar como Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es el mismo que el actuar del extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), pervive el órgano de inteligencia del Estado, espionaje y concentración de información para la contrainsurgencia.

En el 2017, Morena formuló su proyecto de nación 2018-2024, donde pone como objetivo alcanzar la justicia con el fortalecimiento de la inteligencia, en su apartado Sociedad segura y Estado de Derecho, en el inciso 4, se refiere que: La inteligencia se utilizará para la seguridad ciudadana y la procuración de Justicia y se eliminará el espionaje político.

Al arribar al poder no se desmanteló el órgano de contrainsurgencia del Estado, se remozó con el cambio de nombre y continúa operando en actividades de espionaje político, al igual que el fortalecimiento de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y el “proceso de consolidación” de la GN como principal fuerza de seguridad.

Se fortalece con el actual proceso de militarización que vive el país, la inversión que se destina a la principal fuerza policiaco militar que apuntala a la actual administración suma más de 50 mil millones de pesos entre 2022 y 2023.

En este sexenio se mejora la infraestructura y se compra equipo enfocado para el espionaje colocado a lo largo y ancho del país con fines contrainsurgentes, bajo el argumento de la lucha contra la delincuencia organizada.

Las tecnologías de reconocimiento facial colocadas en terminales, la recolección de datos biométricos, la compra de equipos de geolocalización y de intervención de radio, aparatos de barridos de señales, sistema de monitoreo de redes sociales, laboratorio de desbloqueo y extracción de teléfonos representan tecnología diseñada para la vigilancia y obtención de información para la contrainsurgencia.

La práctica del espionaje en teléfonos, acceso a la memoria del teléfono, intervención de comunicaciones, desbloqueo y análisis de información en celulares es el medio técnico por el cual el Estado aplica el espionaje como política contrainsurgente. Lo evidencia el gasto de mil 927 millones de pesos en tecnologías de inteligencia e intervención de comunicaciones.

La reiterada utilización del spyware Pegasus en el presente sexenio, la compra reciente de programas similares para la intervención telefónica y el control que tiene el ejército sobre estas tecnologías es práctica común del Estado burgués de los diferentes sexenios del presente siglo. Parte del fortalecimiento del Estado policiaco militar.

A pesar de las evidencias y críticas que se generan por este tipo de prácticas de Estado, la demagogia vertida en las mañaneras presidenciales es insistente, así como la defensa al Ejército mexicano, las “indicaciones” para resolver las inconformidades y críticas desde la palestra nacional se convierten en simulaciones, porque en los hechos se hace caso omiso y no se toma ninguna medida efectiva, más cuando se trata del Ejército mexicano.

El Espionaje del ejército se desarrolla desde el surgimiento del movimiento armado revolucionario y la intervención en las regiones donde consideran que existe base política de la revolución. Bajo la bandera de la labor social justifican su presencia, y desarrollan actividades de espionaje e intimidación hacia la población, enfocado específicamente contra la crítica política de las armas para neutralizarla y exterminarla.

Desde los años 90, en cada sexenio, se dota de mayor recurso económico al ejército, se impulsa la modernización de los sistemas de comunicación, se contratan equipos digitales de servicio satelital, unidades de transmisión, y tecnología con la capacidad para interceptar y bloquear telecomunicaciones. Bajo la justificación de la seguridad interna del país, el ejército busca obtener información detallada sobre ubicación, estructuras de mando, tipo de unidades, armamento, etc., de lo que consideran organizaciones hostiles, en concreto de las fuerzas revolucionarias.

Las fuerzas populares, las organizaciones políticas de masas, los órganos de combate popular deben generar los mecanismos para ubicar y exhibir a los agentes del Estado, parar la infiltración por medio de la aplicación de principios políticos y una adecuada metodología de construcción, parar el liberalismo que es vehículo del Estado para la infiltración y descomposición de los esfuerzos populares.

El insurgente

Año 27 / No. 225 / Julio de 2023

LA GBI Y EL “ENEMIGO INTERNO”

El Estado mexicano no ha cambiado su esencia de clase, pervive como el instrumento de opresión que garantiza el dominio del capital. Bajo la forma de una democracia burguesa se enmascara la dictadura del capital, asimismo, la explotación y opresión contra las clases trabajadoras.

México tiene un papel dependiente y funcional ante el imperialismo dentro de la división internacional del trabajo, su función consiste en garantizar materias primas para la producción, mano de obra barata calificada y no calificada, una economía basada fundamentalmente en las remesas y en servicios, con una industria limitada a las imposiciones del imperialismo norteamericano, que en palabras de las administraciones burguesas significa la inversión privada en nuestro territorio.

Ante las contradicciones inherentes al sistema capitalista, la voluntad popular de combatir se expresa en la existencia de la lucha de clases, la inconformidad ante la voracidad burguesa y las condiciones de explotación y opresión que padece el pueblo desembocan en esfuerzos organizativos que ejercen crítica política al régimen.

El proceso histórico busca su cauce en superar dichas contradicciones, la necesidad de la revolución social es inherente a la propia degradación del capitalismo. Ante esta realidad latente que ha significado triunfos importantes para las fuerzas revolucionarias a nivel mundial, el imperialismo creó una estrategia general para eliminar las fuerzas insurgentes, la Guerra No Convencional (GNC) o Guerra de Baja Intensidad (GBI).

La GBI es la aplicación sistemática de medidas políticas, económicas, sociales, psicológicas y militares para mermar y eliminar a las fuerzas populares y revolucionarias que pugnan por una transformación social. En México se aplica de manera formal a partir de la década de los 60, enfocado a la eliminación de las organizaciones revolucionarias que emergieron a partir de la crítica política de masas de finales de los 50 del siglo pasado.

La doctrina de la GBI la elaboran a partir de la contrainsurgencia que implementaron en Vietnam, Filipinas, Centroamérica, Chile, República Dominicana,

Brasil, etc. Los programas y su aplicación que ejercen una injerencia directa o indirecta en los países dependientes se basan en una estrategia concreta: impedir, mermar y eliminar a la insurgencia, que bajo la lógica del Estado es todo aquel esfuerzo que busca la transformación del régimen económico-político imperante, independientemente de la forma de lucha que elija.

El punto de partida de la insurgencia es la rebelión o el levantamiento contra la autoridad imperante, que significa la inconformidad y la acción ante las medidas económicas, políticas, culturales y sociales que afectan los intereses de las grandes masas, se refleja en la acción política de las masas al ejercer la crítica al Estado.

En diversos manuales norteamericanos se establece la GNC como los esfuerzos dirigidos a explotar las vulnerabilidades psicológicas, económicas, militares y políticas del enemigo, no únicamente implica la ofensiva militar, sino que busca generar condiciones adecuadas para eliminar la voluntad popular de combatir y asegurar los intereses imperialistas. Arrancar de raíz la inconformidad a base de terror y alienación.

Estrategia que implica la participación directa del Estado y sus administraciones para su ejecución, a través de la implementación y la consolidación de Estados policíaco militares en los países dependientes, que significa el fortalecimiento de las fuerzas policíaco militares, la creación o mantenimiento de fuerzas paramilitares, su despliegue en diversos territorios, la labor de espionaje y mecanismos de control poblacional, la represión como política de Estado para contener la inconformidad, el incremento de los programas asistenciales como mecanismos mediatizadores.

En México se crearon cuerpos especializados para combatir y aniquilar a las fuerzas revolucionarias, de inteligencia y operativas conformadas y entrenadas por el ejército, como lo fue y son la Dirección Federal de Seguridad, La Brigada Blanca, la Fuerzas Policial de Alto Rendimiento, la Fuerza Civil en Veracruz, los grupos especiales de la Policía Ministerial.

A la par del despliegue de las fuerzas castrenses se aprueban normas dentro de la legalidad burguesa, es el estado de derecho burgués que facilita el actuar de dichas fuerzas a nombre de la seguridad interior, como las reformas en materia de seguridad que se intentaron implementar en el sexenio de Peña Nieto y se concretaron en la presente administración a partir de 2020.

Incluye medidas económicas como los programas asistenciales y el recurso destinado para mermar la voluntad popular de combatir, los programas asistenciales

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

que se aplican no resuelven las condiciones de vida del pueblo, sino que lo ata a una dependencia enfermiza y exacerba el individualismo.

Dentro de la aplicación de la GBI se explota el recurso retórico, los elementos discursivos que reproducen la ideología de la dominación, que legitima el poder burgués y las medidas que implementa para mantener sujeta a las masas trabajadoras, a través de la demagogia gubernamental, los medios masivos de comunicación y los voceros del régimen.

Por medio de este último se impone uno de los principales rasgos de la contrainsurgencia, la existencia de un enemigo interno, ergo su combate a muerte; por medio de la construcción de un enemigo magnificado, omnipresente y cuasi omnipotente con el cual se justifica las políticas contrainsurgentes y la militarización.

Todo esto dirigido y aplicado desde el Estado, desde sus diversas instituciones y en específico en las instituciones castrenses, con el fin de mantener el statu quo, la sociedad en “orden” bajo los lineamientos oligárquicos e imperialistas, la permanencia de la lógica capitalista.

La GBI no se ha dejado de aplicar en los países dependientes al imperialismo, en México se desarrolla en la presente administración, se concretan planes oligárquicos y se despliegan a las fuerzas armadas a lo largo y ancho del territorio. La GBI y la contrainsurgencia no dependen exclusivamente de la junta administrativa actual sino del carácter del propio Estado burgués.

El propio sistema político mexicano, la democracia burguesa, las instituciones que integran el Estado se formaron y reproducen bajo la lógica contrainsurgente, es parte de las premisas de la política burguesa, a pesar del arribo a Palacio Nacional de Morena la lógica de la GBI dictada por el imperialismo continúa, porque las estructuras en las que se sostiene no han sido modificadas.

En Latinoamérica se implementó a través de la Doctrina de Seguridad Nacional, que es la aplicación de los lineamientos de la GBI al contexto del continente americano. Se centró en fortalecer a las fuerzas policíaco militares (en específico las militares) para expandirse en las diferentes esferas de la sociedad, un paulatino proceso de militarización que no se ocupa de la “defensa” del país contra un enemigo externo, sino del combate del enemigo interno.

La tesis del enemigo interno

Parte importante de la GBI es la construcción de un enemigo interno que depende del contexto, el proceso de las fuerzas revolucionarias, las contradicciones

y condiciones de la clase burguesa, así como sus administradores.

La construcción del enemigo interno se basa en edificar un sujeto que represente lo más negativo y nocivo para la sociedad, de acuerdo a las condiciones político-sociales cambia el discurso y la lógica de éste.

En la década de los 60-70 del siglo pasado se impuso el discurso del comunismo como enemigo a ultranza, de los agentes extranjeros y su intervención en América Latina a través de los grupos armados revolucionarios, un lenguaje fincado en falacias de que los comunistas te pedían tu mujer para compartirla entre todos, que quitaban tierra a todos, hasta que comían niños e incoherencias de ese tipo.

Sin embargo, a nivel internacional, posterior a lo sucedido en la administración de Díaz Ordaz, se catapultó a México como un espacio “amigo” de la disidencia internacional, evitó en todo momento utilizar las clasificaciones que representara el carácter subversivo de las organizaciones revolucionarias, llamándoles “gavilleros”, “asaltantes”, manejando el discurso para eliminar el sentido político y posicionar la retórica de la delincuencia.

Mientras al interior se desangraba a las fuerzas revolucionarias y se cometían desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, se presentaba a México como un país progresista y a su gobierno de revolucionario.

Posterior a los 70 se redujo el discurso del enemigo interno del comunista o el guerrillero-revolucionario, se apuntaló a un ser que tuviera la personificación de lo malvado, que fuera necesario combatir, para ello se buscaba eliminar el sentido político de las fuerzas revolucionarias y reducir las a delincuentes, entra la criminalización dentro de la estrategia de la GBI.

A la vez, las propias fuerzas policíacas creaban y desarrollaban las mafias que posteriormente se les conocería como delincuencia organizada y los cárteles del narcotráfico. Grupos funcionales que respondían a los intereses de grupos de poder económico y político, intereses de funcionarios y jefes de las fuerzas policíaco militares.

Así se empezó a posicionar al enemigo interno de la magnificada delincuencia organizada y el narcotráfico, que tiene origen desde el Estado y que es promovido por éste. Hasta la actualidad este discurso continúa siendo la justificación para la implementación de la política contrainsurgente y principalmente para incrementar la presencia de las fuerzas policíaco militares en las calles.

La estrategia de la GBI consiste en crear a un enemigo interno y representarlo

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

continuamente en el discurso y en su accionar, presenta la necesidad de eliminarlo por todos los medios que tenga a su alcance. Así se implementó a inicio del presente siglo y se formalizó a partir de la declaración de la “guerra contra el narcotráfico”, donde se cometieron miles de crímenes de Estado bajo el subterfugio de daños colaterales.

La justificación de la guerra contra el pueblo como parte de la guerra contra el narcotráfico es parte de los estatutos de la escuela norteamericana que se aplicó con el Plan Colombia. Lo real es que no se termina con el tráfico de narcóticos ni el negocio subterráneo del tráfico y venta de dicha mercancía.

La propia tesis del Estado fallido permitió en este país sudamericano la intromisión de estructuras de inteligencia y militares norteamericanas en las instituciones gubernamentales colombianas. Fenómeno que va a la par con el crecimiento y simpatía de las fuerzas de la revolución, la construcción del poder político del pueblo.

Por ello se totaliza la violencia como origen y consecuencia de la delincuencia organizada y el narcotráfico, en una sociedad sin ley donde el Estado tiene la incapacidad de mermar el mal que enferma a la sociedad y requiere mayor militarización, mayores facultades de las fuerzas represivas y mayor control social.

Se da el proceso de criminalización de la protesta y la organización, es el ablandamiento del terreno que permite y estimula el cometido de graves violaciones a los derechos humanos bajo la mascarada de la lucha contra las fuerzas del mal.

La actual condición de dicho enemigo interno se conjuga con el grado de descomposición promovido por el propio Estado y producto de la crisis que atraviesa el sistema capitalista, donde la violencia se expande y se ceba contra el pueblo.

Es importante señalar el doble discurso del narcotráfico, más allá de ser exclusivamente el enemigo del pueblo, por diversos medios se le enaltece y se reproduce su imagen, forma en que se aliena al pueblo y se le sumerge en el proceso de descomposición social. Se construye como el referente de la juventud pobre, en la aspiración para mejorar sus condiciones de vida, no es de extrañar que se enaltezca en los medios de comunicación masivos a “cantantes” que hacen espectáculo con el tema del tráfico de drogas y su consumo.

La despolitización de la clase trabajadora es parte de la GBI, más aún en los sectores o zonas donde tiene o han tenido influencia las fuerzas revolucionarias,

donde pueden convertirse en base política de la revolución, se denigra a la juventud al eliminar toda expectativa de existencia y expectativa, donde la ignorancia es orgullo y la descomposición social virtud.

El insurgente

Año 28 / No. 233 / Marzo de 2024

EL TIGRE CONTRAINSURGENTE

Este año se publicaron, en forma de libro, las entrevistas que se hicieron a Miguel Nazar Haro, un criminal de Estado que se caracterizó por ser parte de la campaña contrainsurgente en México en las décadas de los sesenta a los ochenta del siglo pasado.

Se trata de la obra titulada “El Tigre de Nazar”, escrito por el periodista Gustavo Castillo García, quien le dio la oportunidad de opinar sobre diversos aspectos de su vida y su paso por la institución policial de Estado en la extinta Dirección Federal de Seguridad (DFS), sobre acontecimientos políticos de la vida política mexicana que aún hoy son temas de discusión, polémica y controversia.

En el afán de mostrar otras facetas de su personaje no es posible escapar de lo que verdaderamente representa, el de un sujeto dedicado al espionaje, orgulloso de su labor y de ejercer la violencia de clase contra el sujeto crítico y revolucionario.

Más allá de las peripecias que significó lograr tener la opinión de Miguel Nazar Haro, lo importante para quienes son parte de la escena política en la lucha por la transformación de la sociedad, es desmitificar y quitar el velo aparentemente humano de un individuo que optó por hacer de la violencia eje rector de sus convicciones y su modo de vida.

En las entrevistas de manera recurrente negó el uso de la violencia ejecutada de su propia mano a pesar de los cuestionamientos y pruebas que por escrito el autor le presentó, y con el uso de muletillas refiere que mientras fue policía político no torturó y no mató.

Una mentira que sólo trata de encubrir la magnitud de las atrocidades cometidas por la DFS y aquellas que fueron de su propia mano. La tortura fue una práctica cometida por las estructuras policiaco militares desde la década del cuarenta, en

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

la época de Nazar se generalizó y sistematizó contra el conjunto del movimiento revolucionario, y se ha hecho parte de la práctica de las instituciones castrenses, en el presente su huella se encuentra en las prácticas de terrorismo de Estado.

Nazar fue un hombre del régimen, porque cada decisión de su vida fue para evitar que el régimen político fuese evidenciado en su carácter represivo y autoritario, al que sirvió hasta los últimos días de su vida. Desde su incorporación a la DFS como policía político, como subdirector y director del organismo, al servicio prestado a los funcionarios priistas fuera de la institución, y en el silencio político que mantuvo hasta el día de su muerte.

La expresión “no soy delator” de Nazar fue un intento por llevarse a la tumba los secretos de las prácticas de tortura y asesinatos, del encubrimiento hacia el conjunto de políticos de oficio y demás hombres del régimen que lo acompañaron en la ejecución de la violencia de clase. Fue a su vez garantía de la sobrevivencia ante las constantes pugnas internas de los grupos de poder económico y político que existen en México.

Su concepción ideológica fue profundamente reaccionaria que lo hacía un sujeto servil al régimen político, que defendió a pesar de las contradicciones que pudo padecer y observar. Para él, no podía darse ni el beneficio de la duda a quienes ejercían crítica política contra el régimen, su obsesión se fincó en el ideal de una sociedad disciplinada en los preceptos del estatus quo, de la explotación y opresión.

Sentía orgullo en el proceder de los mandos militares que, al amparo de su poder superior en fuerza, terminaban con la existencia de los revolucionarios en el potro de la tortura, no negó su beneplácito de ver a los militares en el poder Ejecutivo, porque de esa manera el país estaría enteramente disciplinado. Ello devela una ferviente obsesión por una sociedad militarizada, que sólo emerge de una concepción reaccionaria e inhumana.

Era un sujeto anticomunista declarado, no ocultaba su forma de pensar y se encargó de formar y consolidar la DFS bajo esos preceptos. Ante este tipo de concepción arraigada en el sistema judicial del Estado, es innegable que la represión se haya desarrollado como parte de una práctica generalizada contra cualquier crítica u oposición políticas.

Su proceder no puede explicarse sólo por su concepción personal, él mismo destila orgullo al confirmar su formación y adiestramiento en contrainsurgencia, contrarrevolución y tácticas antiguerrilleras en Estados Unidos. Es un ejemplo de

la forma en que México sigue los preceptos del imperialismo norteamericano, de donde emana la concepción contrainsurgente para evitar, frustrar y combatir los procesos revolucionarios.

La insistencia de justificar ideológicamente su proceder criminal como “defensa de la patria”, para que el país no hubiese sido presa de Estados Unidos o de la extinta Unión Soviética, es un completo absurdo. En varias ocasiones reclama a los revolucionarios haberse ido a preparar en países socialistas, cuando él obtuvo su formación en instituciones militares y policiales de Estados Unidos.

Las expresiones de autoelogio hacia su práctica policial y criminal son muestra de una mente retorcida que gozaba con el dolor ajeno. Para él no había siquiera un ápice de cordura en la práctica revolucionaria de ese tiempo, el dolor ajeno sólo podía ser posible con aquellos que coincidían con su concepción reaccionaria.

Las causas de la movilización estudiantil y la solidaridad popular en torno al acontecimiento del 2 de octubre de 1968 no tienen razón de ser, la represión es considerada como una acción natural y racional del gobierno a la cual había que recurrir de manera indiscriminada, sin que el pueblo protestara.

A decir de él, la masacre del 2 de octubre fue un acto de provocación hacia los militares y no una forma de proceder del PRI gobierno. En palabras de Nazar los militares estaban ese día para decirles “Muchachos, deshagan esa manifestación”. Pero los estudiantes fueron los provocadores. En torno a los cadáveres de ese día expresa: “Y si me duele es porque también había soldados muertos y un general herido” (P. 67).

Esta es la tónica discursiva de un hombre que destila odio de clase contra quienes hacían crítica política, contra aquellos que luchaban por la vía armada revolucionaria. Así lo fue en torno a la masacre de 1971, donde confirma que fue un proceder institucional ejemplar que se requería para frenar el auge revolucionario y aliviar el grado de preocupación institucional.

El proceso judicial y encarcelamiento por dos años y tres meses no se comparan con el martirio y prolongados suplicios que hacían a los revolucionarios. Pese a su negación recurrente del cometido de tortura, los testimonios y denuncias de los familiares afloran en el escrutinio exhaustivo de la historia del movimiento revolucionario.

Los dos años de reclusión domiciliaria en los hechos es una forma de evitar la pena judicial y el castigo del Estado ante crímenes de lesa humanidad y una forma

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

de protegerlo por sus servicios prestados al Estado. Como hombre del régimen se le benefició con la impunidad, lo que le permitió llegar a las casi nueve décadas de existencia.

Nazar fue parte de un equipo de sujetos encargados de aplicar la violencia de clase en México, de materializar la Guerra de Baja Intensidad (GBI) quien, junto a Fernando Gutiérrez Barrios, Arturo Acosta Chaparro, Arturo Durazo Moreno, Javier García Paniagua, sumieron al país en la oscuridad de la represión y el baño de sangre.

En conjunto materializaron una larga campaña de búsqueda y aniquilamiento de las fuerzas revolucionarias en el país, crearon para tal propósito a la Brigada Blanca o Brigada Especial, compuesta por elementos de la policía, militares en activo y agentes de la DFS. El resultado de su labor contrainsurgente se tasa en cientos de detenidos desaparecidos de manera forzada, asesinatos políticos y ejecuciones extrajudiciales.

La Brigada fue el punto de partida para conformar en adelante diferentes cuerpos especializados en la caza de guerrilleros de todo el país. De ello dan cuenta archivos históricos que especifican los operativos contrainsurgentes contra el conjunto del movimiento armado revolucionario.

Es una mentira que en el caso de los desaparecidos sean a lo mucho 100, lo que sí es cierto es la existencia de fosas comunes clandestinas donde se arrojaron los cuerpos de las víctimas que pasaban por las manos del Ejército mexicano, de la DFS, de la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales (DGIPS), de las corporaciones policiacas.

La creación de la DFS tuvo un objetivo contrainsurgente, se formó con la intención de realizar espionaje a los movimientos populares, a las incipientes fuerzas revolucionarias, lo que dio vida a la estructura que hoy sigue en actividad bajo la denominación de Centro Nacional de Inteligencia (CNI). DFS, DGIPS, DISEN, CISEN, CNI son las siglas que reflejan la evolución del espionaje con fines contrainsurgentes, y del proceder institucional en la planificación del cometido de crímenes de lesa humanidad y las prácticas del terrorismo de Estado.

El espionaje se mantiene como una actividad gubernamental, la estructura que le da vida ha cambiado de acuerdo a las circunstancias políticas, sus diferentes denominaciones son parte de un mismo proceso e interés, existe para garantizar un régimen económico y político.

La descripción que hizo del entretelón de la política burguesa confirma varias cosas: que la delincuencia organizada estuvo bajo la dirección de las estructuras policíacas y militares; el PRI como partido monolítico gobernó a partir de la corporativización de las masas trabajadoras del campo y la ciudad; la supeditación de las decisiones políticas en México a los intereses del imperialismo norteamericano.

Características que en la actualidad mantienen su esencia a pesar de que el PRI no sea quien ocupe la silla presidencial. Pese a que emergen los testimonios de la época contrainsurgente, el gobierno actual mantiene la misma actitud que en el pasado, hace una defensa a ultranza del Ejército mexicano y el fenómeno de la violencia de clase tiene un carácter contrainsurgente.

La deslegitimación de la lucha revolucionaria es una característica que aflora en la recurrente argumentación de Nazar, reducir la lucha armada revolucionaria al epíteto de fanatismo es un ardid que emana de una concepción contrainsurgente. Pero si él se asumió como fanático devela la mentalidad de un hombre que guiado por premisas falsas asumió la violencia como su código moral para defender a un régimen que se sostiene por medio de la explotación económica y opresión política.

La evidencia fotográfica es aleccionadora, los libros requisados dan cuenta de la existencia del bagaje político y cultural de las fuerzas revolucionarias, la lucha armada revolucionaria tiene cimientos teóricos, y el hecho de reducirlos a fanáticos tiene el fin de justificar el proceder criminal de los cuerpos represivos y alejar a las masas trabajadoras de la revolución.

El solo hecho de tener literatura política, marxista leninista o maoísta, era condición para ser sospechoso y detenido para interrogarlo bajo métodos de tortura; el lugar predilecto fue el campo militar No. 1, aunque cada corporación represiva tenía sus propios lugares para tal fin.

Su principio contrainsurgente consistió en colocar ante la opinión pública a los revolucionarios como seres inadaptados y guiados por intereses ajenos a la voluntad del pueblo mexicano, de aislarlos del pueblo para luego cebarse en ellos y ser barridos de la faz de la tierra, de tal manera que nadie en su sano juicio protestara por tal hecho.

Su testimonio debe servir de reflexión para las fuerzas revolucionarias, para todo aquel que se encuentre en el campo de la lucha de clases en función de la lucha por la transformación profunda de la sociedad, porque nos refleja el conjunto de errores que se cometieron por parte de las incipientes fuerzas revolucionarias.

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

No existe nada de heroico en la práctica criminal de Nazar Haro y sus compañeros represores, en ellos queda expresado el carácter inhumano al que se llega producto de una mente fanática religiosa que no consentía la existencia de la divergencia política. En el proceso de deshumanización de sus víctimas al torturarlos para finalmente asesinarlos, él se deshumaniza porque reduce a un individuo que tiene una causa política a un simple pedazo de carne.

Falso que la familia de Nazar Haro haya hecho su patrimonio por esfuerzo propio, si hoy se encuentran en esas circunstancias se debe de manera implícita a la labor que desde el Estado ejercía Nazar. Su fuero fue extensivo para el resto de la familia, a pesar de que Nazar lo haya negado, fueron tratados con la condescendencia que requiere un cachorro del régimen, razón por la cual los negocios en empresas de seguridad privada fluyen sin obstáculo.

Miguel Nazar Haro como hombre del régimen, personaje clave en la campaña contrainsurgente contra las fuerzas revolucionarias de las décadas del sesenta al ochenta, murió en la completa impunidad, su encarcelamiento domiciliario no representaba un acto de justicia, sino de una simulación judicial que protege a un criminal de Estado.

Al período de la historia que se acostumbra denominar Guerra Sucia, la época que Nazar le tocó ser parte activa en la concreción de los planes contrainsurgentes, debe reflejar su contenido político, razón que lleva a plantear su denominación como Campaña Contrainsurgente en México de la década del 60 a principios del 80 del siglo pasado. La práctica de Nazar Haro como espía, policía político y torturador de revolucionarios y disidentes políticos, es prueba fehaciente y suficiente para reconocer en dicho período la aplicación de los principios de contrainsurgencia y de la GBI.

Para los revolucionarios del presente, aquéllos que sobrevivieron a la campaña contrainsurgente y quienes emergen en estos tiempos, es necesario hacer hincapié en la necesidad de asumir las medidas de seguridad necesarias en la condición de clandestinidad, como una forma de garantizar la existencia como fuerza revolucionaria.

Las fuerzas revolucionarias de la época nacían lacradas con deficiencias, aquellas que emanan del propio desarrollo político y de la experiencia del momento, el enemigo aprovechó estas debilidades y las puso a su favor. Estos tiempos requieren asumir el principio de la clandestinidad como parte inherente de

la lucha revolucionaria en la medida que el capitalismo en su fase imperialista aún está de pie y su crisis interna la hace más violenta y criminal.



El insurgente

Año 28 / No. 234 / Abril de 2024

NAZAR HARO, UNA VIDA AL SERVICIO DE LA CONTRAINSURGENCIA

Miguel Nazar Haro desde un inicio fue parte de la Dirección Federal de Seguridad (DFS), fue elemento activo de la contrainsurgencia a lo largo de varias décadas, del combate constante contra el movimiento revolucionario. Tuvo una vida de crueldad y odio fanático contra el comunismo, su finalidad: el exterminio de organizaciones revolucionarias.

Aplicó sin miramientos los métodos contrainsurgentes y anticomunistas aprendidas en la Escuela Internacional de Policía Fort Bragg, entrenado directamente por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y el Buró Federal de Investigación (FBI por sus siglas en inglés).

En los años 70, Miguel Nazar es nombrado subdirector de la DFS. Formó la Brigada Blanca como un grupo especial preparado para reprimir, asesinar, torturar y desaparecer a luchadores sociales y revolucionarios, fue uno de los principales ejecutores de la persecución y exterminio de grupos revolucionarios en los años 70-80, su sadismo fue conocido por los militantes torturados de dichas organizaciones.

Implementó nuevas técnicas de tortura, métodos inhumanos que bajo su mando infligieron en los compañeros de las diferentes organizaciones guerrilleras y luchadores por demandas políticas y sociales. Los testimonios de quienes sobrevivieron a la tortura de la DFS nos informaron sus prácticas de tortura.

El pocito, sumergir la cabeza de la víctima en una cubeta de agua o en un inodoro hasta que esté a punto de asfixiarse; el uso de la picaña eléctrica, para aplicar descargas eléctricas en partes sensibles del cuerpo humano como la lengua, genitales, ano, tetas etc.; palizas; enterrar objetos punzocortantes en las uñas de las

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

manos y los pies; estiramiento de brazos y piernas hasta sentir el desprendimiento de los miembros; violación y humillación sexual.

También aplicaban torturas psicológicas como no dejarlos dormir; aislarlos; amenazas de violación a la hija, madre, hermana; amenazas de causarles daño y asesinar a los seres queridos del detenido, etc., con la intención de destruir al individuo para lograr quebrantar su voluntad de combatir y negar su condición de ser humano.

Por nuestra labor revolucionaria conocimos la actividad de la DFS, nos persiguió como “Unión del Pueblo” en el proceso de aniquilación de los grupos guerrilleros en 1972; tuvimos compañeros perseguidos por la policía política en la ciudad en de Oaxaca y en otros estados, detectamos a varios agentes, portaban las fotos de los compañeros perseguidos y de quienes suponían que eran miembros de nuestra organización.

Logramos investigarlos, por nuestra práctica de estar en el pueblo como pez en el agua, uno de ellos salía caminando de su casa, a unas cuadas seguía en bicicleta, luego en motocicleta, en auto y llegaba caminando a su puesto de vigía, supimos que era agente policíaco egresado de la Escuela de Las Américas, un agente anticomunista preparado por Estados Unidos y comisionado para destruir a nuestra organización, por ello se le realiza un juicio revolucionario y se determina ajusticiarlo, se le conocía como “Coruco”.

Compañeros caídos en manos de esta agrupación, dirigida por Nazar, fueron salvajemente torturados directamente por él y su grupo en 1974, utilizaron métodos de tortura salvajes, a uno de nuestros compañeros le destruyeron un riñón y a Joel Silva Arestegui (el panterita), estudiante de preparatoria, lo asesinaron durante la tortura.

En los años 72-74 se acrecientan las acciones revolucionarias realizadas por los diferentes grupos armados en México, y ante este auge directamente Nazar Haro, como fiel sabueso del imperialismo, organiza y emprende la tarea de aniquilar a los grupos revolucionarios, uno de sus métodos fue infiltrar a los grupos guerrilleros. No les fue difícil hacerlo pues gran parte de estos grupos carecían de métodos adecuados que rigieran su vida interna y la seguridad de sus organizaciones, lo laxo de sus métodos de reclutamiento y la relajada disciplina permitió que la contrainsurgencia arremetiera contra el Movimiento de Acción Revolucionaria

(MAR), la Liga Comunista 23 de Septiembre (LC23S), el Frente Urbano Zapatista (FUZ), las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo (FRAP)...

Nazar Haro se jactaba de haber exterminado a los grupos guerrilleros en México de estas formas: por la delación de los militantes que caían en sus garras; el reclutamiento e infiltración de militantes a las filas guerrilleras; delación a los principales dirigentes de los grupos armados; lograr detener y meter presos a militantes o que claudicaran de la lucha armada.

Como organización nos enteramos de la caída de varios compañeros de otros esfuerzos revolucionarios en 1973-75, lo leíamos en los periódicos, y nuestra preocupación crecía, al analizar estos hechos concluimos: nuestros métodos, estrategia y táctica eran los adecuados para forjarnos como verdaderos revolucionarios y resistir y contrarrestar la represión y la contrainsurgencia. Teníamos claridad de nuestras consignas: ¡Estamos en guerra! Y la consigna fue, como toda nuestra existencia, ¡No bajar la guardia!

Fue en el año 75-77 en el transcurso del movimiento estudiantil-popular de Oaxaca que supimos de la presencia de Nazar y la Brigada Blanca y su actuación en la detención y tortura de activistas universitarios y pueblo consciente. Un Comando de Resistencia Popular de nuestra organización ubicó la oficina de la DFS en la ciudad (ubicada por la iglesia del Carmen Alto) lugar de coordinación con agentes locales e infiltrados, la prepotencia e impunidad se hacía notar en cada uno de los elementos. Con Nazar Haro al frente realizaron detenciones y torturas masivas de integrantes del movimiento estudiantil popular.

Al interrogar y torturar a cientos de activistas del movimiento estudiantil popular de Oaxaca, la pregunta que realizaban las fuerzas contrainsurgentes era constante: quiénes son los militantes de la Unión del Pueblo (UP), el propio Nazar Haro se ponía como fiera, su cara enrojecida por el coraje e impotencia ante la actitud de estos jóvenes y ciudadanos que no sabían nada y si sabían no decían nada.

Hicieron uso de infiltrados y traidores al movimiento, quienes daban nombres de quienes suponían eran miembros de nuestra Organización, papel que desempeñó con gusto integrantes del Partido Comunista Mexicano (PCM), el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) y demás grupos oportunistas, hoy enquistados en el poder burgués. De estas delaciones es como se detuvo a los principales dirigentes de la Liga Comunista,

entre los que se encontraba Ignacio Salas Obregón, conocido como “Oseas”.

Supimos por los compañeros detenidos de nuestra Organización Revolucionaria, la frustración y el coraje de Nazar Haro al no poder destruir a la UP, decía mientras torturaba, manifestaba su impotencia al no poder hacer que los compañeros delataran, sobre todo a la dirección, -¡que hijos de la chingada!- decía -¡de que están hechos cabrones! ¡no les importa nada, sus hijos, su madre, sus familias! ¡Nada! Tan fácil es que digan lo que saben y los dejamos inmediatamente en libertad- se topó con pared, prevaleció la confianza en el proyecto revolucionario de los compas fundadores y la seguridad de que quienes estaban libres ¡darían continuidad al proyecto por el socialismo!

En conclusión

La práctica como criterio de la verdad nos enseña que nuestro lineamiento político respecto a la construcción política revolucionaria, los métodos aplicados por nuestra organización a lo largo de más de 50 años de experiencia nos mantienen como fuerza revolucionaria activa y en desarrollo.

El aprendizaje de años de combate político militar contra el Estado burgués, los golpes recibidos por el enemigo y las victorias obtenidas contra éste nos permiten concluir que es posible enfrentar el aparato contrainsurgente del Estado, contrarrestarlo y avanzar resistiendo los embates criminales del poder burgués.

Como antaño sigue siendo fundamental la unidad del pueblo, que parte de la unidad entre revolucionarios, bajo la guía de un lineamiento político producto del marxismo y el conocimiento del momento político que se vive. Más allá de la construcción de la “unidad a toda costa” la necesidad, como planteamos desde la década de los 70, es la unidad en base a la coincidencia y compromiso en cuanto estrategia, táctica y metodología para hacer la revolución socialista en México.

Por diversas fuentes y testimonios se conoce que la mayor frustración de Miguel Nazar Haro fue no poder aniquilar a nuestro partido, desde nuestro origen como UP hasta nuestro desarrollo como PDPR-EPR; Nazar Haro mostró su coraje frente a nuestros compañeros, sobrevivientes a la tortura, sin poder aniquilar nuestro proyecto revolucionario, políticamente fue derrotado.

El insurgente

Año 28 / No. 239 / Septiembre de 2024

LA CONTRAINSURGENCIA PERMANECE COMO POLÍTICA DE ESTADO

Toda política contrainsurgente es expresión concreta del terror burgués contra las masas populares, en particular hacia los revolucionarios y el sujeto político crítico al régimen capitalista, va dirigida contra la población que aspira y lucha por la emancipación popular.

En México, la contrainsurgencia es intrínseca e indisoluble al Estado, permanece y es ejecutada como política de todo gobierno burgués. El sexenio de Andrés Manuel López Obrador no es la excepción, la administración no sólo cobijó con la impunidad a la estructura contrainsurgente, también la fortaleció al otorgar mayor poder a las fuerzas armadas, en particular al ejército, principal ente responsable de los crímenes contra el pueblo.

No podía suceder de otro modo, ya que, la junta administrativa que arribó al gobierno en el 2018 tiene el mismo carácter de clase que sus antecesoras, es burguesa, por más que propaló con demagogia ser un gobierno del cambio, en realidad la base económica y superestructura social del régimen capitalista siguieron su curso, caso concreto, el Estado mexicano. Los gobiernos emanados del PRI y el PAN por medio de reformas fueron moldeando la corporeidad del Estado que respondiese con mayor eficacia en la defensa de los intereses de los capitalistas, de ahí que cuando Morena fue ungida por el capital como junta administrativa, a la sociedad mexicana la subordinaba un estado de derecho oligárquico y un Estado policíaco militar.

¿Qué hizo el gobierno morenista para cambiar el producto de las administraciones que tildó de neoliberales? Nada que transgrediera el rumbo del Estado burgués, al contrario, con nuevas reformas constitucionales y mandatos presidenciales consolidó al estado de derecho oligárquico y al Estado policíaco militar, con ello, la política contrainsurgente inmanente al Estado mexicano se robustece.

La política contrainsurgente desarrollada desde antaño por el Estado mexicano no fue trastocada en absoluto por el gobierno de López Obrador. Es de conocimiento general que la columna vertebral del Estado la constituye el ejército, en consecuencia, política y andamiaje contrainsurgente lo comanda el ejército, sí,

éste lejos de ser enjuiciado por sus crímenes contra el pueblo fue premiado con mayor poder, es lógico que la contrainsurgencia cobra mayor fuero en la gobernanza del país, de tal manera que la Guerra de Baja Intensidad (GBI) es desarrollada por estructuras del Estado bajo el comando del Ejército mexicano.

Los testimonios de las víctimas, la memoria del pueblo y el actual contexto de la lucha de clases confirman que, en el país, el Estado burgués ha recurrido de manera sistemática a prácticas de terror contra el pueblo y sus organizaciones, el fin es uno solo: perpetuar la dictadura de los capitalistas a costa del martirio de los oprimidos.

El tormento que en el presente se le impone al pueblo desde las estructuras del Estado guardan relación con las prácticas contrainsurgentes y de terrorismo de Estado ejecutadas en la denominada guerra sucia, responden a un mismo canon, a la GBI. La desaparición forzada de personas es monstruosa, las ejecuciones extrajudiciales son enormes, la prisión política existe, la tortura sigue como práctica de investigación, el despojo y el desplazamiento forzado son una constante, en suma, la esencia de la fenomenología del terror burgués permanece, la forma de objetivarlo ha variado en el sentido de mayor especialización e instrumentación para ocultar la mano perpetradora, de esa manera, el Estado oculta su responsabilidad.

El Informe Final del Mecanismo para el Acceso a la Verdad y el Esclarecimiento Histórico Fue el Estado (1965-1990) presentado por la Comisión por la Verdad, confirma lo ya sabido por el pueblo; lo denunciado por organizaciones de derechos humanos de carácter independiente; lo señalado por el movimiento revolucionario y el movimiento popular, a saber, los crímenes contra el pueblo perpetrados en lo que, eufemísticamente se le denomina guerra sucia, los cometió el Estado.

En efecto así fue y así es en la actualidad, sin embargo, conceptuar el terror del Estado burgués mexicano contra las masas populares como violación grave a los derechos humanos sin hacer la conexión con la GBI, se dejan aristas esenciales del caso en estudio, es decir, el fenómeno histórico concreto en investigación se somete al reduccionismo. Los crímenes cometidos contra el pueblo de ese período son producto de la GBI, son expresión concreta del terror burgués sistematizado e instrumentado por la contrainsurgencia que a la fecha cobra víctimas.

A pesar de que en el informe se reconoce que las estructuras criminales del Estado responsables de perpetrar los crímenes contra el pueblo permanecen incólumes, no se enjuicia con objetividad los móviles políticos, ideológicos y económicos que en el presente alimentan la política contrainsurgente contra el pueblo.

El racismo, la discriminación, la pobreza y la desigualdad no son las motivaciones principales por las que se cometen de manera sistemática violaciones graves a los derechos humanos en el presente, las motivaciones son más profundas, obedecen a intereses económicos transfigurados en políticos e ideológicos y se sintetizan en intereses de clase.

Los causales reales residen en los intereses de clase que representa y defiende el Estado mexicano, dicho instrumento de la burguesía pondera al capital sobre la vida de los explotados y oprimidos, he ahí el eje de la doctrina del enemigo interno sobre la que gira el andamiaje de la contrainsurgencia como política de Estado.

Inocultable es que el amazón represor encabezado por el Ejército mexicano responsable de los crímenes contra el pueblo perpetrados en el período de 1965 a 1990 sigue en operaciones. La impunidad e inmunidad con la que proceden los cuerpos represivos, en particular, el ejército, son prueba fehaciente de la permanencia de un aparato criminal que ejecuta el terror burgués contra el pueblo, nada de la institución madre que instrumenta la contrainsurgencia ha cambiado, al contrario, en el actual sexenio sus fueros han crecido.

La petulancia institucional con la que el ejército, la Fiscalía General de la República (FGR), gobernación y hombres del régimen niegan información e instrumentan estratagemas para ocultar la verdad sobre los crímenes de Estado, es el reflejo vivo de la continuidad de la política contrainsurgente.

Otro botón de muestra de la existencia de un Estado criminal que opera con prácticas contrainsurgentes y de terrorismo contra la población es la monstruosa cifra de detenidos desaparecidos, de ejecutados extrajudicialmente, de desplazados de manera forzada y multitud de violaciones a los derechos humanos.

Todas estas formas de opresión no son nuevas, el Estado mexicano las reproduce desde antaño como doctrina de seguridad gobierno tras gobierno, para ello, hombres oscuros del régimen siguen perpetuos en las instituciones que dan cuerpo a la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado, ejemplo concreto: el actual Fiscal General de la República, Gertz Manero.

He ahí la explicación del proceder doloso de la FGR para otorgar impunidad e inmunidad a los perpetradores de los crímenes contra el pueblo. En lugar de enjuiciar al ejército se supedita a las directrices de éste; lejos de otorgar justicia a las víctimas de la violencia de Estado las revictimiza; y, deliberadamente no atrae los casos que implican crímenes de Estado o violaciones de los derechos humanos,

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

cuando lo hace los distorsiona con la intención perversa de invertir los papeles entre víctimas y victimarios.

Negar el crimen, ocultar información, no proceder contra los perpetradores, distorsionar la realidad y proteger a los criminales de Estado es parte del patrón contrainsurgente en el país. En la actualidad dicho proceder institucional es regla, la desvergüenza es tal que, el representante del Ejecutivo federal defiende lo indefendible: al Ejército mexicano, a sabiendas de que es el principal ejecutor de los crímenes contra el pueblo e instrumentador de la GBI.

¡Vaya! El respaldo a los criminales de Estado es tan desvergonzado que desde el Ejecutivo federal se pretendió desaparecer a los desaparecidos, ese proceder gubernamental demuestra la dimensión de la lógica contrainsurgente del Estado mexicano y la magnitud del desprecio que se tiene a las víctimas de crímenes de lesa humanidad.

No sólo los designados a la Comisión para la Verdad en mención se han enfrentado a obstáculos del ejército, la FGR y el gobierno, la obstrucción a la verdad y la justicia es norma institucional, ya que también, el caso de Ayotzinapa, el de nuestros militantes Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así mismo, el resto del universo de víctimas de la contrainsurgencia y terror de Estado, se enfrentan a la inmunidad e impunidad que otorga el sistema a los cuerpos represivos.

Ello sucede porque las instituciones represoras que niegan la información y obstaculizan el acceso a la verdad son el cancerbero que ha masacrado al pueblo; son los engranes del terror y contrainsurgencia en el país, su impunidad es tal que, se pasan por el arco del triunfo lo que en supuesto mandató el jefe supremo de las fuerzas armadas, es decir, queda claro que en México, el poder civil se subordina en los hechos al militar en temas de violación a los derechos humanos y terrorismo de Estado, eso es reflejo concreto de un Estado policíaco militar con especificidad contrainsurgente.

El informe presentado por la Comisión para la Verdad va a ser infructuoso para otorgar justicia a las víctimas del terrorismo de Estado y la contrainsurgencia, dos razones condenan a la comisión a lo vano en materia de justicia. La primera, su origen a iniciativa gubernamental, el propósito del gobierno nunca fue llegar a la verdad y la justicia, siempre consistió en taparle el ojo al macho y presentar al lobo como oveja; la segunda, la postura del gobierno mexicano es la contemplación

de los crímenes de lesa humanidad, desecha propositivamente la solución y transformación del fenómeno; y, la cereza del pastel, la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pretende ser omisa en la justicia a las víctimas con un “yo creo”.

Por lo visto, es claro que en el seno del Estado prevalece la misma lógica contrainsurgente que en el pasado: se planifica el crimen, se comete, se niega o distorsiona, cuando es inocultable se evade el fenómeno de una u otra forma con toda intención de eximir al Estado de su responsabilidad y se otorga impunidad e inmunidad a los perpetradores.

Ante crímenes de Estado, de lesa humanidad y víctimas del terror de Estado a modo de política, no cabe la contemplación ni acciones que dejen intactas la maquinaria del Estado encargada de planificar y ejecutar la contrainsurgencia, por ejemplo, una disculpa pública del Estado mexicano no resuelve absolutamente nada, al contrario, con ello prevalece la impunidad, lo que se requiere es la desarticulación de los órganos del Estado con funciones contrainsurgentes, por supuesto, el juicio y castigo a las personificaciones de tan monstruoso poder antipopular.

Ejemplo, López Obrador en calidad de jefe supremo de las fuerzas armadas y presidente de la República en su administración encabezó varios actos protocolarios donde el Estado mexicano pide perdón a víctimas de la violencia institucional en el pasado, ¿Qué ha cambiado respecto a la maquinaria y política que permite el cometido de crímenes contra el pueblo? Nada, la maquinaria represora perpetra más crímenes contra el pueblo y los perpetradores son cobijados con la impunidad, ello indica que, los opresores buscan el perdón para el Estado sin ser éste enjuiciado ni trastocado, al mismo tiempo exigen de manera velada que el pueblo siga soportando el flagelo del terror burgués.

El terror burgués con el que se oprime al conjunto de explotados en el país es brutal, ante esa realidad es inadmisible la tentativa del pacifismo burgués expresado en “perdón sí olvido no”, la enseñanza es: si la dictadura de la burguesía es sostenida con el terror instrumentado en política de gobierno, como es el caso de la contrainsurgencia, es justo y razonable que las masas populares víctimas de tan cruel azote, antepongan a la violencia que emana del régimen la autodefensa popular y el poder político del pueblo, es necesaria la unidad popular en torno a un programa revolucionario que lleve a la justicia popular a los criminales de Estado.

El insurgente

Año 28 / No. 241 / Noviembre de 2024

CRIMINALIZACIÓN Y CONTRAINSURGENCIA EN LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD

La Estrategia Nacional de Seguridad presentada para el presente sexenio es una estratagema de criminalización y contrainsurgencia. Esbozada en cuatro ejes, ilustra la política de fortalecer el Estado policiaco militar; emplear la tecnología para el espionaje; continuar la militarización del país y advierte como potenciales criminales a las masas trabajadoras.

Pese a la denuncia que recae sobre el ahora titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar Hamid García Harfuch, la titular del Ejecutivo federal, Claudia Sheinbaum, lo mantiene al frente de una institución cuya labor será “pacificar” el país, un personaje con un amplio historial en la labor contrainsurgente y la represión contra el pueblo, como quedó de manifiesto en el 2014 con la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa cuando estaba al frente de la Policía Federal en el estado de Guerrero.

El ardid que se usa para diseñar el plan integral de seguridad es el supuesto combate a la delincuencia organizada, bajo esta lógica el plan consiste en ampliar la mirada sobre el pueblo trabajador para ubicar al potencial delincuente, lo que sintetiza en la criminalización de la pobreza y la crítica política de las masas organizadas.

El señalamiento de que uno de los objetivos principales será combatir grupos del crimen organizado y reducir el número de homicidios en el país significa mantener un axioma en política de seguridad pública que fundamenta el ejercicio de prácticas coercitivas que criminalizan la pobreza, que justifica el despliegue de efectivos militares como medida disuasiva contra la crítica política.

En sentido estricto, esta forma de razonar y diseñar la política de seguridad pública mantiene preceptos de una concepción reaccionaria y autoritaria, no importa de qué manera se pretenda maquillar el hecho de buscar alejar a la juventud proletaria de la violencia delincuencial, en esencia, estos razonamientos criminalizan al jodido de los cinturones de miseria.

La estadística en la que se apoyan de los índices delictivos y que definen como “focos rojos” son en realidad una expresión de la violencia que emana del régimen. Son los métodos truculentos de los que se vale el capital para extraer hasta la última gota de la fuerza de trabajo del trabajador, por ello, no es con dádivas como se podrá extirpar el mal de la violencia, es con la supresión de las relaciones oprobiosas de explotación económica.

La interpretación de la realidad desde la ideología liberal burguesa es subjetiva, si hay jóvenes enrolados en la violencia delincuencia no es por fuerzas mecánicas donde ser pobre es sinónimo de delincuente, es porque este tipo de aspectos tienen origen en el modo de producción imperante y son promovidos desde los monopolios de la comunicación y las instituciones del Estado.

Los ejes que figuran dentro del plan de seguridad de la administración encabezada por Claudia Sheinbaum ilustran la concepción reformista y contrainsurgente. No hay manera de atender las causas de la violencia mientras se mantenga la propiedad privada, mientras el interés mezquino del oligarca esté en primer plano.

¿Por qué una familia en “condición vulnerable” debe ser considerada como potencial delincuente? ¿De qué manera la calidad de vida de los jóvenes los empuja a ser promotores de la violencia? Esta forma de razonar es propia de los apologistas del capitalismo, pese a la insistencia de actuar de manera diferente a los neoliberales, mantienen los preceptos que criminalizan al jodido.

La violencia emana de las relaciones oprobiosas que impone el capitalismo, al final de la ecuación se multiplica el cometido de crímenes de lesa humanidad y eleva desmedidamente los efectos de la violencia, el beneficiado es una firma empresarial o un consorcio oligárquico, ellos son los verdaderos promotores de la violencia en nuestro país.

La consolidación de la Guardia Nacional (GN) expresa el fortalecimiento del Estado policiaco militar, así como el reforzamiento de la política contrainsurgente que sostiene la “investigación e inteligencia” como elementos que derivan en espionaje a las organizaciones del pueblo, en la judicialización que ejerce todo el peso de la ley sobre el sujeto consciente.

La presente junta administrativa va a mantener el precepto de “fuera de la ley nada, por encima de la ley nadie”, visto sobre este prisma, se va a tener el cuidado de integrar adecuadamente las carpetas de investigación y así asegurar el castigo

IX. Anexos: artículos publicados en El insurgente (2021 A la fecha)

a los “delincuentes”, sin embargo, la esencia de su política estriba en que habrá mayor criminalización de la protesta y organización popular que transita fuera de los marcos corporativizantes del Estado.

Los argumentos esgrimidos caen por su propio peso, porque a pesar de que en la administración saliente se empujó a catalogar a la corrupción como delito grave, el pueblo mexicano fue testigo de cómo se protegió a Javier Corral, se cobijaron los negocios de Rocío Nalhe y se establecieron acuerdos con el clan Yunes. Por tanto, toda esta verborrea de seguridad y establecimiento de la paz no judicializa a políticos de oficio ni señores del capital.

El argumento de quien ostenta la titularidad de la secretaría de seguridad resulta banal, la desconfianza que crece en las masas populares no es únicamente hacia las corporaciones municipales, el pueblo trabajador ha experimentado que todas las insignias que conforman los cuerpos represivos atentan contra las masas trabajadoras, tienen el aval de ejercer la letalidad sin mayor trámite. La investigación de si hay responsabilidad en algún acto delictivo viene después.

Sostener que la GN actuará principalmente en las comunidades donde se ha perdido la confianza en la policía municipal es en apariencia una bufonada, en realidad expresa la intención política a través de la maniobra mediática, es el reconocimiento de imponer por métodos violentos el estado de derecho burgués.

La presente administración enaltece las capacidades de la SEDENA, para “ponerlas al servicio” de su plan de seguridad, resta decir, que esta capacidad se ha traducido en una ola interminable de violencia institucional contra las masas trabajadoras y el pueblo organizado, que se expresa en la continuidad sexenal del cometido de crímenes de lesa humanidad.

El fortalecimiento de la inteligencia militar y civil para el control social es una máxima profascista- sionista, parte de la doctrina contrainsurgente que reproducen las administraciones burguesas y jactanciosamente se presume haber aprendido del sionismo israelí. Hoy queda claro que para algunos políticos de oficio la modernidad en seguridad se traduce en millones de cámaras de alta tecnología para el espionaje y seguimiento, como sucede en la Ciudad de México (CDMX).

Las premisas que dictaminan la seguridad pública son de contenido contrainsurgente, el combate a la delincuencia es la mascarada con la que se criminaliza al pueblo y la pobreza. El pueblo trabajador puede identificar sin temor

a equivocarse a un bandido en alguna estructura de poder o firma empresarial, porque existe la certeza de que no hay riqueza en el capitalismo si no va acompañada de violencia y robo.

La realidad permite advertir que la directriz de esta política de seguridad es criminalizar aún más a quienes viven en la pobreza; la militarización en el país viola múltiples derechos constitucionales; el estado de derecho burgués se aplica fundamentalmente contra los pobres y contra quienes se organizan fuera de las estructuras gubernamentales.

Fortalecer las carpetas de investigación, identificar patrones y comprender dinámicas, emplear tecnología de vigilancia e integrar bancos de datos biométricos, son los ejemplos de que el plan de seguridad de la actual administración se sostiene en la visión contrainsurgente para tratar de anular la voluntad popular de combatir.

La participación de la cúpula policiaco militar en el gabinete de seguridad señala la existencia del Estado policiaco militar, regido por la doctrina de la GBI. Condición que está bajo el mando centralizado del Ejército mexicano, por lo tanto, la figura civil esta subordinada a dicha cúpula.

La política de la actual administración en materia de seguridad pública se apoya en mayores medidas coercitivas, en mejorar y fortalecer el andamiaje policiaco militar, en consecuencia, se advierte en lo inmediato mayor incremento de la violencia contra el pueblo.



Editorial del Pueblo
PDPR-EPR
Abril de 2025

EJECUTORES DEL TERRORISMO DE ESTADO

